

# **ANTES de que fuera OCTUBRE**

**Óscar Contardo**

# ANTES de que fuera OCTUBRE

Óscar Contardo

 Planeta

Óscar Contardo

**ANTES DE QUE  
FUERA OCTUBRE**

 Planeta

Este libro no podrá ser reproducido, ni total ni parcialmente, sin el previo permiso escrito del editor. Todos los derechos reservados.

© 2020, Óscar Contardo

v/o Schavelzon Graham Agencia Literaria

[www.schavelzon.com](http://www.schavelzon.com)

Derechos exclusivos de edición

© 2020, Editorial Planeta Chilena S.A.

Avda. Andrés Bello 2115, 8° piso,

Providencia, Santiago de Chile

1ª edición: marzo de 2020

ISBN Edición impresa: 978-956-360-719-2

ISBN Edición digital: 978-956-360-720-8

Diagramación digital: ebooks Patagonia

[www.ebookspatagonia.com](http://www.ebookspatagonia.com)

[info@ebookspatagonia.com](mailto:info@ebookspatagonia.com)

## Índice

- [1. Una promesa largamente sostenida](#)
- [2. La disciplina de los cuerpos](#)
- [3. Ráfagas de injusticia, miedo y decepción](#)
- [4. La normalidad nos fue guiando hacia octubre](#)

[Encuéntranos en...](#)

[Otros títulos de la colección](#)

# 1

## Una promesa largamente sostenida

La segunda década del siglo **xxi** en Chile comenzó con un terremoto y un tsunami devastador en febrero de 2010, y concluyó con un estallido social que remeció el país, en octubre de 2019. Un arco perfecto entre el destino de catástrofes naturales sobre el que habitamos y nuestra vocación de iras acumuladas que se van masticando en silencio hasta que repentinamente escapan en una explosión de furia.

Poco después del 18 de octubre, un extranjero que llevaba viviendo en Chile alrededor de un año me dijo: “Ustedes, los chilenos, son como los volcanes; pueden estar en silencio, parecen tranquilos y apacibles, pero repentinamente hacen erupción”. Me quedé pensando en el alcance de sus palabras, particularmente en la expresión “repentinamente”. ¿Fue todo tan repentino? ¿Era todo antes tan apacible?

La democracia recuperada en 1990, luego de diecisiete años de dictadura, enfrentó en 2019 un descontento ciudadano que hasta ese momento la clase dirigente –política, económica, social– había tratado de ignorar o más bien había desdeñado, a pesar de las advertencias sobre las groseras desigualdades que fracturan la convivencia entre los chilenos. Desde fines de la década del noventa en adelante la élite gobernante –particularmente los sectores más conservadores– fue aceptando a regañadientes la necesidad de acortar la brecha entre los más afortunados, aquellos que tienen niveles de vida equivalentes a los ciudadanos de los países escandinavos, y quienes sobreviven en la precariedad, como ocurre en ciertas sociedades africanas. Sin embargo, la respuesta siempre era la misma: lo primordial es el crecimiento, insistían, resistiéndose a que matizar las desigualdades debía ser una prioridad para evitar conflictos futuros. La cohesión de la sociedad resultaba para muchos de ellos un concepto sospechoso, o “ideológico”, y un objetivo secundario cuando el único motor de progreso que se tiene en mente es el esfuerzo individual. Bajo esa condición, la idea de comunidad o de paz social resulta irrelevante. Lo principal es generar más riqueza, explicaban, la que luego será distribuida por el mercado, los fondos que el Estado destinaba para proyectos específicos, la beneficencia o, en último caso, por acción de la fuerza de gravedad, el célebre “chorreo”.

Mientras esa discusión se llevaba a cabo, las fracturas tectónicas dividían subterráneamente la vida de los chilenos, disponiendo distintos grupos en destinos paralelos según su origen social, de una manera similar al espíritu *apartheid* sudafricano. Archipiélagos humanos con escasa conexión entre sí, viviendo en un mismo país, cruzándose de vez en cuando, pero en donde solo los miembros de uno de esos grupos podían acceder al poder. Lo que caracteriza de manera evidente a ese grupo específico que toma las grandes decisiones es su condición de clase y su origen europeo, o al menos no–amerindio, verificable en su aspecto.

La diferencia con la Sudáfrica del *apartheid* es que en Chile esa distancia, impuesta durante el periodo colonial, pasó a la república disimulada bajo un discurso oficial de homogeneidad racial que disponía a la población a pensarse a sí misma igualmente blanca y tender a repudiar cualquier raíz indígena, hasta el punto de negarla en sí mismo –aunque el espejo gritara lo contrario– y juzgarla como algo digno de burla en otros. Hubo incluso una Ley de Defensa de la Raza Chilena, promulgada en 1939, que reafirmaba esa idea fundada en la fantasía de una nación

que evita por temor y vergüenza verse en su reflejo mestizo o indígena. Un racismo escrito por las costumbres, la educación desde la crianza, pero negado con el codo por el discurso oficial. En Chile no existen leyes explícitas que separen y discriminen los distintos grupos humanos según su origen étnico, su fenotipo o la pigmentación de su piel, no son necesarias las normas; la tradición y la cultura se han encargado de hacerlo de manera eficiente y efectiva bajo la excusa de la “normalidad” que alcanza distintos ámbitos de la vida: es normal la educación segmentada según ingreso, lo mismo que la salud y el transporte; es normal que las ciudades se dividan, cada vez más, entre zonas para ricos y para el resto; es normal que el agua sea propiedad de ciertas empresas que pueden privar de ella a las comunidades; es normal envejecer en la pobreza a pesar de haber ahorrado durante toda una vida de trabajo; es normal que en la publicidad local solo aparezcan rostros nórdicos; es normal que los más pobres sean siempre los más morenos y que los puestos de poder los ocupen los más blancos.

Recuerdo notas de prensa de la televisión local durante el Mundial de Sudáfrica en donde destacaban, con asombro, las diferencias raciales según los barrios en Joahnnesburgo. Los reporteros lo describían como si en nuestro país tal cosa no existiera. ¿Son similares los rostros y cuerpos de los habitantes de los barrios más vulnerados a los rostros y cuerpos de los vecinos de los más prósperos? ¿Es casual o accidental esa diferencia?

No, no lo es.

Nuestra manera de convivir, heredada de la colonia, nos obligó a establecer una suerte de ceguera sobre nuestro propio *apartheid*, o tal vez, más que una ceguera, la imposibilidad de darle un nombre claro y preciso sin que eso agreda a los más afortunados y los ponga en guardia para contraatacar de manera violenta. Todos sabemos que el aspecto físico de los alumnos de un liceo de la periferia de Santiago es muy diferente al de los de un colegio exclusivo de barrio alto; que los rostros de los conscriptos muertos en Antuco en 2005 –después de que su superior los hiciera marchar bajo una tormenta de nieve– eran muy diferentes a las caras de los jóvenes líderes empresariales que solían aparecer anualmente en diarios y revistas. El cuerpo en Chile es una marca de origen que revela pertenencia y determina el futuro. Sin embargo, es difícil plantear estos hechos como un tema sin recibir una agresión como respuesta.

Asimismo, existen frases habituales, de uso cotidiano, que con solo enunciarlas describen el aspecto de un cuerpo, sin aludir a un color de piel o una estatura, sino a un oficio y ocupación: “Fulana tiene cara de nana (como insulto)”, “Zutano parece gerente (como halago)”. ¿Hay un rostro específico para el trabajo doméstico? ¿Cómo debe ser el aspecto de un gerente? En nuestra cultura, ambas cosas están férreamente vinculadas: el cuerpo de cada quien –su color, su estatura, la gracilidad del pelo– y el destino que le aguarda a ese cuerpo. Eso lo aprendemos tempranamente, sin que sea necesario que alguien nos lo explique; es la información que obtenemos del entorno durante la crianza.

La primera vez que leí *El príncipe y el mendigo*, la novela de Mark Twain, debí tener unos diez años. Había un detalle en la historia que me parecía muy extraño y que nunca mencioné en voz alta: el hecho de que un niño pobre pudiera ser confundido con un niño rico y viceversa. Por muy sucio que esté, por mucho barro que lleve en los pies o por muy elegante que se vista, en un país como el mío eso no podría suceder: el mundo me había enseñado que los mendigos no podían ser blancos y rubios al punto de poder suplantar a una persona rica.

La apariencia es algo que se hereda y determina. Esos dos grupos humanos –los que tienen pinta de gerente y las que tienen cara de nana– tienen la misma nacionalidad, viven bajo las mismas leyes bajo un sistema democrático, pero sus vidas están marcadas desde la cuna y por los rasgos heredados; aparte de un conjunto de símbolos inculcados por la costumbre, tendrán muy

poco en común durante su vida. En este esquema de disposición de los destinos se mezcla un universo de elementos o fenómenos que determinan nuestro porvenir: linaje, fenotipo, pertenencia, endogamia, inclusión y exclusión. Un nudo que permanece bien atado desde la colonia y que nos cuesta llegar a examinar con frialdad, menos aun ponerle un nombre, como lo hicieron en Sudáfrica. Esa falta de palabras para hablar de lo evidente tiene el efecto asfixiante de la mordaza, provoca una desesperación que se acumula en el tiempo y que, dadas ciertas condiciones, solo se expresa a través de la rabia. Hay temas tabú: se pueden hacer chistes, bromea con ellos en círculos cerrados, pero ponerlos en el plano político resulta peligroso. Hacer notar esto no es un ataque, es un llamado de atención; es insostenible pensar que una democracia sea ciega a ese tipo de convivencia y que esa manera de relacionarnos sea inocua, o al menos que no acarree consecuencias. Que no queramos hablar de algo no hará que ese algo desaparezca. A veces crece en silencio, como una criatura en un sótano abandonado que se alimenta de desperdicios y un día, cuando ya no hay espacio suficiente, decide salir a la superficie.

En 2016 el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo inició una investigación que publicó al año siguiente. El estudio se llamó Desiguales. A través de encuestas y grupos de conversación, el PNUD constató que una de las razones “más sensibles y menos estudiadas de las desigualdades económicas entre los chilenos es el trato que reciben las personas por razón de su posición en la estructura social”. Constataron que un elemento central en la forma de relacionarnos es el modo en que nos miramos unos a otros, el “sistema de la mirada” que va disponiendo un cierto trato <sup>1</sup>. Los investigadores le preguntaron a los encuestados si habían tenido experiencias de discriminación, de sentirse pasados a llevar o ser tratados violentamente; la mayoría respondió que sí, que había recibido malos tratos en situaciones cotidianas tanto por su origen social, el lugar donde vivía, cómo se vestía o por su apariencia. A esa manera persistente de maltrato la llamaban, usando una palabra que surgía espontáneamente, clasismo.

\*\*\*

A lo largo de la historia de Chile –plagada de crisis y con contadas épocas de prosperidad– ha habido períodos en donde los más pobres han avanzado en acceso a ciertos derechos y mejorado las condiciones materiales de su vida, pero la distancia entre los diferentes grupos sociales nunca se ha acortado sustantivamente; el modelo económico neoliberal puesto en marcha durante la dictadura solo intensificó esa distancia entre la cúpula y la base, agregándole dinero al sistema de distinciones de clase y disminuyendo las posibilidades de encuentro entre los más afortunados y el resto, que a su vez se diferenciaba entre sí en capas cada vez más imprecisas. Un laminado fino en el que cualquier signo de distinción contaba para menospreciar al de más abajo.

Durante la transición de los años noventa, los encargados de defender el *establishment* habían respondido a la crítica por las violentas desigualdades de manera sencilla: no negaban que existiera, pero preferían recordar que en Chile todo tiempo pasado fue peor. Argumentaban que en décadas anteriores la vida de los más pobres era aun más dura, que al menos ahora los niños no morían de diarrea ni la desnutrición era una epidemia como lo fue hasta los ochenta. Un tipo de miseria brutal y primitiva, registrada en películas como *Morir un poco* (1966), *Largo Viaje* (1967) o *El chacal de Nahueltoro* (1969). Familias viviendo en chozas o incluso en cuevas en las laderas de los cerros; niños y jóvenes mal alimentados y expuestos a todo tipo de abusos. Era un hecho que ese mundo había cambiado, hubo un avance concreto registrado en censos y cifras oficiales. Pero eso no significó librarse de la precariedad angustiosa de una vida en el borde del precipicio que debe aparentar cierta dignidad, como lo retrata Andrés Wood en los personajes de

la película *La buena vida* (2008): hombres y mujeres solitarios, endeudados, dependientes del crédito, sujetos a ser humillados por los guardabarreras del sistema, arrojados a encontrar el éxito en un campo minado de fracasos.

Durante los noventa, el acceso al consumo se masificó y para un amplio sector dejó de ser un lujo, como antes lo era comprar una lavadora, un aparato de televisión, un teléfono o un automóvil. Era posible tener cosas, viajar, incluso. Un dirigente político solía contar en sus entrevistas, como un ejemplo de los avances alcanzados, que la mujer que trabajaba en su casa encargada de las tareas domésticas había ido de vacaciones a Buenos Aires. Eso habría sido imposible algunas décadas atrás y era comentado como un signo de desarrollo. Esa anécdota tuvo su correlato público en 1998, cuando centenares de chilenos viajaron a Francia para acompañar a la selección nacional al Mundial de Fútbol. Los padres de la mayoría de los que cruzaron el Atlántico jamás podrían haber hecho ese viaje diez, veinte o treinta años antes. El surgimiento de lo que se llamó “la marea roja” –el apodo acuñado para los hinchas chilenos en el extranjero– era la expresión de ese nuevo entusiasmo que surgía del acceso al consumo, la posibilidad de pagar una travesía a Europa en cuotas que se extendían en el tiempo. ¿De qué se podían quejar entonces?

Debíamos estar agradecidos de los logros alcanzados.

A fines de los noventa entrevisté a Alain Touraine, el sociólogo francés. Yo trabajaba en el suplemento cultural de un diario y me entusiasmaba poder hablar con el autor de obras que había leído en alguno de mis cursos en la universidad. Touraine conocía bien nuestro país, había estado casado con una chilena y visitado el país en distintas épocas. En medio de la entrevista –de preguntas muy malas y pretenciosas– me dijo una frase que me quedó dando vueltas: “¿Cómo no va a ser bueno que la gente, que en los sesenta andaba descalza, ahora pueda tener una lavadora o un microondas?”. Me pareció una observación concreta, indesmentible de alguien que había conocido la miseria local de esos años y que ahora veía un nuevo paisaje: la televisión de pago llegaba a la periferia, lo mismo sucedería con internet y la irrupción de los celulares. El consumo hizo de la tecnología un asunto masivo y cotidiano.

Asimismo, en 2003 entrevisté al español Manuel Castells, uno de los sociólogos predilectos del gobierno del momento. Me sorprendió su entusiasmo por nuestro país. Recuerdo esa entrevista en particular por un comentario que podría haber sido interpretado como un halago, pero que escuché con suspicacia: afirmó que estando en Santiago le parecía estar en un país desarrollado. Estábamos en el salón de un hotel en la calle Pedro de Valdivia, esquina con Providencia, una tarde a la hora en que la mayoría de las personas termina su jornada de trabajo. Cuando me lo dijo yo fijé la vista en una ventana desde donde se podía contemplar una fila de humeantes micros amarillos recogiendo un grupo de pasajeros –empleados, estudiantes, oficinistas– que se apresuraban a subir para encontrar un asiento libre. Las micros hacían desde ahí un largo recorrido hasta las comunas del suroriente de Santiago. A todos ellos les esperaba un largo trayecto a casa y la mayoría viajaría de pie durante una hora, amontonados dentro de un bus ruidoso. ¿Pensarían ellos lo mismo que Castells?

El punto de vista de Touraine y Castells era el de personas informadas, inteligentes, autores de renombre que nos devolvían una visión de nosotros mismos halagadora, una perspectiva que el *establishment* político se complacía en escuchar en la medida que los encumbraba en la historia y llenaba de gloria en los foros internacionales: eran los responsables de un país latinoamericano que era ejemplo para el continente. Ese punto de vista fue cuidado como se hace con una planta delicada y valiosa. Hacerlo era una tarea que provocaba tal ensimismamiento, que cualquier crítica o señal que perturbaba el encuadre oficial era desdeñada o tildada de inoportuna. Había

que cuidar la democracia y sentirse orgullosos de los logros alcanzados. Era más valioso bruñir los índices macro –fuente de vanidad política para la generación que había fracasado en los setenta– que escuchar las señales de insatisfacción que adelantaran cambios necesarios para que el descontento no se transformara en una trampa.

Los argumentos que tenían eran reales, la pobreza –medida tal y como se hacía en los ochenta– había disminuido de manera progresiva. El país se movió en sus condiciones de vida, todos avanzaron uno o varios escalones, pero Chile seguía produciendo básicamente lo mismo que a mediados del siglo xx , vendiendo minerales, celulosa o fruta, actividades extractivas que dejaban una escasa huella en el desarrollo científico o tecnológico al que la empresa privada dedicaba un presupuesto cercano a cero <sup>2</sup> .

Impulsar y desarrollar nuevos conocimientos no era prioridad. Era una época para lucir la astucia en los negocios, la viveza en las pasadas por la bolsa, no para celebrar la inteligencia creativa orientada a imaginar algo nuevo y útil para todos. Había dinero fresco, pero las distancias entre los grupos sociales mantenían el mismo patrón de jerarquías subordinadas de antaño, aunque las relaciones entre ellos se tornaran más complejas por el cambio en las condiciones materiales.

Sin proponérselo, las reflexiones de quienes se congratulaban por los avances materiales seguían la misma línea argumental anunciada por el general Pinochet en el discurso con el que celebró el triunfo en el plebiscito de 1980, cuando prometió que al final del período establecido por su constitución hecha a la medida, uno de cada siete chilenos tendría automóvil y uno de cada cinco, televisión. En eso consistía el desarrollo para el régimen de Pinochet: tener cosas que en el pasado resultaban sencillamente inalcanzables para la mayoría.

Quienes defendían los avances de la transición lo hacían cerrándose a las críticas, como si esas críticas negaran el progreso logrado o mancharan una obra frágil que debía ser resguardada de todo análisis que la cuestionara u obligara a rendir cuentas. En contadas ocasiones parecían abrirse a elaborar otras metas. Según ellos, para cambiar las cosas había que seguir haciendo lo mismo, eso convertiría al país en una sociedad desarrollada. Quienes desde la propia élite política dirigente se sentían insatisfechos fueron llamados “autoflagelantes”, una palabra que transforma los cuestionamientos en azotes infligidos al propio cuerpo para sentir dolor: la transgresión a una fe religiosa que necesita remediarse a través del castigo que sigue a la culpa. Los autocomplacientes –dirigentes políticos, economistas– respondían ignorando los cambios de percepción intergeneracionales: sus argumentos parecían siempre hacer el contraste con el país que existía en 1988, un frasco de conserva al vacío. Ese era el punto de comparación. No tomaban en cuenta a los chilenos y chilenas que crecían en democracia, en un ambiente que por las mismas razones que ellos daban, había sufrido cambios; eran chilenos con mayor acceso a información y nuevas aspiraciones que en dictadura parecían inimaginables. Los autocomplacientes desdeñaban además la experiencia diaria de millones de chilenos sobreviviendo mes a mes gracias al endeudamiento crónico, acudiendo a un sistema de salud público en crisis permanente y esperando que sus hijos pudieran escapar de los escombros del sistema de educación pública en cuanto reunieran el dinero –o accedieran al crédito– para matricularlos en un colegio privado o subvencionado. Estos establecimientos privados o de copago tampoco aseguraban en sí una mejor educación; cumplían la función de aislantes sociales, espacios estancos en donde se encontraban las familias que se consideraban de un mismo nivel, brindando la tranquilidad del estatus resguardado en un país en donde egresar de un liceo era motivo de burlas y menosprecio generalizado. Fue en democracia y no en dictadura cuando se terminó por derribar la escuela pública con el impulso al sistema de copago a partir de

una modificación legal promulgada en 1993 que tenía como objetivo aumentar la cobertura. Los sectores medios abandonaron los establecimientos municipales que a su vez fueron abandonados por el Estado. El mensaje era constante: huyan de los liceos, arranquen, junten algo de dinero, háganlo por el futuro de sus hijos. Los gobiernos democráticos dejaron que lo público se transformara en sinónimo de precario y peligroso, perdiendo así el punto de encuentro entre los distintos sectores medios y los más pobres, que quedaron a la deriva, distantes del resto del país, viviendo lejos de la vista de quienes tomaban decisiones. Solo aparecían en su entorno para limpiar y servir.

Para muchos políticos, analistas y economistas esa presión cotidiana resultaba invisible, porque era una vida a la que ni ellos ni sus cercanos estaban sometidos. Seguramente, ese agobio sí formaba parte de la vida de sus empleados, conserjes o subalternos, pero a esas personas nadie les habría pedido su opinión a la hora de tomar decisiones: el contacto que la clase dirigente podía tener con ese mundo era siempre en términos de un superior jerárquico o de paternalismo, pero nunca de igual a igual, como sería con un par. En Chile, la posibilidad de un trato horizontal entre personas de distinto origen social es dificultosa, ambigua y condicionada por el ambiente del momento. Cada vez que algo escapa al orden tradicional jerárquico, la relación es puesta a prueba. Quienes tienen más dificultades para un trato igualitario son los varones heterosexuales (o que simulan serlo) de sectores privilegiados, es decir, quienes toman las decisiones, un grupo humano que en Chile es extremadamente uniforme; en general se trata de hombres –rara vez mujeres– que desconocen la experiencia de la desventaja como parte de su vida y cuya educación los ha dispuesto en ambientes cerrados, de familiaridad perpetua, en donde todo encuentro con alguien desconocido comienza con un rito de preguntas que intenta ubicar al sujeto que tiene en frente en su cartografía de redes sociales. Solo una vez que encuentra las coordenadas que identifican al otro como parte de su mundo, aceptará hablar con él en términos de igualdad y no de jerarquía. El lugar en el que a estos hombres les tocó nacer les devuelve constantemente señales de seguridad y aplomo tanto en sus decisiones como en sus percepciones. Evitan escuchar a otros porque no es necesario, les basta con escucharse a ellos mismos. La experiencia común para ellos, desde el colegio, es de avance constante sin mayores escollos en un esquema de vida que está diseñado para su propia expansión y la permanente constatación de su propia valía y la de su grupo de pertenencia. El mundo más allá de su círculo será percibido como una versión desmejorada del propio, por lo tanto, merecedor de una mirada comprensiva o compasiva, en el mejor de los casos, o de franco desprecio o temor, en el peor. Esta percepción no solo incluye a personas pobres, sino también a cualquiera ajeno a su mundo, incluso profesionales o académicos de cierto renombre pero de origen mesocrático. Ese renombre siempre estará condicionado: nunca serán tomados en cuenta como se haría con un igual con quien comparten recuerdos familiares, escolares o de antiguos veraneos. Nuevamente, la uniformidad y el horror al cambio como rasgos de convivencia.

Esta es la raíz de la gran cantidad de insultos en torno a la pertenencia social que se suele cultivar en Chile: lo distinto, por más levemente diferente que sea, debe ser enjaulado en una mofa que lo transforme en inofensivo, que desactive la fantasía de amenaza que representa. Rotos, siúticos, raros, chinas, chuscas, indios, patipelados, chanas, flaites, chulos, negros, aceitunas, resentidos, habitan en un territorio ajeno con hábitos diferentes. Las posibilidades de un trato cotidiano horizontal, sin la presión por exhibir las señales de superioridad de clases son, por lo tanto, para ese grupo de chilenos, muy escasas.

\*\*\*

El éxito del modelo neoliberal durante la transición reforzó las distancias y barreras de clase tradicionales en una sociedad como la chilena. La élite santiaguina se retiró a los contrafuertes cordilleranos hasta donde se llevaron la mayor parte de los colegios que tradicionalmente habían educado a sus hijos. A partir de los setenta, gran parte de la educación escolar de la clase alta había quedado a cargo de movimientos católicos ultraconservadores que promovían una visión del mundo desde una particular perspectiva religiosa muy diferente a la que comenzaría a tener el resto de los sectores medios y bajos. Esa visión tendría continuidad en la educación superior privada, sobre todo en facultades específicas –economía, derecho, ingeniería, medicina– de las dos universidades más antiguas o bien en instituciones universitarias formadas para asegurar de ese modo la permanencia de una comunidad, de un “nosotros” aparte, disminuyendo las posibilidades de convivencia entre la élite y el resto, a espacios y momentos escasísimos y bien delimitados. Un importante sector de la clase alta abrazó además posturas morales sobre la vida privada y la sexualidad de las personas, a contramano de la opinión mayoritaria. Durante la primera década de la transición lograron imponer sus puntos de vista resistiéndose a ciertas legislaciones –como la Ley de Divorcio que solo se concretó en 2004–, debido a una sobrerrepresentación de parlamentarios defensores de sus ideas en el Congreso, gracias al sistema binominal. El discurso de ese pequeño sector de la sociedad era además el dominante en los medios de comunicación, que apoyaron editorialmente campañas conservadoras religiosas para frenar modificaciones ampliamente respaldadas por la ciudadanía y refrendadas por expertos. La brecha entre las creencias de un grupo pequeño pero poderoso y las aspiraciones de una mayoría de chilenos se fue haciendo cada vez más notoria, llegando en ocasiones al absurdo como cuando un concierto de rock fue cancelado por las presiones de quienes consideraban a la banda “satánica”, o la época en que para frenar la posibilidad de que se legislara sobre el divorcio, un grupo conservador lanzó un anuncio de televisión en donde sostenía que los hijos de padres divorciados mentían y delinquían más que sus pares hijos de parejas casadas.

El resultado es que hasta octubre de 2019 había en Chile un discurso público dominado por un grupo cuya experiencia de vida era totalmente diferente a la de la mayoría. Un puñado de políticos, economistas y analistas que sencillamente no concebían que la vida de la mayor parte de los chilenos fuera muy diferente a la suya, es decir, una en donde la fragilidad económica y el terror al despeñadero fuera una constante que se desplegaba día a día como un ruido blanco. Una vida en donde, además, sus referentes valóricos no se levantaban sobre el eje de las restricciones a la autonomía individual ni en torno al control de la sexualidad ajena.

Hubo al menos dos autores que desde su propio territorio describieron ese malestar tempranamente con una recepción formidable del gran público: Tomás Moulian, con su libro *Chile. Anatomía de un mito*, y Pedro Lemebel a partir de sus crónicas. Pese a la popularidad que lograron –traspasando la academia y el ámbito estrictamente literario– sus trabajos fueron mantenidos en el espacio de lo alternativo, aquello que si bien puede ser valioso, está sesgado en el origen y, por lo tanto, debe ser mirado con distancia. Eran críticas atendibles, pero extravagantes porque para la mayoría se trataba de buenos tiempos que no debían cuestionarse.

\*\*\*

Releer las columnas de opinión de analistas destacados publicadas antes del estallido de octubre de 2019 es chocar una y otra vez con la negación del murmullo de fondo que cualquiera podría haber notado de convivir con el ancho mundo que solía estar invisible en los diagnósticos oficiales; existía un disgusto real, no imaginario, sino muy concreto, un malestar creciente que reclamaba la atención de los políticos. El malestar no era solo una condición ambiental difusa y

múltiple, había cifras que lo explicaban: los sueldos de un lado, el costo de vida del otro; el acceso al crédito y los niveles de endeudamiento. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, en 2018 el ingreso de la mitad de los chilenos alcanzaba los cuatrocientos mil pesos mensuales o menos (unos quinientos cuarenta dólares), en un país en donde el arriendo de un departamento pequeño de dos habitaciones en un barrio de clase media costaba en promedio en la misma fecha trescientos ochenta mil pesos mensuales. En 2018, el nivel de deuda de los hogares chilenos llegaba al 73% del ingreso disponible por ellos <sup>3</sup>, uno de los más altos de la región. Para las personas que viven con ese nivel de ingreso y esas tasas de endeudamiento, cualquier enfermedad o contratiempo laboral significa un descalabro económico que los deja en la pobreza. No son clase media, son personas que habitan al borde de un acantilado en equilibrio precario, abandonados a un sistema de salud público la mayoría de las veces hostil <sup>4</sup>, una educación deficiente y un sistema de pensiones que solo funciona para quienes perciben rentas altas y que han cotizado sin interrupciones por desempleo durante toda su vida laboral. En Chile instruirse y enfermarse es caro, reproducirse es un lujo y envejecer, prohibitivo. La vida del 99% de los chilenos es dramáticamente distinta a la del 1% más rico que concentra el 26% de la riqueza del país (CEPAL, 2019) o a la vida que lleva el 0,1% más afortunado, es decir unas diez mil personas, que se llevan el 19,5% de los ingresos del país (PNUD, 2017).

Esa brecha de ingresos y de experiencia vital no se acortó sustancialmente durante la transición. Tampoco la posibilidad de que quienes vivían en equilibrio precario lograran un respiro, sin embargo, el mensaje que recibían los chilenos para quienes la vida diaria se había transformado en una carrera de obstáculos, era que si se esforzaban lo suficiente existía la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida. Había una recompensa. Pero la realidad, los hechos que esos mismos chilenos podían comprobar estadísticamente en su entorno, es que era muy probable que al final del camino hubiera una vejez de pobreza esperándolos gracias al sistema de fondos previsionales. En la medida en que se iban sumando generaciones de pensionados con montos ridículos de jubilación mensual era muy difícil no cuestionar la promesa de futuro que el sistema difundía. Para la mayor parte de la población, esos jubilados eran sus padres, sus abuelos, sus vecinos, no eran números ni ejemplos abstractos, sino personas a las que ellos mismos debían ayudar a sobrevivir.

Los hechos y experiencias de la mayoría por un lado, los mensajes de los defensores del modelo, del otro. No era muy raro que allí se estuviera incubando algo más grave que un mero malestar. Lo realmente extraordinario es que aun tratándose de la realidad mayoritaria de los chilenos, hubiera personas que no conocieran a nadie en su entorno de iguales que sufriera ese tipo de preocupaciones. Gente que en sus relaciones familiares y sociales no se encuentra nunca con alguien con quien mantenga el trato de par, que se atienda en la salud pública, use transporte público, cuyos hijos asistan a una escuela pública, gente que no trata con otros cuyos padres vivan solo de una jubilación de AFP. Esas personas eran (o más bien son) quienes creen que, efectivamente, cualquiera puede progresar si hace los sacrificios apropiados para sus objetivos. Desde esa burbuja acristalada, el paisaje se ve diferente y se tomaban (o se toman) las grandes decisiones.

El mensaje recurrente que muchos políticos y economistas le habían enviado a los chilenos durante los treinta años anteriores al estallido era que debían trabajar duro para progresar. Lo repetían, como se hace con un refrán, personas que evidentemente nunca habían tenido que esforzarse demasiado por llegar hasta donde habían llegado, al menos no de la manera en que el hijo de un trabajador ambulante, de una pobladora del suburbio o un administrativo técnico debería hacerlo para estudiar y alcanzar la universidad bajo condiciones de vida adversas. Tal

como ocurre en otros países en donde la bandera de la meritocracia es ondeada por la derecha y cierto progresismo, quienes con más energía esparcen la idea del mérito como gran impulsor son justamente quienes nacieron y se criaron en posiciones privilegiadas que les permitieron acceder a educación y redes familiares que los encumbraron al poder. Todo indica que para ellos todas esas ventajas resultan imperceptibles a sus sentidos, sin percatarse de que cuando hablaban de “esfuerzo” están haciendo referencia a algo que para los otros significaba un asunto muchísimo más rudo que tomar el metro para ir a la universidad en lugar de hacerlo conduciendo un auto. Sin embargo, esas mismas personas suelen ponerse a sí mismas como ejemplos de resistencia para sobreponerse a las dificultades del entorno, un gesto repetitivo que revela cuán invisibles o irrelevantes son para ellos –políticos, economistas, comentaristas– las diferencias de contexto.

Una de las últimas recomendaciones en esa dirección antes del estallido de octubre la hizo Juan Andrés Fontaine en su calidad de ministro de Economía. El 8 de octubre de 2019, luego de anunciar el alza del pasaje de metro, Fontaine sugirió a los santiaguinos levantarse más temprano para evitar la tarifa de horario punta y así ahorrar dinero. Lo habitual es que las estaciones terminales del metro de las comunas más populosas se repletan apenas abren sus puertas y es común ver de madrugada personas esperando en las paradas de bus, asegurándose tomar las primeras micros que inician el recorrido con la esperanza de tomar un asiento y no tener que soportar de pie un trayecto que puede extenderse por más de una hora. Para la mayoría de los santiaguinos que viven en la periferia, la jornada comienza en la madrugada aguardando transporte, una experiencia que seguramente el economista jamás vivió; sin embargo él juzgó que era pertinente recomendarles levantarse aun más temprano. Aquella frase, junto a la del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, que llamó a comprar flores porque habían bajado de precio, aportaron la energía que faltaba para que las placas tectónicas comenzaran a moverse.

Con el paso de los días, un par de personas que conocían al entonces ministro Fontaine me comentaron en privado que esas declaraciones, o al menos lo que se infería de ellas, no correspondían a su carácter ni a su sensibilidad. Les desconcertó la declaración. Un mes después del estallido, Juan Andrés Fontaine pidió disculpas públicas por su frase sobre el pasaje del metro. El economista dijo que no reflejaba “lo que siento, lo que pienso, lo que ha sido mi trabajo”. La disculpa podía sonar confusa –¿cómo alguien hace una declaración de *lo que no piensa* voluntariamente, sin haber sido obligado?–, pero creo que Fontaine quiso explicar algo que si bien puede sonar absurdo, es coherente con el rechazo persistente que tiene cierta élite chilena a reflexionar sobre el modo en que un origen de clase distinto determina un modo de vida en Chile y con la dificultad que tiene esa misma élite para tomar conciencia de los contextos culturales, sociales y políticos cuando les resultan tan ajenos y desconocidos.

Generalmente, nos inhibimos de hablar de esas diferencias con franqueza, como un hecho de la causa, porque hablarlo significa automáticamente crear tensiones y poner en evidencia una historia que para algunos resulta amenazante y, para muchos otros, humillante. La reacción inmediata entre quienes se sienten aludidos es llamar “resentido” o calificar de “comunista” (a modo de insulto) a quien se detiene sobre esos contrastes. Sin embargo, creo que es necesario hacerlo para entender los frenos culturales de nuestra democracia.

En el momento de dar esa declaración, Juan Andrés Fontaine no midió que sus palabras – viniendo de quien venían, con su aspecto y con su nombre– eran mucho más que una simple recomendación. Pasó por alto el peso y el significado que cobraba que una persona en sus circunstancias –parte de una familia connotada, vinculado firmemente a la clase alta local, un origen que naturalmente él no eligió– hiciera un llamado a una mayoría que vivía en condiciones muy distintas a las suyas a esforzarse más madrugando. La declaración del entonces ministro

podría describirse como una especie de *lapsus linguae* del que seguramente tomó conciencia después, por eso se excusó con una frase tan oscura como “no pienso lo que dije”. El ministro, en lugar de expresar un contenido reprimido como una mala palabra o una grosería, pasó por alto la manera en que se distribuyen los privilegios. Difícilmente fue algo consciente; es probable que se tratara solamente de la desafortunada expresión de una cultura grupal que evita enfrentar una realidad que los pone a ellos en una situación extremadamente ventajosa respecto de la mayoría, y por lo tanto, relativiza su propio mérito individual. Hacerse cargo de esa realidad significa también, al menos potencialmente, poner en duda que el sitio alcanzado sea solo el fruto de la inteligencia y la calidad del trabajo desempeñado: tal vez no sea tan inteligente, tal vez solo tuvo más oportunidades que la mayoría, tal vez de haber nacido en otras circunstancias tendría que estar madrugando para tomar el primer carro del metro.

La interpretación que hizo la opinión pública de las palabras de Fontaine no fue tanto sobre su consejo concreto (madruguen para ahorrar) como sobre el contenido reprimido de la declaración: un señor de clase alta, educado en las mejores instituciones, que nunca tuvo que madrugar de lunes a viernes para ir apretujado en el metro en un viaje de hora y media de ida y de vuelta, nos dice que debemos levantarnos aun más temprano si queremos ahorrar treinta pesos; nos lo dice a nosotros, a los que no nos queda más opción que vivir en barrios alejados de nuestro trabajo, en comunas donde todo es distinto a los barrios acomodados, porque incluso el trazado del metro – en viaducto y no en subterráneo– subraya la diferencia. No se trataba solo de treinta pesos, sino de hacer como si ese monto de dinero significara lo mismo para un ministro que para el usuario diario del tren metropolitano.

Puestas las cosas en contexto, la declaración del secretario de Estado sonaba, sin duda, como una agresión, una burla que perfectamente podría haberse evitado si es que pudiéramos hablar de la realidad y abordar los hechos sin temor a caminar sobre un terreno pantanoso. De alguna manera, el inconsciente del ministro quiso soslayar la existencia de ese terreno; en lugar de enfrentarlo dijo algo que, efectivamente, no pensaba.

El modelo neoliberal promete el éxito individual como recompensa segura del trabajo duro y la dedicación. Las oportunidades están allá afuera, tómalas, esfuérzate y prospera. Para que esa fórmula funcione como un hecho de la causa para todos en un país como el nuestro, es necesario hacer un rodeo mental constante que evite enfrentar el grado en que la desigualdad condiciona la receta. ¿Qué se hace entonces? Evitar nombrarla, como si tan solo con ese gesto desapareciera. Transformar su inexistencia o irrelevancia es un asunto de fe, de adhesión a una creencia dogmática que en este caso es un modelo económico que se defiende como se hace con aquello que sostiene la propia vida, le da sentido y trascendencia al lugar en el mundo que se ocupa. A una élite intensamente religiosa le resultaba particularmente fácil adherir a un modelo económico, de un modo similar al que los feligreses más devotos abrazan un movimiento espiritual, si ese modelo reforzaba sus posiciones de poder relativo, les ofrecía bienestar, disminuyendo la exposición a situaciones inquietantes que los obligara a enfrentarse con los inconvenientes que provoca la desigualdad y la pobreza en un país como el nuestro. Tanto la fe como el modelo establecen una idea de lo “natural” o lo “normal” que no puede alterarse sin caer en un pecado o en un acto de insurrección amenazante que debe ser controlado con rigor. Lo que era bueno para los más afortunados, era bueno para todos. No hay duda posible, y si la hay, es sospechosa.

Poner entre paréntesis las desigualdades de ingreso, de trato, de respeto y de posición en la pirámide social, o derechamente anularlas como factor que determine el funcionamiento de la promesa de progreso, es un ejercicio que caracterizó los años noventa. Tenía sentido que así

fuera, porque la urgencia política era mejorar las condiciones de vida paupérrimas en las que vivía cerca de la mitad de la población hasta el último año de la dictadura. La democracia logró ese primer objetivo: durante esa década la pobreza tal y como la conocíamos históricamente en Chile, con sus brutales carencias materiales, retrocedió. Los pobres ya no deambularían descalzos por las calles, la mortalidad infantil y la desnutrición cayeron en picada. Si en 1987 el 45,1% de los chilenos vivía bajo la línea de la pobreza, en 1998 esa tasa disminuyó al 21,7% <sup>5</sup>. La antigua miseria, sin embargo, cobraría otra forma, seguiría presente en las carencias culturales con el rigor de la vida en las poblaciones, en viviendas sociales mal construidas con muros de cartón piedra, tuberías con filtraciones, habitaciones carcomidas por el moho, espacios ínfimos y hacinamiento asegurado si la familia crecía. Centenares de blocks esparcidos en zonas sin servicios públicos, ni hospitales, ni protección policial. La aplicación dogmática del modelo neoliberal tenía una cara menos amable cuando el crecimiento se contemplaba desde los bordes de las poblaciones, en las esquinas de los paraderos de micro junto a las villas de la periferia, en la urgencia de un hospital público escuchando los quejidos de un anciano sentado en una silla plástica durante mañana y tarde porque no hay camas disponibles para internarlo.

Durante la transición, la pobreza cambió el rostro, se reencarnó en una nueva forma de marginación.

\*\*\*

Entre 1979 y 1985 fueron erradicadas casi treinta mil familias pobres que vivían en los barrios del nororiente de Santiago, la zona hacia donde los capitalinos más acomodados se habían comenzado a mudar desde mediados del siglo xx. Esas familias pobres fueron llevadas en camiones militares hasta lo que en ese entonces era la periferia rural de la capital y a ciudades de provincia <sup>6</sup>.

El total de personas trasladadas equivalía a la población de Talca. La dictadura prometía darles una “vivienda” a quienes habitaban chozas de tablones y cartones en descampados junto al Mapocho. Sin ellos ahí, el valor de esos terrenos se multiplicaría. Lo que obtuvo a cambio la mayoría de las familias erradicadas fueron casetas sanitarias dispuestas junto a potreros alejados de sus barrios de origen, distantes de cualquier oportunidad de trabajo. En lo sucesivo, las políticas de vivienda en democracia continuarían llevando a los más pobres hacia lugares remotos donde vivirían todos juntos en casas tan diminutas que incluso serían apodadas con nombres de golosina. Con el tiempo, esas poblaciones serían conocidas como focos de delincuencia y centro de operaciones del narcotráfico.

Según el INE, durante la primera década de la transición, el 60% del total de viviendas construidas en Chile eran parte de programas habitacionales subsidiados. Eso significaba un avance y todo indica que un gran negocio para empresas inmobiliarias y constructoras, pero no necesariamente mejores condiciones de vida para quienes accedían a las casas asignadas a las familias de menores ingresos. Sin duda, para muchos significaba dejar atrás la miseria material o la vida de allegado en una casa ajena, pero a la larga comprobaban que también era una especie de destierro a una zona desconocida y hostil.

En diciembre de 2010 conocí las poblaciones construidas al sur de Puente Alto durante los años noventa, a costa de antiguos terrenos agrícolas. Las calles, pasajes y casas se multiplicaban como un tejido denso y gris sobre un campo reseco y polvoriento. Fui a reportear para la columna que en ese entonces tenía en un diario sobre la vida en la ciudad. Quise hacerlo luego de haber leído un informe urbanístico sobre los “guetos” —esa palabra usaba el estudio— levantados durante la transición <sup>7</sup>. La utilización de esa palabra no era casual, sino la expresión más

adecuada que encontraron para definir zonas alejadas a las que llegaron a vivir familias con un rasgo en común: todos eran pobres. Enormes barrios de viviendas sociales con servicios públicos mínimos y alejados de la ciudad. Poblaciones que además son comúnmente identificadas como zonas peligrosas en noticieros y programas de televisión dedicados a la crónica roja. Son extensiones monótonas, desangeladas, en donde abundan las botillerías y las parroquias evangélicas; no hay parques, ni plaza y aquello que en los mapas aparece indicado como “área verde”, no es más que un paño de terreno insolado que en ocasiones es usado como basural.

Recorrí calles y pasajes y hablé con vecinos a los que abordaba tocándoles la puerta o entablando conversación en la calle. Una de esas vecinas se llamaba Fabiola Méndez y vivía en la Villa Santa Catalina, a cuerdas de la población El Volcán que está junto a la población Bajos de Mena. El Volcán cobró fama gracias a la película *El chacotero sentimental* (1999). Una de las historias de la cinta se localizaba ahí; un matrimonio joven que vivía de allegado en la casa de los padres de uno de ellos quería tener sexo, pero no podía, no había una habitación para ellos, tampoco tenían dinero ni tiempo como para buscar un lugar fuera. La estrechez y la fragilidad de las construcciones –cualquier cosa que ocurría en una pieza, se escuchaba en la otra– los acorralaba.

El tema resultaba cómico hasta cierto punto, pero tenía un fondo de tragedia: familias viviendo amontonadas sin posibilidad de tener intimidad a ninguna hora del día. Puertas adentro todo es hacinamiento, la salita minúscula que de noche es el dormitorio de alguien, las habitaciones compartidas, el desagüe del baño del vecino que se escucha encima de la cocina, la ropa húmeda amontonada en invierno, el sopor del verano, mientras en la calle hay un paisaje duro, agresivo y peligroso.

En la Villa Santa Catalina había rejas en cada casa, en cada ventana, y cubriendo puertas como una mascarilla ortopédica. Los almacenes de los alrededores, por ejemplo, tenían protecciones en la entrada y en el mostrador, separando al cliente del tendero como si se tratara de una jaula. Fabiola Méndez, la vecina con la que conversé, me contó que cuando le preguntaban dónde vivía, ella evitaba nombrar El Volcán y Bajos de Mena, porque sabía que en cuanto lo dijera, la mirarían de otro modo, de un modo que no le gusta. Ella sabía notar eso en la mirada, todos lo notamos. Por eso ella seleccionaba con cuidado las referencias, y solía decir que su villa estaba en la parte alta de Puente Alto. “El Alto Puente Alto”, me dijo, riéndose de ella misma por la ocurrencia. En rigor, para un afuerino, era difícil distinguir, de buenas a primeras, dónde comenzaba su villa –una urbanización pequeña– y dónde las poblaciones aledañas. El perfil de los blocks de departamentos eran un indicio. Allí donde había blocks de tres pisos color sangre, enfrentados con una maraña de escaleras que los conectaba, el asunto se ponía difícil. Su casa, en cambio, no parecía una pila de cajones arrojada al descampado.

Fabiola Méndez me dijo que la locomoción para llegar al centro de la comuna de Puente Alto era escasa, ni qué decir para llegar al centro de Santiago, y que no contaban con servicio de cable porque nadie quería arriesgarse a ir a instalarlo. “Tampoco podemos salir de noche”.

Otro vecino con el que hablé fue Jonathan Sanzana, vivía en un block de El Volcán 2, una de las poblaciones que a Fabiola Méndez no le gustaba nombrar como referencia de su domicilio. Estaban a cuerdas de distancia, pero en su forma de ver las cosas, entre ambos había una diferencia definitiva. Jonathan Sanzana organizaba actividades para la comunidad: escuelas de fútbol, funciones de cine y últimamente una maratón como las que se corren en el centro. También le regalaba tiza a los niños de la población para que dibujaran en la vereda, y lo que los niños dibujaban con más frecuencia, eran cosas que no tenían en el barrio, cosas como árboles y pasto.

“Aquí quedó la escoba seis o siete años atrás –me explicó Sanzana– cuando mezclaron agua con aceite luego de las demoliciones de edificios mal contruidos, hubo traslados de un lugar a otro y llegó gente de otras poblaciones”. Aunque su propia familia venía de lejos, de Renca, él creía que la gente nueva era el problema. “Lo peor de vivir aquí es el estigma”.

Usó la palabra “estigma” varias veces mientras conversamos.

Hasta 2010 había 1,7 millones de chilenos viviendo en esas condiciones. El 44% de ellos de la Región Metropolitana. Solo en Bajos de Mena la población alcanzaba las ciento veintidós mil personas, equivalente a la ciudad de Punta Arenas, pero sin bancos, ni farmacias, ni parques, ni nada de lo que sentirse orgulloso.

Miles de personas enviadas a vivir avergonzadas en la última esquina del mapa.

Nueve años después, en ese mismo lugar, el estallido de octubre de 2019 se sentiría como un aullido de rabia y fuego.

\*\*\*

A mediados de los noventa la prensa escrita recogió la idea de que una nueva clase media surgía en el país. Incluso el diario *El Mercurio*, tradicionalmente orientado a los sectores de mayores ingresos, lanzó la publicación de suplementos comunales que apuntaban específicamente a los lectores de los nuevos barrios. Esta nueva clase media chilena fue localizada específicamente en dos comunas metropolitanas: La Florida y Maipú. La población de ambas había crecido exponencialmente desde fines de los ochenta y en ambas se habían levantado grandes centros comerciales con un apabullante éxito de ventas.

Hasta 1992 en Chile los grandes malls, edificios con comercio interior al estilo suburbio norteamericano, se habían construido en los barrios más ricos de Santiago. Allí también se instalaban las franquicias de comida rápida internacionales y las marcas de grandes tiendas. Lo que en los países desarrollados era considerado consumo masivo, en Chile hasta principio de los noventa tenía un rasgo de exclusividad orientado a los barrios más acomodados. Eso cambió en 1992 con la inauguración del Mall Plaza Vespucio del paradero 14 de La Florida. Con ese centro comercial surgió también más nítidamente la noción de una nueva clase media chilena al alero del consumo. Pronto, el esquema se repetiría en otras comunas de Santiago y en las ciudades más grandes de provincia, atrayendo al nuevo consumidor chileno.

Las cifras de crecimiento eran el pulso que indicaba que el corazón de la promesa del modelo gozaba de buena salud. Durante los primeros ocho años de la transición el país auscultaba con entusiasmo el ritmo de los latidos. Ese era el aspecto luminoso de la transición que ayudaba a sobrellevar la pesada carga de lo ocurrido en dictadura, una manera de correr hacia adelante y tomar distancia de los años en que los chilenos habíamos vivido bajo un régimen que no solo persiguió, torturó y asesinó opositores, sino también nos hizo vivir en la hostilidad, la desconfianza y el miedo. La mayoría de los chilenos, sobre todo quienes habían sido adultos y opositores al régimen, estaban exhaustos y temerosos de que la dictadura volviera y con ella, toda su carga.

Pinochet fue comandante en jefe del Ejército hasta 1998, asumiendo de inmediato como senador designado, calidad que tenía cuando viajó a Londres, donde fue detenido. Mientras estuvo a la cabeza del Ejército, cada vez que pudo hizo sentir su poder, con señales amenazantes para el gobierno democrático; el mensaje era claro, si me tocan a mí o a mis cercanos, todo esto puede volver atrás. Las señales de lo que significaría investigar a las Fuerzas Armadas –no solo sobre violaciones a los Derechos Humanos, sino también en el manejo de sus fondos– comenzaron al inicio de la transición con el acuartelamiento ordenado en 1990 luego de que el

diario *La Nación* publicara una nota sobre los llamados “pinocheques”, que revelaba los negocios turbios de Augusto Pinochet Hiriart, hijo mayor del exdictador, con el Ejército. El monto de dinero cuestionado en ese caso ascendía a novecientos setenta y un millones de pesos. Cuando hubo un intento de retomar el tema en 1993, la respuesta del general Pinochet fue sacar soldados con caras pintadas y en uniforme de combate a la calle. Mientras eso sucedía, el presidente Patricio Aylwin estaba de gira por Europa, tratando de convencer al mundo de que la democracia chilena era un proyecto sólido. Nuevamente, el general ganó la pulseada. A la larga, la indagación sobre los pinocheques fue amputada a machetazos por razones de Estado durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle.

El costo de desafiar al exdictador parapetado en su rol de jefe del Ejército era demasiado alto. Hubo que limitar no solo la búsqueda de verdad y justicia en torno a las violaciones a los Derechos Humanos, sino también en relación a los oscuros manejos financieros de Pinochet y su entorno. La medida de lo posible no fue solo la frase del presidente Patricio Aylwin para hacer justicia sobre los crímenes y los desfalcos que empezábamos a conocer, sino también el ánimo de una generación que, como sucede con los niños maltratados, se conformó con la tranquilidad de tener a los militares en sus cuarteles y la idea de que, en el futuro, las cosas cambiarían.

La democracia recuperada buscaba respirar de alguna manera. El modo que encontró para hacerlo fue poniendo sus esperanzas en el esplendor económico. Aquel deseo de un futuro menos perturbador que el régimen que había entregado el poder después de tantos años, fue colmado con las cifras que apuntaban una riqueza nueva que la gran mayoría vivía con satisfacción vicaria.

La economía llegó a crecer un 12%, la inflación cayó del 27% al 4% y el ingreso per cápita saltó de US \$2.625 en 1990 a casi US \$5.000 en 1997. Las cifras macro eran un combustible para la satisfacción que se concretaba con la expansión del consumo hacia los sectores de la población que nunca antes habían tenido un acceso así de fácil a comprar productos que a sus padres les habrían resultado prohibitivos.

Esta denominada “nueva clase media”, la que de un momento a otro todos querían comprender en sus gustos y conductas, era diferente a la clase media surgida en la primera mitad del siglo xx. La actual no tenía vínculos con las instituciones públicas ni construía su identidad en torno a ellas, como antes había ocurrido en relación a la Universidad de Chile, los liceos fiscales o los empleos públicos. Era un sector de la población que medraba socialmente gracias a empleos en empresas privadas, oficios relacionados con el sector de servicio o pequeños comercios que le permitían el acceso al consumo a través del crédito que en adelante sería masivo. El lugar que las ciudades tenía reservado para ellos eran barrios nuevos contruidos como proyectos inmobiliarios en los bordes de las ciudades, vecindarios de casas idénticas con escasos espacios públicos, pésimo equipamiento urbano y transporte público deficiente. La manera en que la modernidad llegaba hasta sus barrios era en la forma de grandes centros comerciales: El mall, sus pasillos luminosos, su ambiente climatizado, las nuevas salas de cine, la algarabía de las marcas, la comida rápida y las tarjetas de tienda como llaves maestras a un mundo de aparente bienestar, eran la expresión concreta de esas cifras de crecimiento anunciadas en los noticieros de televisión y la manera en que la ciudad le ofrecía satisfacción a sus habitantes. El presidente Patricio Aylwin solía criticar la nueva costumbre de reunirse en un mall en lugar de acudir a plazas o parques. Lo decía como un reproche moral a la población, sin tomar en cuenta que la falta de planificación urbana —es decir, una omisión política— dejaba a la mayoría de los habitantes sin lugares de recreación. Bastaba recorrer los barrios en torno al mall Plaza Vespucio para comprender el modo en que los suburbios se habían transformado en un terreno liberado

para el ensayo de las inmobiliarias y el abandono de regulación de cualquier tipo. Veredas desniveladas, calles mal iluminadas, sin plazas, nudos viales hostiles con los peatones, torres de edificios fuera de toda escala y desagües que colapsaban cada otoño después de la primera lluvia. La televisión y el mall eran las únicas posibilidades de distracción a la mano.

Los aparatos de televisión cobraron tanta importancia en la vida de los hogares de familias de barrios más populares –grandes pantallas en salitas estrechas, parabólicas instaladas en los techos de viviendas sociales– que provocaban las burlas entre los más acomodados; esas burlas no consideraban que a diferencia de las personas de más recursos, para esas familias no existían los fines de semana en la casa de la playa, ni jardines con piscina, ni parques cercanos, ni presupuesto para salir de noche; la única fuente de entretenimiento que podían permitirse era la televisión, principalmente la señal abierta, que vertiginosamente fue variando su programación de los antiguos shows de variedades de los ochenta –*Sabor latino*, *Martes 13*– a los programas de conversación orientados a la farándula –*Cóctel*, *Viva el lunes*–, un nuevo tipo de evasión reconcentrada en la vida privada de personajes que intentaban emular el fulgor de las estrellas de otras latitudes, solo que a una escala local: en un país sin más industria del entretenimiento que las teleseries de las ocho de la tarde, no había divas ni supermodelos, sino más bien muchachas lindas que lograban fama en concursos de belleza y un puñado de futbolistas que acumulaban fortunas jugando en equipos extranjeros.

En los noventa, el mejoramiento de las condiciones materiales de vida en muchos ámbitos y la danza de cifras positivas conformaron un hábitat de estabilidad y consenso transversal novedoso para la historia del país. Un estado de gracia en la política que solo fue cuestionado a partir de la crisis económica de 1998 que coincidió con la detención en Londres de Augusto Pinochet. Pese a la crisis, las condiciones económicas establecieron un entusiasmo en torno al éxito y al dinero que impregnó el espíritu de la época.

Durante esos años, la prensa hizo circular la idea de una generación diferente, con una mentalidad distinta, ganadora, sin complejos, un discurso que los medios de comunicación repetían con insistencia.

Era frecuente leer notas sobre la manera en que ciertas empresas locales salían fuera a “conquistar mercados”, ilustradas con fotografías de gerentes rubicundos y usando un lenguaje teñido de una euforia desatada. Los medios celebraban la expansión de las marcas de grandes tiendas chilenas a países vecinos y el éxito de los ejecutivos locales en compañías extranjeras como si eso nos diera a todos y cada uno un nuevo lugar en el mundo. Esa algarabía tuvo un gran efecto cultural.

Tradicionalmente en Chile, un país de estamentos en donde el lugar de cada quien es severamente vigilado por el resto, el deseo de éxito individual era un asunto que se mantenía bajo el velo del recato. Jactarse o vanagloriarse de logros económicos –incluso hablar de dinero– eran asuntos mirados con sospecha y asociados a personas que buscaban disfrazar su origen social en la medida que sus ingresos mejoraban, aquellos considerados arribistas o siúuticos. Esta manera de pensar sufrió un cambio importante a partir de la transición cuando el valor del éxito individual cobró importancia y dejó de ser un asunto que debía mantenerse en el ámbito de lo privado.

Los rasgos con los que los cronistas durante el siglo xx describieron el carácter de los chilenos, –grises, parcos, inseguros– comenzaban a presentar ligeras variaciones. “Vengo de un país pequeño”, dijo Salvador Allende frente a la Asamblea General de la ONU, reflejando el talante de su época: la discreción frente al extranjero, la sobriedad como talismán. Chile, más que pequeño en superficie territorial, era pobre, lejano, aislado y deshabitado. Durante generaciones,

los chilenos fuimos criados en una cultura de los límites –físicos y simbólicos– y de la escasez. Incluso entre la clase alta existía una suerte de economía de medios a la hora de demostrar su rango: no era necesaria la ostentación material en un círculo en el que todos sabían muy bien qué lugar ocupar. Esta suerte de observancia del recato como norma tradicional, comenzó a pasar al olvido con la prosperidad económica: la culpa católica que provocaba el consumo de artículos de lujo se esfumó; de hecho el cura John O'Reilly –líder de los Legionarios de Cristo, favorito de cierta clase alta y, con el paso de los años, condenado por abuso sexual de niñas y expulsado del país–, bendijo en una ocasión una automotora argumentando que era la marca de autos que usaría Dios. El imperio de los rankings de todo tipo –crecimiento, probidad, competitividad– devolvía el reflejo más que de un país en todas sus diferentes dimensiones, el de una economía que se ilustraba en gráficos siempre ascendentes. Este entusiasmo desbordante tuvo un efecto en el carácter, o al menos, en aquello considerado como valioso de expresar públicamente en el trato social.

La timidez y la falta de aplomo endémica fueron compensadas por una especie de pachorra reactiva, a veces avasallante y en ocasiones iracunda, que se presentaba sobre todo en los viajes a países vecinos en donde todo era peor que en casa. Esta percepción de la importancia relativa de nuestro país se acentuó con la llegada de la primera inmigración peruana a fines de los noventa y las que le seguirían –colombiana, haitiana, venezolana– hasta la actualidad. Aquello que considerábamos “exótico” en nuestro delirio de blancura y con lo que no queríamos ser confundidos, llegaba a vivir con nosotros y caía en el rango de lo sospechoso, sobre todo en los sectores populares, donde la inmigración latinoamericana sería mirada con mayor hostilidad porque representaban una amenaza laboral.

La huella del fracaso, que servía como contrapunto al ánimo exitista, comenzó a ser dibujada en la figura del *flaite*, una nueva manera de aludir sin compasión ni culpa a quienes vivían en la miseria. Hombres y mujeres –herederos de linaje del roto y la china rural, tataranietos del gañán– con un acento ininteligible que circulan amenazantes como el recordatorio de que algo desconocido hierve en las periferias. El flaite es fronterizo al lumpen, o más bien, para quien lo observa con distancia, transita de una identidad a otra según cuán amenazante se presente en el momento.

Hay libertad total para burlarse de los flaite, repudiar su forma de vida y temerles: los nuevos bárbaros vestirían zapatillas deportivas caras y circularían ajenos a toda sujeción y norma.

En la medida que el dinero fluía y se concentraba, el culto de la clase alta a esa sobriedad de espíritu colonial, relacionada con la ruda vida en la hacienda, fue disminuyendo en su poder simbólico, no se correspondía con la euforia encarnada en el empresario-economista conquistador de nuevos territorios que mostraban los medios locales en sus páginas de negocios y finanzas.

Las condiciones de riqueza y privilegio variaron para la élite y su tolerancia a la falta de sobriedad tuvo que adaptarse, un giro que fue empujando un cambio generalizado, orientándose cada vez más hacia la exhibición de los trofeos que constataban el éxito. Pero quienes se levantaron como íconos de este nuevo espíritu frente a la opinión pública mayoritaria no fueron ni los economistas ni los empresarios, figuras demasiado lejanas para la gran mayoría y cuyas biografías rara vez representaban la historia de personas comunes que alcanzaban la cima, como lo exigía el relato meritocrático. Su éxito nunca fue percibido como un ascenso social real, sino un aumento de capital. Quienes sí encajarían con la aspiración de triunfo anhelada por el pueblo fueron los nuevos héroes deportivos. Primero, los jugadores de la selección del Mundial sub 17 de Japón de 1993, que lograron el tercer lugar de su categoría. La mayoría de ellos eran

muchachos de familias de clase trabajadora, por lo tanto su estrellato súbito era juzgado como una recompensa al talento de jóvenes criados en el rigor. A partir de ellos, los medios hablaron de un “cambio de mentalidad” atribuible a una generación criada en una sociedad sin complejos con el triunfo. Era, otra vez, la expresión de un deseo que llenara una identidad difusa. Con esa selección comenzó la fabricación de modelos de conducta relacionados con el acto de competir y ganar internacionalmente: Iván Zamorano fue la gesta del muchacho esforzado que brillaba en Europa, y Marcelo Salas el orgullo de una estrella deportiva local que lograba ser admirada en Argentina, el espejo invertido en el que solíamos reflejarnos para compararnos. Asimismo, las revistas de papel cuché buscaban ejemplos de éxito entre aquellos grupos sociales tradicionalmente asociados con la pobreza: los evangélicos, los indígenas, los provincianos y cualquier exalumno de liceo público. Como fuera, siempre se trataba de excepciones y rara vez el ejercicio contemplaba mujeres.

Medrar socialmente era una actividad excepcional y masculina hasta los noventa.

Escalar, competir, hacer cumbre. El dibujo de la vida como una cima que se debía alcanzar dejaba poco espacio para la idea de un sitio común entre pares. La noción de bien común, entonces, quedó restringida a la beneficencia que a su vez cobró una nueva forma bajo condiciones neoliberales. El catolicismo hizo carpintería de la caridad tradicional gestionada por damas de alta sociedad, como La gota de leche o El ropero del pueblo, y la transformó en campañas que involucraban distintos grupos etarios de la élite en alianza con los medios de comunicación y el panteón de celebridades de televisión locales. Caridad, marketing y relaciones públicas. El ejemplo más perdurable de esta nueva ideología del bien común fue la llamada Cena de Pan y Vino, creada por el jesuita Renato Poblete, en donde la convocatoria, bajo la excusa de reunir fondos para los mendigos sin techo, tenía por objetivo paralelo refrescar y afianzar redes de poder. Un ejercicio en que todos ganaban donando dinero y apareciendo en las páginas de vida social. Poblete, quien después de muerto fue denunciado por abuso sexual y violaciones reiteradas, estableció un modelo empresarial de bien común ofreciendo servicios sociales, financiados por socios solventes a los que en lugar de repartirles utilidades económicas, les ofrecía prestigio, contactos y estatus. El sacerdote se transformó en un valiosísimo símbolo de pertenencia social, uno al que empresarios, políticos y periodistas querían siempre tener cerca para pedirle consejos, concederle favores o pedirselos, según fuera el caso. Poblete fue un santo para muchos y, luego de su muerte, las autoridades bautizaron con su nombre un parque con una estatua que recordaba su silueta. La devoción por él era un consenso nacional hasta que acabó conociéndose la verdad en 2019.

Las nuevas condiciones sociales requerían además una dosis de arrogancia necesaria para triunfar. El tenista Marcelo Ríos alcanzó el rango de ícono gracias a su talento para el deporte y sus logros, pero también por su carácter, que tan poco encajaba en lo que habitualmente se había definido como “admirable” en nuestra forma de vida tradicional, recelosa de los que demostraban seguridad en sí mismos por jactanciosos y fantoches. Marcelo Ríos popularizó la expresión “no estoy ni ahí” (no me importa nada lo que piense el resto), un concepto que resumía el desdén por la opinión ajena, la política y por todo lo que significara involucrarse en causas colectivas. La muletilla curiosa y abstracta tuvo como correlato el desplome de la participación de los jóvenes en política. Si en 1988 el tramo de ciudadanos entre dieciocho y veinticuatro años inscritos en los registros electorales alcanzaba el 20% del total, en las parlamentarias de 1993 descendió al 13%. El 2001, los inscritos en el mismo tramo de edad llegaban solo al 3,4%. La participación se fue desplomando a medida que la desconfianza en las instituciones crecía. Sin embargo, pese a todas las señales, el discurso oficial era que en Chile las instituciones

funcionaban.

\*\*\*

Era un spot de fines de los noventa, un comercial de televisión sencillo, pero significativo. Un síntoma de la época. El spot transcurría en un ascensor donde además de cinco hombres vestidos de traje, iba uno con aspecto obrero y una caja de herramientas. El cuadro apelaba al imaginario racial chileno: los ejecutivos eran altos, delgados y de apariencia europea, el obrero era más bajo y con rasgos mestizos. En un momento comienza a sonar un teléfono celular: cada uno de los ejecutivos saca el suyo, pensando que la llamada era para ellos –hasta esos años los móviles eran aparatos que usaban solo personas de ingresos altos–. Para sorpresa de todos es el obrero quien atiende el llamado y se presenta con su apellido, uno que para el imaginario clasista local no concede mayor prestigio, añadiendo la frase “ingeniería electrónica e instalaciones varias”. Frente al sorpresivo desenlace, los ejecutivos del ascensor se miran entre sí sonriendo cómplices. El comercial de teléfonos celulares de la CTC buscaba retratar una sociedad en la que un chileno común tenía el mismo acceso a la tecnología que uno perteneciente al mundo de las finanzas y que montando su propio negocio, prosperaba. Era la construcción de la figura del meritócrata emprendedor, una figura distinta a la del profesional, tendero de barrio, comerciante, empleado o funcionario que retrataba la antigua clase media de mediados del siglo xx.

Durante la transición cundió la idea de que el progreso individual era posible gracias al cultivo del mérito propio y que el rol de la política era despejar el camino para que cada quien hiciera su propia travesía rumbo al éxito desvinculado de una institución. El hombre del ascensor era su propio jefe y su telefonista. No era un obrero porque prestaba servicios, “brindaba soluciones”, y las ofrecía a sus clientes que no eran sus patrones. Era un chileno incorporado a la modernidad discursiva y tecnológica que incluso podía compartir espacio con los otros chilenos, los ejecutivos de traje y corbata. El sistema le ofrecía esa posibilidad y él le sacaba provecho. Era un síntoma de que la movilidad social era posible.

Desde mediados de los noventa el uso de la expresión “meritócrata” y las historias de vida en torno a ese concepto se multiplicaron, sobre todo en los medios escritos. En el diario *El Mercurio*, por ejemplo, las palabras meritocracia y meritócrata aparecen mencionadas en dos oportunidades en 1990; en cuatro en 1995; en seis en 1996; en diez en 2000; veinticinco veces en 2005; cincuenta en 2007 y setenta y seis en 2018. Otro tanto sucedería con la figura del “emprendedor”. La vida era una escalada para la que había que estar bien entrenado.

A fines de 2017 entrevisté al sociólogo Juan Carlos Castillo, investigador del Centro de Estudios de Conflicto Cohesión Social. Le pregunté entonces si había datos sobre la movilidad existente entre la base y la cúspide de la pirámide social chilena, y me explicó que entre los segmentos medios de ingreso la movilidad es un hecho, pero que entre el noveno y el décimo decil de ingresos – es decir, el 10% de mayores recursos– hay una barrera infranqueable. Pasar esa frontera “tomaría entre tres y seis generaciones”. Juan Carlos Castillo también me dijo que con el concepto “meritocracia” ocurre algo curioso: en política se repite como un mantra, pero en la academia –en sociología y economía– es una idea escasamente desarrollada. Se invoca con frecuencia, pero como quien ofrenda una palabra vacía o despliega una pantalla en blanco en la que cada uno proyectará sus propios anhelos privados. Una expresión de deseo individual, una fantasía bien dispuesta y efectiva en un discurso de campaña, más que una convicción fundada en la realidad o en los hechos.

Por eso, durante esos años, eran necesarios los ejemplos sonoros; aunque fueran excepciones, servían para refrendar que el deseo existía más allá de la fantasía de arribar hasta la cumbre

donde los millones se funden con el aplauso cerrado. Iván Zamorano fue ese ejemplo de meritocracia que todos nos contamos para soñar con un futuro. Antes que Alexis Sánchez o Arturo Vidal, Zamorano llegó tan alto como nadie lo había hecho antes.

El Pichichi fue una figura con bordes de ícono, una suerte de alegoría viviente del ensueño de ascenso en la era del mercado global. Lo que fue el marqués de Cuevas durante los años cincuenta y Raquel Argandoña en el despertar neoliberal de los ochenta, lo fue Zamorano para una transición ansiosa de triunfos y glorias que coronaran la aridez de las cifras macroeconómicas. Un aliño para la prosperidad que cascabeleaba sin más gracia que el Imacec del mes, necesitaba héroes que provocaran la sensación de que el éxito era generalizado. Si Marcelo Ríos fue el talento privilegiado con los modales de niño engreído, Iván Zamorano era la épica del pueblo que se sobreponía a la adversidad y escalaba enfrentando el rigor del destino. El niño bueno, el hijo modoso de madre viuda, el que acata y sonríe, el que canta el himno nacional sin mascar chicle y encima lo subraya con una mano en el corazón.

Gracias a Iván Zamorano los chilenos pudimos ver en vivo y en directo, y por primera vez en la historia, cómo un hombre del pueblo, criado en Maipú y con raíces en La Legua, lograba no solo popularidad y admiración, sino también fortuna más allá de nuestras fronteras. Su aventura en el Real Madrid fue algo parecido a un folletín por entrega semanal, una serie documentada en tiempo real de un logro que muchos sentían propio. La imagen del rostro mestizo y el perfil amerindio vitoreado por la muchedumbre fue creciendo, torciéndole la mano al entrenador villano argentino, ganándose la titularidad y celebrando goles y torneos. Aquello que en Perú representó Alejandro Toledo al ganar la presidencia, en Chile lo encarnaba Iván Zamorano vestido de Armani posando para las revistas de papel cuché: la rareza estadística de un ganador moreno surgido de los barrios y entronizado por el pueblo. El aura de niño símbolo de conducta intachable lo protegía de la zancadilla directa provocada por la natural envidia ante el éxito inesperado. Lo que hubo fueron rumores maldicientes, burlas solapadas: que su acento, que sus novias rubias. Era el inicio del retorno al país y el inicio de las sacudidas.

La primera y más cruel fue el fracasado matrimonio en el Palacio Cousiño, el mismo lugar que usó la hija menor de Pinochet para celebrarse en épocas en que había poco que festejar. El plantón de la novia del momento le dio tema de conversación por meses al país entero, a esas alturas sumergido en la ética de la farándula. El segundo y más político remezón fue la campaña de Transantiago en 2007, aquella que dinamitó su imagen y transformó una historia de ascenso en un caso de desclasamiento. Zamorano parecía haber traicionado a su propio pueblo recomendándole un sistema de transporte que más bien era uno de tortura que humilló a los santiaguinos y desnudó la cruel torpeza de los tecnócratas de gobierno.

Las millonarias deudas del proyecto deportivo que creó tras su retiro completaron el derrumbe de la alegoría encarnada en el muchachito modesto, el hijo ejemplar, el triunfador esforzado. De paso nos confirmó que estas historias no son posibles en Chile, que los ascensos tienen un techo y un costo, un impuesto de aduana que tarde o temprano habrá que saldar. Una suerte de maldición ritual nacional que sirve para constatar que hay cosas que no cambian, destinos imposibles de torcer.

\*\*\*

En 1992 la Universidad de Chile cumplía ciento cincuenta años desde su fundación. Era el primer aniversario redondo –sesquicentenario– desde el retorno a la democracia. Era también mi primer año de universidad. En el papel, aquella fecha debía ser un acontecimiento alegre para mi generación, los mechones de los noventa: los tiempos oscuros en que la universidad había sido

desmembrada y sofocada, aparentemente habían terminado. El aniversario celebrado con un acto en la Plaza de la Constitución, en el corazón de la República, podía haber sido la señal de que las cosas volverían a su sitio tarde o temprano. A la larga no fue así. El fin de la dictadura no significaría que la Universidad de Chile recobraría el lugar que tuvo hasta antes del golpe, cuando era una institución de alcance nacional, con sedes a lo largo del país y funcionaba, en los hechos, como una suerte de ministerio de cultura; la Universidad de Chile había contribuido a tejer la trama cultural del siglo xx con revistas, editoriales, escuelas de verano, salones de arte y un Pedagógico en donde se formó gran parte de los escritores e intelectuales que marcaron la historia a partir de los años cuarenta, la mayor parte de ellos provenientes de escuelas y liceos públicos, la antigua clase media. El escenario de los noventa era totalmente distinto.

Para la fecha de aquella celebración, la educación pública estaba devastada y no dejaría de estarlo. Aun más, la democracia contribuiría a segmentar por ingresos la enseñanza. El sistema universitario también había cambiado, ampliando la cobertura a través de los planteles privados orientados a los sectores medios; la clase alta, por su parte, comenzaría a preferir cada vez más las instituciones religiosas privadas para cursar sus estudios superiores. La educación y la cultura como punto de encuentro entre ciudadanos de distinto origen social tendería a extinguirse: cada quien estudiaría solo con sus pares desde primero básico hasta el último año de pregrado.

Durante la transición, la Universidad de Chile se sostendría en su prestigio, pero comenzaría a ser considerada persistentemente como una más entre muchas, aunque con una diferencia: frente a la opinión pública aparecería como un lugar de huelgas, tomas, paros y conflictos, lo que resulta atemorizante en una cultura que apreciaría con mayor vehemencia la eficiencia y la competencia como valores primordiales, mucho más apreciados que la crítica. En suma, la institución que había sido clave en la vida cultural chilena del primer tercio del siglo xx, ya no existía más. Había sido intervenida y su sentido original, alterado. El país tampoco era el mismo. La dictadura había concluido, sin embargo, sus efectos en la Universidad de Chile y en la educación perdurarían no solo como un trauma que se hace presente de tanto en tanto, sino como una reorientación de las lógicas y los espacios. Para la educación y la cultura –dos ámbitos estrechamente vinculados– el régimen no fue sencillamente un paréntesis que se cerró en 1990, sino un sismo que remeció el paisaje, le dio una nueva dirección a la relación que tendría el Estado y las instituciones públicas con aquello considerado parte del “mundo de la cultura”.

Un año después de la celebración de los ciento cincuenta años de la Universidad de Chile, fue inaugurado el centro cultural Alameda, el mismo que sería incendiado después del estallido de octubre de 2019. La inauguración tuvo lugar el 20 de abril de 1993, fue registrada por los diarios y la televisión y encabezada por el presidente Aylwin. Lo que ahora nos podría parecer un lugar pequeño y modesto, en ese momento era visto como un gran avance en infraestructura. La escala de los tiempos era otra: durante la dictadura, el Estado no construyó ningún centro cultural, ni siquiera una biblioteca. Por eso, lo que era sencillamente la remodelación del antiguo Cine Normandie, fue presentado como un avance significativo para la ciudad y el país. Pero había algo aun más relevante que el mero edificio: representaba un nuevo modelo de “gestión cultural”, un concepto que se utilizaría una y otra vez a partir de esa década. El centro cultural Alameda no pertenecía a una institución pública, era una iniciativa gubernamental, pero financiada por privados, según indicaba la prensa con entusiasmo: “De hecho, veintinueve empresas compraron los derechos de dos butacas por un plazo de cinco años y publicidad, por cinco millones de pesos”, indicaba *El Mercurio*. Era el arranque de una nueva manera de concebir la participación del Estado en la cultura, de un modo distinto, tomando distancia, incentivado a través del descuento de impuestos o proveyendo fondos, montos de dinero a fundaciones o corporaciones

que se situarían en un ámbito intermedio: para muchos efectos privadas, pero cumpliendo un rol público. En ese régimen fronterizo fue creado el centro cultural Estación Mapocho, el del Palacio La Moneda, el GAM, el Parque Cultural de Valparaíso y el de Cerrillos. Un régimen de excepción que estableció un nuevo circuito que miraba desde una vereda del frente – aparentemente más próspera y moderna– a las antiguas instituciones como el Museo de Bellas Artes, el de Arte Contemporáneo y el Teatro de la Universidad de Chile. La transición abrió un capítulo nuevo: el de los centros culturales de burocracia liviana y desanclados del Estado, espacios de exhibición de artes visuales, salas para montaje de obras de representación y, en algunos casos, grandes salas en arriendo para eventos comerciales salpicados de programación cultural propia.

Esta nueva concepción de institución cultural instalada durante la transición, alcanzó incluso a un proyecto iniciado en 1971 durante la Unidad Popular, el llamado Museo de la Solidaridad, una colección donada por los artistas del mundo al pueblo de Chile como gesto de apoyo al gobierno de Salvador Allende. Las obras comenzaron a ser recibidas por el Instituto de Arte Latinoamericano de la Universidad de Chile, que se encargaría de mantenerlas y exhibirlas en el Museo de Arte Contemporáneo. Vino el Golpe y fueron guardadas. La colección siguió creciendo en el exilio bajo el concepto de Museo de la Resistencia, que mantuvo su espíritu original. La democracia volvió, pero la colección no pasó a formar parte del Estado, quedó bajo la custodia de una fundación.

La transición acabó estableciendo una nueva racionalidad no solo en el ámbito económico, sino también en el cultural. Como contrapunto a esta nueva lógica, se crearon las fiestas callejeras de la ciudadanía, un impulso para que los chilenos volvieran a ocupar el espacio público, ya no solo para protestar, sino para celebrar, con la excusa de que hacerlo era una pulsión “cultural” que nos era propia. Una suerte de impostación carnavalesca –con zancos, mimos y batucadas–, síntoma del entusiasmo de la época.

En una escena de la película argentina *El ciudadano ilustre*, un personaje secundario habla en frente del protagonista –un escritor argentino que acaba de ganar el Nobel de Literatura– sobre la necesidad de una política cultural que beneficie al pueblo. Luego de escuchar, el protagonista – un hombre de expresión seca que hizo su carrera en Europa– se permite discrepar de lo que acaba de escuchar y sostiene que la mejor política cultural es no tener ninguna en absoluto, porque él sospecha profundamente del valor que tal cosa pueda tener. El personaje le teme a la creación de una cultura al servicio del Estado que acabe satisfaciendo al gobierno en el poder o carcomida por la burocracia y los favores políticos.

Razones para temer algo así no le faltaban, ejemplos sobran. En Chile había ocurrido en democracia, antes de la dictadura; el escritor y decano de la Universidad de Chile en los sesenta, Luis Oyarzún, se lamentaba amargamente en sus diarios de la ultrapolitización del momento y la manera en que criterios mezquinos –simpatías partidarias, intereses privados– se impusieran para tomar decisiones en el área. La politización se extendería durante la Unidad Popular y terminaría con el Golpe de Estado y la dictadura, que sofocó la creación artística y la cultura crítica durante diecisiete años.

Ese mismo temor a la utilización de la cultura fue central en las primeras discusiones sobre la creación de una institucionalidad cultural durante la segunda mitad de los años noventa. El modo en que se resolvió fue creando un Consejo de la Cultura, presidido por una autoridad designada por el ejecutivo, pero conformado por representantes de distintos ámbitos. El rol de aquel consejo sería repartir fondos para proyectos determinados que debían pasar antes por una evaluación de expertos. Nuevamente, la gestión individual y privada aparecía como fórmula

preponderante. La postulación a fondos para las artes y la literatura se transformó no solo en un rito, sino en una forma de vida para una generación de artistas cuyas carreras están pauteadas por los períodos de entrega del Fondart. La transición, en cierto modo, acabó disciplinando al gremio en la lógica del voucher –montos de dinero público que se reparten–, externalizando la gestión y transformando la relación con los espacios de exhibición en un trámite individual y pasajero. El papel de instituciones como el Museo de Bellas Artes quedó reducido, por ejemplo, al de una sala de exhibición, y el de ciertas editoriales independientes, al de imprentas para publicar un libro ya financiado. Un sistema liviano de burocracia, pero también de espesor crítico que cada tanto iba siendo domesticado por el autoritarismo político que armaba una alharaca si tal obra o determinado libro financiado con fondos públicos presentaba una mirada que alguien consideraba escandalosa.

Sin duda a partir de los noventa se montaron cada vez más obras de teatro, se multiplicaron las galerías de arte, se rodaron más películas, se publicaron más libros. Una flecha que subía persistentemente en un gráfico, en parte porque el punto de referencia que dejó la dictadura era demasiado bajo. ¿Pero quiénes asistían a esas funciones o iban a esas exposiciones? ¿Era un público más amplio que el habitual, el con mayores recursos, o llegaba a los chilenos de zonas alejadas en cuyas casas no había libros ni dinero para ir al cine?

La desigualdad cobra una nueva dimensión cuando la pregunta es sobre la composición social de las personas que asisten a las obras de teatro o sobre las diferencias de acceso que existen entre quienes viven en la capital y los habitantes de la provincia. Solo un ejemplo: aunque se han construido y formado bibliotecas como nunca antes, y han tenido un éxito tremendo –hay ejemplos notables de la Dibam–, los libros continúan siendo percibidos como objeto suntuarios, lejanos, a los que solo acceden unos cuantos; de hecho, la mayoría de las librerías del país están concentradas en las cuatro comunas más ricas de Santiago.

La dimensión cultural y artística de la transición democrática fue acumulando un número significativo de preguntas en torno al modo en que la democracia recuperada le dio la espalda a la tradición que la dictadura interrumpió. Aquel mundo previo al golpe, que con medios escasos –los de un país pobre y aislado de las grandes capitales– creó un entramado de instituciones públicas que con muchísimas dificultades estableció las condiciones para un desarrollo cultural diverso, que tenía una vocación democrática y pluralista. Durante la transición, en cambio, la élite gobernante concibió la cultura como un conjunto de voluntades individuales dispersas que necesitan dinero para producir obras o mantener espacios de exhibición, no como un espacio común de convivencia continua que convoca. Una fragmentación que tiende a cerrarse sobre una misma élite, alejada de las muchedumbres y en sincronía con un sistema educacional segregado y violentamente desigual.

\*\*\*

La mañana de octubre de 1998 cuando leí en el diario que Augusto Pinochet había sido “retenido” en Londres, me llamó la atención el verbo elegido para describir la situación. Un acontecimiento repentino o un accidente que obliga a cambiar los planes “retiene” a alguien en un lugar. A Pinochet no le pasó eso, lo que sucedió con él fue distinto. Pinochet había sido *arrestado* por la policía luego de la orden de un juez. Imaginé una discusión entre editores buscando una fórmula para decir algo sin decirlo, como en esa época cuando en los grandes medios no se escribía ni se decía “golpe militar” sino “pronunciamiento”. Hasta ese momento resultaba inconcebible que alguien sugiriera que los militares podía llegar a defraudar el dinero público que recibían. Menos aun sobre Pinochet que era, para muchos y a diferencia de otros

dictadores, un soldado honesto. En la elección del verbo “retener” había un gesto, el de mencionar algo sin describirlo, rodearlo como bailando una cueca alrededor de su verdadero significado. Agitar un pañuelo para distraer el peso de los hechos.

Repentinamente, y gracias a un juez español, Pinochet se transformaba en un caso de la justicia internacional y su figura, por décadas omnipotente, aparecía disminuida al punto de verse obligado a dar lástima y pedir compasión. Eso hizo. Fingió ser un anciano enfermo y demente que solo buscaba resolver un malentendido y volver a casa. Jugó ese juego durante un año y cinco meses en Inglaterra y logró salirse con la suya. Llegó a Santiago en silla de ruedas, pero apenas se sintió a salvo, dejó las muletas y se puso de pie con la algarabía del pillo que logra su objetivo. Hubo abrazos y felicidad entre los adictos a su legado. Nunca fue a la cárcel, murió atendido como pocos chilenos tienen acceso a serlo, sin embargo, después de su “retención” su poder fue disminuyendo hasta transformarlo en un estorbo para buena parte de la derecha.

El período de Pinochet en Londres fue una bisagra entre dos estados de ánimo colectivo y dos etapas de la transición. El entusiasmo empalagoso de los primeros cuatro años de la presidencia de Eduardo Frei Ruiz-Tagle decayó con la crisis económica del 98; hubo un primer desaliento que no alcanzaba a cobrar la forma de un rechazo por algo en concreto, sino más bien de desapego y escepticismo frente a la política, pero en un ambiente en el que la estabilidad aún tenía un valor supremo. Cuesta dar con una imagen precisa que simbolice la figura de Frei Ruiz-Tagle como presidente. Con Patricio Aylwin es fácil –su llanto durante la entrega del Informe Rettig, su frase de justicia en la medida de lo posible–, pero sobre el legado de Frei hay una bruma de discursos e imágenes en torno a tratados de libre comercio o su encono irracional contra el proyecto conservacionista del millonario Douglas Tompkins. Leo en la reseña de la Biblioteca del Congreso que durante su sexenio comenzaron las concesiones a privados de infraestructura, la privatización de las empresas sanitarias que con los años sería fuertemente criticada, la reforma procesal penal que reemplazó el viejo sistema inquisitorial. Durante el mandato de Frei fue creado el Ministerio Público y fue puesta en marcha una reforma educacional que amplió la jornada y cambió los contenidos. Sin embargo, su período carece de un sello épico a la altura de los votos que recibió, una mayoría del 57,9%, la más alta de la historia hasta ese momento. Será tal vez que en esos tiempos, bajo esos ánimos, su rol debía consistir en eso: una figura que se confundiera con el paisaje, alguien sin cumbres ni barrancos, un valle amplio sin sorpresas ni exigencias, alguien cuyo tono de voz monótono sirviera para que los cómicos se regocijaran imitándolo sin temor ni culpa. Un presidente que resistiera los arrebatos de los militares y pusiera su empeño en librar a Pinochet de la justicia española, aunque eso significara salvar al hombre, el dictador, que habría mandado a matar a su propio padre. En parte, en eso consistió la década del noventa, en gestos de resignaciones más o menos amargos compensados por el espejismo del éxito económico y salpicados del escepticismo juguetón de los programas *Factor humano* o *Plan Z* del Canal 2 Rock and Pop, los creadores de una irreverencia generacional que luego tendría continuidad en el semanario *The Clinic*. Contrapuntos a la hegemonía de la satisfacción política.

En enero de 2000 el estrecho triunfo en segunda vuelta de Ricardo Lagos sobre Joaquín Lavín –expinochetista y miembro del Opus Dei– fue un aviso muy franco de que era posible que la derecha volviera al gobierno, esta vez gracias al voto.

A partir del 2000, el país tomó un rumbo nuevo con la épica de la tercera vía impulsada por Ricardo Lagos durante su sexenio. Fue el tránsito desde el país gobernado por un líder opaco, siempre en deuda con su apellido, hacia la ensoñación de una nación orgullosa de tener un presidente que parecía siempre estar hablando para que cada una de sus palabras fuera fundida en

bronce y su silueta esculpida en mármol. La elección en segunda vuelta significó el retorno de un socialista a La Moneda después de Salvador Allende, un hecho simbólico que a Ricardo Lagos lo mantuvo tan absorto, que acabó ejerciendo como el mandatario predilecto de los grandes empresarios. Lagos impulsó un liberalismo de izquierda, o un neoliberalismo templado por ideales de igualdad que a corto plazo parecía solucionar los objetivos que se planteaba, pero que a la larga mostraba un costado podrido: las concesiones en infraestructura que presentaba como un gran paso hacia el desarrollo, levantando carreteras y autopistas, pero que acabaron cuestionadas por un escándalo de corrupción –el llamado MOP GATE–; el auge de la industria salmonera que situaría a Chile a la vanguardia de una industria alimentaria y de servicios y que terminó en una grave crisis ambiental y con comunidades pauperizadas; el Crédito con Aval del Estado que permitiría a una nueva generación de jóvenes de clase media estudiar en la universidad, finalmente fue un negocio redondo para la banca y una soga al cuello para miles de familias pobres; la restitución del tren al sur que quedó como otra frustración en la historia de ferrocarriles en un país cuya vialidad se corta en trozos cada vez que llueve mucho o sobreviene un terremoto. Lagos fue también el impulsor del primer proyecto de Transantiago, el que finalmente pondría en marcha Michelle Bachelet en 2007 provocando una hecatombe que bien pudo haber acabado en estallido social.

Durante el sexenio de Lagos cada empeño presidencial por llevar el país al desarrollo con grandes transformaciones que necesitaban de inversiones privadas, significaba develar un poquito un hecho de la causa: las instituciones locales no tenían ni la fortaleza ni el rigor para hacerle frente al compadrazgo entre política y dinero en un país con el poder tan espesamente concentrado en un nudo de familiares, socios y amigos. Lo que en otras partes del mundo se llamaba derechamente corrupción, tráfico de influencias, conflictos de interés o uso de información privilegiada, en Chile había sido considerado históricamente de otro modo, porque nuestra cultura había permitido que así fuera y nuestras leyes habían sido diseñadas para que los castigos fueran inversamente proporcionales a los montos robados y al rango social del responsable.

Los sobresueldos a funcionarios públicos eran explicados como si se tratara de gauchadas; las relaciones familiares y de amistad entre directivos y dueños de empresas que firmaban contratos con el Estado, como la natural consecuencia de pertenecer a un mismo mundo; mientras que el ir y venir de cargos de gobierno a puestos de relevancia en grandes compañías con intereses puestos en arreglos legislativos a la carta, eran juzgados como una manera apropiada que tenían ciertos profesionales pertenecientes a lo que podríamos llamar una casta para mantener un nivel de vida de acuerdo a su origen de clase o al de sus padrinos políticos. Ministros que pasaban a ser miembros de directorios, subsecretarios que eran nombrados presidentes de empresas, asesores de gobierno que acababan como consultores de multinacionales.

Idas, vueltas y viceversa. Siempre había un despacho disponible para ellos y ellas.

La posibilidad de hacer notar un conflicto de interés o la evidencia de nepotismo era de mal gusto, reprochable, evidencia de un resentimiento que debía mantenerse a raya. No cabía dentro de las reglas de sociabilidad internas. “¿De qué quieres que viva entonces?”, recuerdo que me dijo una persona en esa época cuando le mencioné un caso que me parecía, al menos, poco adecuado: un subsecretario que con un cambio de gobierno pasaba a principal asesor de una empresa que buscaba ciertas reformas legales justo en el sector del que él había estado a cargo. La duda ética o legal que en cualquier sociedad moderna de país desarrollado –como esos a las que la élite chilena suele tener como modelos– sería ineludible, aquí quedaba sepultada por los usos y costumbres de la tribu local.

En Chile siempre ha sido muchísimo más importante la pertenencia social y la capacidad de conocer quién es quién en el momento adecuado para los fines precisos, que la inteligencia, el talento o la calidad de un trabajo bien ejecutado. Para eso no hay límite ni pudor porque es una especie de culto. La posibilidad de reconocerse entre iguales y de pertenecer a un círculo es tranquilizadora, crea ambientes de comodidad, una sensación de bienestar a la que es fácil abandonarse si se tiene la suerte de ser cooptado por el universo en donde se toman las decisiones. Las reuniones, los cócteles, las comidas que sumergen en charlas fáciles, sin desafíos ni disenso, en donde se van cultivando amistades y reverdeciendo colaboraciones en intereses mutuos. Hoy por ti, mañana por mí. En esos ambientes, los compañeros de colegios –de derecha o izquierda– lo siguen siendo aun después de décadas de haber egresado de la universidad, como la membresía a un club que se desplaza en el tiempo; una hermandad que se renueva en reuniones sociales y reencuentros anuales, que se revive en negocios, sociedades y nombramientos. Lo privado y lo público confluyen en una dimensión pegajosa y tribal en donde se revuelven parentescos y memorias de fiestas de matrimonio, misas, funerales y veraneos. Los que antes fueron compañeros, luego serán padres y apoderados de los mismos colegios, conservando rutinas y rituales compartidos, volviendo a iniciar los ciclos de convivencia a través de los hijos y nietos. Cada recién llegado –los meritócratas destacados, los nuevos políticos caudillos de comunas y regiones apadrinados por el *establishment* santiaguino– se unirá gustoso a esa coreografía si con eso se asegura la tranquilidad de una supervivencia de excepción en un país en donde la mayoría pende del filo de una cornisa con vista a un foso.

En ese sentido los directorios de las grandes empresas reproducen una forma de sociabilidad doméstica mullida por la costumbre: un *who is who* que ayuda a incrementar ganancias o mantener el poder: no están orientados a innovar ni desarrollar, sino a hacer más de lo mismo, sin cambios, y a reunirse cada tanto para constatar que todo permanezca igual para el alivio y la comodidad de todos. En eso consiste el crecimiento económico en Chile, por algo seguimos produciendo lo mismo, viviendo de lo mismo, escarbando las mismas montañas, plantando pinos, moliendo árboles y extinguiendo peces. La diferencia es que nunca antes había existido tanto dinero en juego como durante la transición. Esa era la realidad en la que asumió Ricardo Lagos, una que difícilmente podría haber cambiado por voluntad propia, era el material con el que había que trabajar y él lo hizo, a su modo, envolviendo esa realidad en un papel celofán crujiente que cada tanto le gustaba exhibir. Prefirió adaptar las reglas no escritas de la élite nacional a su favor y concentrarse en la parte medio llena del vaso, hacer de ese líquido el combustible para que la prosperidad se extendiera al mayor número de chilenos posible en la forma de programas sociales, de subvenciones para enfermedades específicas o de grandes edificios de exhibición cultural. Eso al menos se desprendía de sus declaraciones y discursos: no se asusten, por favor, quiero lo mismo que ustedes, pero quiero que más gente lo disfrute.

En 2003 el proyecto Cuadernos Bicentenario, creado por Ricardo Lagos en la perspectiva de los doscientos años de independencia, publicó el libro titulado *Cuánto y cómo cambiamos los chilenos: balance de una década*. La publicación es un conjunto de estudios y reflexiones de expertos –sociólogos, economistas, estadísticos– en torno a las transformaciones en la vida de los chilenos durante el período transcurrido entre el censo de 1992 y el de 2002, una década en que la población chilena adulta logró una tasa de escolaridad que nunca antes tuvo. El prólogo escrito por el presidente Lagos es entusiasta. Destaca los avances materiales y en especial el acceso a la educación superior: “Hoy, casi el 80% de los estudiantes que cursa educación superior son hijos de padres que no alcanzaron ese nivel educativo”, anota. También sostiene que “las familias más pobres son las que más se han beneficiado de este progreso”. La única referencia sobre la

desigualdad aparece como una crítica velada a los métodos de medición de la distribución de ingreso:

“[...] se ha producido en los hechos un avance real en la mejoría de la distribución de ingreso, que no ha sido aún suficientemente captado por las metodologías que realizan mediciones relativas a este tema. Sin duda queda mucho por hacer en esta materia de desigualdad de la distribución de ingreso nacional. Pero es claro también que los avances identificados han tenido un fuerte impacto en la calidad de vida de las personas” <sup>8</sup>.

Es posible concluir de esta frase que al menos hasta 2003 la desigualdad era para el presidente Lagos un asunto secundario frente al progreso material. Aun más, que si los indicadores aparecían dando señales de alarma, se debía a que las fórmulas para capturar lo que sucedía realmente estaban fallando. ¿Lo pensaba así realmente o era una forma de no provocar alarma?

Lagos estaba orgulloso de lo alcanzado: de los centros culturales que inauguró, de las carreteras concesionadas, las autopistas, las centrales de energía, de su voz en los foros internacionales, pero por sobre todo, del incremento en la cobertura de la educación superior. Las vacantes en pregrado aumentaron notoriamente desde 1990 gracias al aumento de las instituciones privadas, las que por ley no podían lucrar, pero lo hacían. Muchas de ellas, tal vez la mayoría, y algunas de las que tenían la mayor cantidad de alumnos del sistema. Universidades que habían sobrepasado a las tradicionales en el número de estudiantes, utilizaban entonces un artilugio legal para disimular el ánimo de lucro. Los controladores creaban dos sociedades: una como negocio inmobiliario que le arrendaba a otra con fines educacionales, los inmuebles donde funcionaba. El dinero hacía un corto viaje de simulación. Era una fórmula extendida de la que todos quienes tuvieran alguna relación con el rubro estaban al tanto, pero como eventualmente tocar a una institución significaba poner en peligro el sistema, nadie lo hacía. Para hacer tortillas había que quebrar huevos, debió ser la lógica. En este caso la tortilla era lograr darle educación superior a una generación nueva, criada en la esperanza de un futuro mejor, escuchando el discurso de la educación como un motor de movilidad social para lograr así una mejor vida de la que habían tenido sus padres. Ese motor de movilidad debía anclarse en un territorio que no podía ser el de las universidades tradicionales pertenecientes al Consejo de Rectores, porque esas universidades no tenían la capacidad de recibir a todos esos nuevos alumnos. Durante la transición, la cobertura universitaria en Chile saltó del 5% al 30% de los estudiantes que egresaban de educación secundaria. En 1990 había en Chile doscientos treinta mil alumnos en educación superior entre los dieciocho y los veinticuatro años. En 2004 había seiscientos mil, pero hasta ese año no existía un instrumento para medir la calidad de las instituciones – universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica– ni de los programas que impartían a sus alumnos, la gran mayoría de sectores medios y bajos que se matriculaban en instituciones privadas. Esos estudiantes tampoco contaban con un sistema de financiamiento específico, como sí existía para los alumnos de las universidades tradicionales a través del crédito universitario. La presión era inmensa y cada vez lo sería más. El gobierno de Lagos diseñó entonces un crédito con tasas de interés altísimas con resguardo para las instituciones financieras, pero dejando al descampado a los estudiantes. Una solución que no calculó el peso que significaría para una generación de estudiantes que a la larga comenzarían su vida laboral endeudados. El sistema estalló en 2011 durante el primer gobierno de Sebastián Piñera con las movilizaciones de universitarios, la mayoría de ellos estudiantes de establecimientos privados.

En una entrevista al diario *La Segunda* publicada el 5 de julio de ese año Mariana Aylwin, una de las ministras de Educación del gobierno de Ricardo Lagos (fue reemplazada por Sergio Bitar), explicó que la propuesta inicial había sido crear un solo crédito –que abarcara instituciones

tradicionales y las que surgieron después de la reforma de 1981– pero que esa intención “no tuvo piso político, ni siquiera para presentarlo ante el Congreso”. Es decir, había intereses involucrados. Agregó que lo lógico hubiera sido un crédito con mayores subsidios del Estado.

“Este crédito –explicó Mariana Aylwin– fue concebido en sus inicios para ayudar, fundamentalmente, a sectores de la clase media. Sin embargo, el crédito en la práctica se ha copado con alumnos de quintiles más pobres. Y las tasas de interés, a mi juicio, son muy altas”.

El problema, nuevamente, eran los pobres que hacían lo que el sistema les decía qué debían hacer para progresar: acceder a la educación superior endeudándose. Eso era lo que hacían, sin embargo a la vuelta de los años el mismo sistema les informaba que esa no era la manera, porque ahora tendrían que pagar. Además, los más pobres cometían otro error: accedían a instituciones y carreras de poca o escasa calidad, porque el Estado no se encargaba de regular ni a las instituciones ni los programas que impartían. Las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica ofrecían sus carreras lo mismo que una marca ofrece jabón, champú o celulares. La inversión publicitaria era altísima, el negocio, redondo. Podían incluso abrir matrículas para carreras sin campo laboral o sin profesores que las impartieran. Eran solo un nombre en el inserto publicitario o en el anuncio del metro. Eso sucedió: hubo carreras tan importantes como medicina, que no eran más que salas y oficinas en un edificio.

Los resultados del primer proyecto piloto de acreditación universitaria recién aparecieron en 2004. Antes de ese período, la libertad para hacer dinero era mayor que la obligación de brindar una educación de buena calidad.

La manera en que el *establishment* trató de ordenar los excesos de un mercado de la educación orientado a captar clientes, fue desarrollando una cultura del ranking de calidad: medir, mensurar, calibrar y ordenar de acuerdo a determinados índices comenzó a formar parte de los hábitos de los postulantes y de sus familias, más allá de la mera publicidad o del prestigio heredado de una institución. El Consejo Superior de Educación creó un ranking de perspectivas laborales y las universidades tradicionales adhirieron a rankings internacionales publicando sus resultados, como una manera de captar alumnos y preservar prestigio. Había un mercado de instituciones y unos consumidores de los servicios prestados. Esta manera de presentar el sistema eludía la regulación estatal directa que controlara la posibilidad de abusos y dejaba que la decisión quedara en los estudiantes y sus familias, en el supuesto de que todos tenían las mismas oportunidades de elegir y las mismas capacidades como para discernir lo que más les convenía. La realidad, sin embargo era otra. La educación escolar se había segmentado de un modo tan preciso que desde el inicio era posible determinar quiénes accederían a la educación superior de mayor calidad y quiénes no. El mejor alumno de un liceo municipal nunca tendría las mismas oportunidades que el peor de un colegio privado y era muy improbable que ambos llegaran a compartir matrícula en la misma universidad.

El cambio de la PAA a la PSU en 2003 no verificó un avance que acortara la brecha entre alumnos de liceos municipales y colegios privados, solo la constató. Cada año las listas de los puntajes más altos en las pruebas estandarizadas estarían dominados por los mismos colegios y la diferencia de promedios entre privados, de copago y municipales se mantendría estable.

Para cuando Ricardo Lagos cumplió su período, había una generación de estudiantes secundarios nacidos en democracia, para quienes la dictadura era un recuerdo de sus padres y no una experiencia propia. Ese grupo había crecido escuchando la promesa del mejoramiento en la educación que alimentaba la figura del meritócrata; había vivido las reformas curriculares y año a año constatado que nada cambiaba cuando los egresados de los mismos colegios obtenían los mejores puntajes de la PAA y PSU mientras la mayoría de los alumnos de liceos municipales

quedaba en el camino o debía conformarse con postular a instituciones de escaso prestigio a carreras técnicas que establecían límites de ingreso muy precisos después del egreso. Esa fue la generación de estudiantes secundarios que en 2006 remeció el primer gobierno de Michelle Bachelet y que luego volvería a protestar en 2011, cuando ya habían pasado por la educación superior. Las revueltas de 2006, conocida como la Revolución Pingüina, fueron la expresión de una deuda que comenzaba en la escuela, se extendía hasta la universidad, continuaba en el mundo laboral y finalizaba con las pensiones; el primer aviso de que la paciencia se estaba agotando.

\*\*\*

En 2014 la Biblioteca Nacional lanzó el primer libro de una nueva colección de su editorial. Era una antología que reunía la obra de más de ochenta poetas chilenos vivos. En el programa figuraba como encargado de presentar el libro el Ministro de Educación, en ese minuto Joaquín Eyzaguirre, sin embargo él no llegó y en su reemplazo habló la subsecretaria. La sala estaba repleta. La subsecretaria leyó un discurso sobre la manera en que el gobierno buscaba reformar el sistema educacional, sin decir ni una palabra sobre la tradición poética chilena, tema que convocaba el encuentro. El discurso estaba perfectamente articulado para una campaña de difusión, pero escucharlo en esas circunstancias resultaba incómodo: era una autoridad explicándole a un grupo de escritores –la mayoría de ellos educados en liceos– lo que significaba avanzar en la gratuidad universitaria. Pensé que solo a mí me estaba molestando lo que escuchaba, hasta que en mi teléfono apareció el mensaje de un amigo que estaba en la misma sala. Me escribió para comentarme el trance: “¿Por qué habla de eso?”. Ese amigo era escritor, profesor, hijo de profesores y exalumno de la educación pública. Mi respuesta fue algo así como “Esto es absurdo”. Supuse que se trataba de un discurso tipo, una especie de resumen de uso recurrente que, sin importar la audiencia, se repite una y otra vez en diferentes ceremonias, pero que dicho en esas circunstancias revelaba un síntoma de la fractura sobre la que se estaba construyendo la idea de una nueva reforma a la educación: extirpada de toda tradición cultural, rendida a los expertos económicos y carente de todo sentido de la historia.

La subsecretaria parecía hablar sobre el podio de la economía. Desde allí era imposible zurcir el ámbito de los números, las cifras y las declaraciones políticas, con el significado de que la Biblioteca Nacional editara un libro como ese.

Parecía como si las autoridades sencillamente no pudieran dar cuenta de un paisaje cultural que, por lo demás, estaba fuertemente vinculado a la escuela pública como una institución forjada durante el siglo xx, que había sido fundamental en la construcción de un horizonte común a la cultura chilena. El discurso que escuché esa tarde parecía estar hecho para un grupo de apoderados de algún colegio privado, el mundo al que pertenecía gran parte de los expertos a cargo de la reforma, el lugar de origen del ministro de educación, de la subsecretaria y también de los líderes universitarios de las movilizaciones de 2011 <sup>9</sup>. La experiencia de la escuela pública era un asunto totalmente ajeno a los círculos de poder.

Desde que comenzó la llamada Revolución de los Pingüinos en 2006, los periodistas escuchamos una y otra vez el relato de una crisis de la educación pública que era descrita como si se tratara de la agonía de un animal que se desangraba producto de las palizas que fue recibiendo durante décadas. Un recuento de azotes y llagas que arrancaban en dictadura con la reforma a las universidades de 1981, continuaba con la municipalización en 1986 y la ley orgánica constitucional de enseñanza de 1990, y remataban en democracia con la sostenida disminución de alumnos matriculados en las escuelas públicas, gracias a las políticas de los

gobiernos de la Concertación. Sobre lo que había ocurrido antes de la dictadura, poco y nada. Aquel era un tiempo sin testigos, una nebulosa que nadie quería explorar.

Durante las largas jornadas de tomas de 2006, la televisión mostraba imágenes de las escuelas de comunas lejanas al centro de Santiago: salas de clase derruidas, baños en estado miserable y grupos de escolares –niños y niñas– organizándose para enfrentar algo que los sobrepasaba a través de la mensajería de texto disponible en la época. Era el rastro más material de la crisis. Pero había otro que no se podía grabar con una cámara. Una herida invisible que atravesaba la manera en que la población percibía la educación pública en su vida cotidiana, más allá de los grandes discursos políticos. ¿Y cómo era percibida? Del mismo modo en que se juzga lo indeseable: liceo y escuela eran palabras que debían evitarse, que podían manchar un currículum y tensar una conversación. Egresar de un liceo y lograr una carrera profesional era una rareza que incluso merecía una nota en alguna sección del diario, como algo insólito que ameritaba ser registrado. Lo habitual era que quienes lograban cierta notoriedad pública, hablaran de su colegio privado de origen con orgullo. Así lo hizo un empresario en una revista cuando fue elegido Sebastián Piñera en 2010: nos recordó que era un exalumno del Verbo Divino quien entraba a La Moneda, había que enorgullecerse. En una columna de la escritora Diamela Eltit, ella mostraba la otra cara cuando describía un incidente callejero sin mayor importancia de no ser por el insulto que recibió: un hombre joven la llamó “rota de escuela municipal”.

La educación pública había alcanzado el rango de grosería, algo que se usa para ofender. Nadie parecía querer hacerse cargo de este hecho. La única manera de relacionarse con el desastre era mostrar que había dinero disponible para lograr que la educación de copago fuera gratis y que los más pobres pudieran estudiar sin pagar la universidad. Tampoco había mención a las condiciones de vida de los profesores, un gremio que en nuestra cultura está llamado a “sacrificarse” y hacer de su profesión una especie de apostolado angelical rendido a la abnegación. Eso ha sido una constante histórica.

El intelectual Luis Oyarzún describía en sus cartas a Gabriela Mistral y en su propio *Diario íntimo* las paupérrimas condiciones de los internados donde se educaban las futuras profesoras normalistas en el sur de Chile a fines de la década del cuarenta. Oyarzún contaba que dormían en galpones inhóspitos que apenas las protegían de la lluvia. Él mismo, en su rol de académico universitario, pese a su fama de hombre brillante, de haber sido decano por tres períodos y ejercer de vicerrector, vivió hasta su muerte en 1972 con la preocupación constante sobre su bienestar material y sobreponiéndose con más ingenio que fondos a los desafíos de hacer docencia en un sistema que parecía en crisis permanente. Dos años después de la muerte de Oyarzún, el mundo en el que él había vivido y educado a varias generaciones de profesores –en las escuelas normales y en el Pedagógico de la Universidad de Chile– comenzaba a desaparecer. Las reformas impulsadas por la dictadura a partir de 1974 recortaron los ingresos de los profesores y cambiaron dramáticamente sus condiciones de vida. El sacrificio, en lugar de encontrar un alivio, se intensificó hasta hacerse crónico con el retorno a la democracia, cuando la llamada “Deuda histórica”, se transformó en un estandarte maltrecho que de tanto levantarse, se fue destiñendo y deshilachando. El salario de los profesores en términos de poder adquisitivo quedó congelado en el tiempo, sin embargo algo impide que esto nos resulte escandaloso: la noción de que para dedicarse a la enseñanza había que estar preparado para el sacrificio. Algún vínculo debe existir entre las condiciones de vida de los profesores y los paupérrimos avances en educación en nuestro país durante la transición y con los magros resultados en habilidades lectoras y matemáticas de los chilenos. También debe haber una conexión entre la pauperización romántica de la profesión docente –el profesor es más virtuoso mientras peor malvive, mientras

más dificultades enfrenta— con el escaso interés en la investigación y la desconfianza que nos provoca como sociedad cualquier señal de creatividad.

El lema con el que arrancó la reforma educacional propuesta por el segundo gobierno de Michelle Bachelet fue económico —fin al lucro, gratuidad universitaria— y así se sostuvo hasta decaer en energías; en gran medida ese lema no se profundizó ni amplió porque quienes tenían el poder de hacer los cambios no contaban con las herramientas para elaborar una propuesta más densa que una glosa presupuestaria: la educación pública no era parte de su historia. Pudo haberlo sido para algunos —como en el caso de la presidenta Bachelet o Ricardo Lagos— que solían recordar su paso por el Liceo 1 o el Instituto Nacional. Sin embargo, a la hora de educar a sus hijos, eligieron colegios privados. La escuela pública quedaba circunscrita en su biografía a un pasado nostálgico que se invocaba cada tanto, como quien muestra credenciales de calle que servían para contentar al electorado.

En julio de 2014 entrevisté en La Moneda a Rodrigo Peñailillo, mientras fue ministro del Interior y antes de caer en desgracia por el financiamiento ilegal de la campaña presidencial. Hasta ese momento, él encarnaba una especie de símbolo del político que había escalado gracias al mérito. Peñailillo estudió en un liceo de Coronel y luego en una universidad pública de provincia y ahora estaba instalado en el corazón del poder político nacional. Sin embargo, cuando le pregunté si su hija estudiaría en una escuela pública, no titubeó: “Ella no... tal vez mis nietos”, me dijo. El mismo año durante el lanzamiento de un libro sobre enseñanza escolar escrito por un grupo de expertos, Nicolás Eyzaguirre, el ministro de Educación encargado de poner en marcha la reforma, hizo algunas declaraciones que provocaron asombro. Aseguró que más allá de la preocupación por la educación demostrada a través de las marchas, él no “sentía” que el país tuviera plena conciencia del tema.

Para ilustrar su punto dijo lo siguiente:

“Las familias son seducidas por ofertas de colegios ingleses que solo tienen el nombre en inglés y que por diecisiete mil pesos le ofrecen al niño que posiblemente el color promedio del pelo va a ser un poquito más claro [...]. Una cantidad enorme de supercherías que nada tienen que ver con la calidad de la educación”.

Aunque luego se disculpó, la frase era desconcertante. Lo que había dicho resultaba ofensivo de un modo similar a los comentarios que años más tarde harían algunos ministros del gobierno de Piñera. Eyzaguirre hacía referencia en su discurso a un sistema —el del copago— instalado y defendido por los gobiernos en los que él había participado en altos cargos; no se trataba de un capricho de las familias llevar a sus hijos a esos colegios con nombres pomposos; era lo que las políticas públicas estaban impulsando. La broma de Eyzaguirre, además, estaba cargada de un profundo desprecio de clase que aludía a elementos raciales —el color del pelo—, instalando el tema en una zona peligrosa. Era el ministro de Educación quien aparecía ejerciendo un tipo de crueldad muy propia del privilegiado que frente a su incapacidad de entender un mundo que le resulta ajeno, traduce los datos de la realidad a su propio alfabeto: esta gente elige colegio como quien elige un champú que le promete ser rubio, esta gente no solo es ignorante, también es arribista.

Cuando las familias matriculaban a sus hijos en esos colegios de los que él se burlaba, lo que hacían era huir del despeñadero y el descrédito que prometía el mero hecho de estudiar en una escuela con número. Las familias sencillamente atendían a las políticas gubernamentales que desde la dictadura apuntaban a un solo mensaje: la educación pública —como la salud pública, como el transporte público— es el foso en el que caen los pobres, aquellos que no son dignos de respeto, los destinados al fracaso. Era un mensaje que se fundió rápidamente con la tradición de jerarquías sociales heredadas de la colonia. Solo algunos —los de pelo más claro, parafraseando a

Eyzagirre– habitarían en la tranquilidad de la cumbre o sus alrededores; a la gran mayoría lo que le correspondería hacer, sería imitar los modos, conductas y prejuicios de quienes tienen el poder y evitar ser confundido con quienes vienen de más abajo. Ese terreno escarpado como la pendiente de un farellón, existía antes de la dictadura y de las políticas neoliberales. El Instituto Nacional tuvo, durante las primeras décadas del siglo xx, jornadas diferenciadas para niños de familias de clase alta y el resto. No se topaban. Tal como en el *apartheid* sudafricano el mensaje era el de un mismo país, varios destinos según la clase de pertenencia. Algunos colegios religiosos mantienen ese espíritu hasta hoy con colegios diferenciados según el barrio, que se llaman igual, pertenecen a la misma congregación, pero hay una versión real y una adaptada.

En ese sentido, la municipalización y el copago no crearon la segregación, solo la agudizaron y le dieron una nueva forma provocando un colapso de la educación pública que, conforme avanzaba el siglo xx , había contribuido a crear esa estrecha franja demográfica llamada clase media chilena, la tradicional anterior a la irrupción del consumo. La escuela y el liceo le abrieron camino a muchos, pero había diferencias siderales que la escuela no podía suplir cuando la desnutrición infantil superaba el 30% y los niños se morían de tifus.

El gran logro del proyecto educacional de la dictadura fue alejar a la antigua clase media y los segmentos medios surgidos durante la transición, de las escuelas y liceos, fundir el pavor por el desprecio social –ser considerados parte del pueblo llano– que caracteriza a esos sectores, con la oferta de un nuevo sistema que los separaría de los pobres y les prometería un acceso mayor a la universidad. Ese proyecto fue alegremente fortalecido por la democracia.

A partir de la Revolución de los Pingüinos surgió entre los políticos ansiosos por expresarle al electorado su sensibilidad, un conjunto de metáforas sobre la educación que evocarían una y otra vez a la idea de una competencia deportiva. Comenzaron a hablar con frecuencia de “emparejar la cancha” y de ponerle o sacarle los patines a los estudiantes en una retórica que pone el acento en individuos aislados que deben ver a los otros como rivales frente a los que hay que sacar ventaja. Todo el sistema parece volcado a esa idea de competencia que solo algunos pueden cumplir de manera exitosa. Matricular a un niño en un colegio es una carrera de obstáculos, en donde los padres y los hijos son puestos a prueba en su forma de vida, ingresos y creencias. El ideal de educación pública, en tanto, quedó restringido a los llamados “liceos emblemáticos”, un puñado de instituciones de Santiago que reciben un porcentaje minúsculo del total de los estudiantes chilenos, pero que aun así acapara mayor preocupación de los medios y los políticos que todo el conjunto de las escuelas y liceos del país. En el concepto de “liceo emblemático” se concentra un entramado de ideas sobre la educación pública que ha sido utilizado como un talismán de poderes sobrenaturales que impide pensar más allá de las cifras y montos de dinero. La principal virtud que se ostenta es la capacidad de seleccionar, de separar los alumnos con los atributos requeridos de aquellos destinados al fracaso ¿Qué se hace con el resto? No importa. Quedan lejos, fuera de la vista de los que se salvaron, juntando rabia en las poblaciones periféricas. El mensaje oficial nos indica que la única manera de lograr respeto es mantener asociado el prestigio al ámbito de lo exclusivo y excluyente. La escuela pública ya no más como lugar de encuentro, debate y convivencia, sino un estado de alerta individual, que obliga a reconcentrarse en la necesidad de escalar en dirección a una cima estrecha, poblada por el éxito de unos pocos, un triunfo que descansa en el fracaso de la mayoría.

## 2

### La disciplina de los cuerpos

En 2001 Silvio Caiozzi, el reconocido cineasta, presentó un breve trabajo audiovisual patrocinado por el ministerio de relaciones exteriores. El corto se llamaba *Chile, un encuentro cercano*, duraba nueve minutos y había sido encargado para dar a conocer a nuestro país en el exterior. Aquella producción mostraba paisajes, alternados por la opinión de extranjeros – visitantes y residentes– sobre Chile. Las frases de los turistas entusiastas eran recogidas, aparentemente, al azar en el edificio del nuevo aeropuerto que aún no cumplía una década de funcionamiento. Era un orgullo mostrar un terminal luminoso, de diseño contemporáneo, con niveles de embarque y arribo diferenciados, mangas que evitaban transitar por la pista y todas esas dependencias habituales en los grandes aeropuertos, pero que el antiguo terminal no tenía. Los extranjeros que habían sido entrevistados al pasar, como se suele hacer en esas encuestas callejeras, mencionaban el desierto, la Isla de Pascua, los lagos del sur, la montaña, la economía y los carabineros como aspectos que les parecían dignos de recomendar. Cada opinión era ilustrada con vistas aéreas de acantilados, bosques, montañas y algunas tomas del flamante barrio apodado Sanhattan. Cuando vi por primera vez ese cortometraje quedé con una sensación extraña, algo faltaba, una ausencia que apenas se vislumbraba, un vacío sigiloso que parecía hacer señas desde el fondo. Finalmente caí en cuenta: en aquella pieza de promoción faltaban los habitantes del país, faltaban los chilenos. No había rostros, ni declaraciones, ni obras, ni historias. No había cuerpos. Era como si en aquel cortometraje hubiera quedado establecido de manera tácita que los chilenos no éramos capaces de hablar por nosotros mismos, ni seducir a potenciales visitantes, como si nuestro testimonio no tuviera suficiente valor y debiéramos recurrir a un apoderado en condiciones de representarnos. Chile parecía ser un conjunto de elementos de categorías dispares; paisajes asombrosos, mariscos deliciosos, una economía pujante, un puñado de índices de Hacienda y algunas postales despobladas. Ese cortometraje me pareció un curioso artefacto cultural que resumía en forma nítida el tono de una época, la de los primeros años de la transición: un entusiasmo organizado sobre discursos inhabitados por gente común, sin los rostros de la calle, ni su lenguaje, sostenido por los números y avalados por especialistas extranjeros. De hecho, el envío chileno a la Exposición Universal de Sevilla en 1992 había estado reconcentrado en imágenes icónicas sin vida como un iceberg derriéndose, fotos de la cordillera o de marraquetas. El pueblo, sus costumbres, hábitos, eran reducidos a estanterías de supermercado de las que se cogían productos.

¿Dónde estaban los chilenos? ¿Cómo eran? ¿Qué los hacía disfrutar? Nada de eso aparecía en la promoción del país como destino turístico, porque era algo que ni siquiera internamente reconocíamos como un aspecto valioso. Para el exterior, Chile era oficialmente solo un paisaje. En los medios de comunicación locales, en tanto, la representación de los chilenos había pasado de la imagen del concursante de los antiguos programas de televisión –personas que iban con la ilusión de un premio– a la de un individuo con ánimo de evadirse de su cansancio del modo más tosco posible.

La televisión de la época se hizo cargo de las preguntas sobre cómo éramos y lo que nos interesaba, montando sobre todo representaciones de los chilenos y chilenas a través de los

programas de entretenimiento que explotaban la conversación trivial hasta el límite de la vulgaridad. No había más medida que el sentido común, el gorgoreo cómodo, inasible en su ligereza y banalidad. La impostación de lo común y corriente, de la informalidad sin rumbo que aparenta sencillez como hilo conductor de una conversación que se resbalaba sobre sí misma, como un muñeco torpe que no se cansa de dar tropezones. Charlas interrumpidas por el ritmo de moda que sonaba en un bucle infinito. Todavía recuerdo el estribillo de una canción sobre la mayonesa que repetían una y otra vez de la mañana a la noche como si de ella dependiera estar vivo. Una escena escalofriante de ese empeño de representación de lo simple como sinónimo de desprolijidad y torpe la protagonizó el animador Kike Morandé –ícono de la época– entrevistando a la actriz francesa Catherine Deneuve en 1995 en un programa de Canal 13. El conductor sostuvo un diálogo imposible que dejó en evidencia la fragilidad ética y estética de la industria de la televisión local. No había preguntas, sino balbuceos sin objetivo claro, o más bien, un intento de entretener a fuerza del chispazo de efecto. La actriz lucía desesperadamente incómoda.

Alguien había decidido que los conductores de televisión debían encarnar los intereses y preocupaciones de una audiencia media imaginada; hombres y mujeres que llegaban a sus hogares a descansar y, por lo tanto, necesitaba ver y escuchar sobre asuntos acordes con sus requerimientos: conversaciones sin sentido, cotilleos sobre la vida de personajes de farándula, chistes pícaros y personalidades expuestas a entrevistas elaboradas con la delicadeza de un ataque de tos convulsiva. En ese universo, la audiencia, el público, quedaba dividido en categorías socioeconómicas muy claras: ABC1, C2, C3 y D, es decir los segmentos que la publicidad establecía para organizar sus audiencias. Estas etiquetas parecían cobrar vida propia cada vez que alguien las invocaba, no había necesidad de detalles, era lo mismo que una tabla periódica que resume en un par de letras las características y propiedades de un elemento: esto es para gente ABC1; ellos tienen gustos de C3; esta es una casa típica de C2.

Fue este el esquema de síntesis extrema el que impulsó el ascenso del concepto informal de “gallada” para referirse a las personas de ingresos medios y bajos –C2, C3 y D–, a sus requerimientos y necesidades. Era la contraparte familiar del estereotipo de la señora Juanita creada por el presidente Lagos, o más directamente, eran sus familiares, sus hijos y nietos; la nuerza que pasaba el tiempo en el mall y los sobrinos que iban los viernes a bailar salsa a Bellavista o los bares de calle Suecia. La televisión ganaba muchísimo dinero gracias a los que conformaban el difuso espectro llamado “la gallada”. También lo dilapidaba sin calcular que a la vuelta de las décadas, “la gallada” los abandonaría por las redes sociales, YouTube y Netflix. La gallada reemplazaría la televisión por sus *smartphones* y los avisadores huirían tras ellos.

Los encargados de los medios de comunicación –ejecutivos, directores de televisión, productores, periodistas– utilizaban el concepto “gallada” con tal desparpajo en charlas y entrevistas que pronto pasó al discurso del operador político y del diputado con ansias de sintonía popular ¿Cómo se suponía que era eso llamado “gallada”? A juzgar por los registros disponibles, era una criatura ramplona, machista, conservadora, con muy poca curiosidad por conocer cosas nuevas, satisfecha de sí misma, autoritaria y al mismo tiempo temerosa. La gallada no era considerada pacata por una razón simple: le gustaban el sexo, los chistes de doble sentido o derechamente la exhibición del cuerpo femenino en disposición erótica en series, películas, portadas y conversaciones. La gallada veía la teleserie brasileña *Pantanal* (1992) esperando el momento en que el personaje protagónico se lanzara al agua semidesnuda, aguardando el microsegundo en que algo más o menos parecido apareciera en *Sucupira* (1996), cuando una de las protagonistas se zambullía en el mar durante la noche. Eso era interpretado como un signo transgresor porque iba en contra de los discursos morales y religiosos, aunque en realidad no

fuera más que el reverso de una misma manera del pensar la sexualidad: como una actividad semiclandestina relacionada directamente con la exhibición de un cuerpo femenino desnudo que provoca la excitación masculina. En ese sentido, la gallada era la audiencia ideal del “café con piernas”, ese espacio original y único que tuvo su auge durante los primeros años del siglo XXI. La lógica del “café con piernas” es un esquema nítido de la conducta conservadora, falsamente moderna y de profunda simulación que tenía la gallada ideal, una conducta que necesita una excusa para saciar un deseo que no se reconoce explícitamente y se disfraza de otra cosa. Un gesto que no se concreta, un rodeo intrincado para excitarse fantaseando una cópula, que en el mejor de los casos, ocurriría en los baños de servicio. Una barra de café atendida por mujeres vestidas como coristas de un espectáculo de revista de esos que en Santiago ya no existían. Ellas de un lado, los clientes del otro con una tacita de café como excusa. Un coqueteo mutuo y la espera de que en algún momento ocurriera el mítico “minuto feliz”, cuando las meseras se despojaban de sus corpiños para el deleite de los parroquianos.

Esa masculinidad propia de la gallada –su poder, sus alcances– quedó a la intemperie cuando en enero de 2000, en la esquina de Moneda con Bandera, en un sitio eriazó fue instalado el proyecto de arte Nautilus: una casa transparente en la que viviría una estudiante de teatro durante dos meses (ese era el plan original), haciendo la rutina diaria sin muros que protegieran su intimidad. Desde el primer día, decenas de hombres rodearon el lugar para fisgonear el momento en el que se duchaba. El proyecto de arte se transformó en noticia nacional por la desnudez del cuerpo de la joven que luego sería acosada en la calle por varones que llegaban de madrugada a espiarla. Surgió un debate aparentemente en torno a qué tan artística era la propuesta, aunque en el fondo todo el revuelo se reconcentraba en los minutos en que la actriz contratada se bañaba. El foco de la inquietud era el cuerpo de una mujer desnuda bajo la ducha, no la reacción que provocaba eso alrededor. Este punto quedó claro cuando en menos de una semana fue reemplazada por un hombre; la mujer no soportó el acoso. Con el cambio de morador la alarma desapareció. Nadie se interesó en espiar el cuerpo del nuevo habitante de la casa de vidrio. Tampoco interesó armar debates sobre los límites del arte.

El concepto de “gallada” consistía en exaltar una manera de ver las cosas que debía ser aceptada sin críticas, porque era la costumbre de una mayoría fantasmal, una mentalidad asociada al concepto de “pueblo” y, por lo tanto, superior a cualquier reparo desde la izquierda o censura desde la derecha. Había que darle lo que quería, es decir, programas con modelos que debían tolerar las bromas sobre su cuerpo, las portadas del *The Clinic* en las que se ridiculizaba a políticos varones con caricaturas que los representaban como travestidos o sodomizados por sus rivales, o los discursos políticos con promesas tan concretas como una playa en la ribera del Mapocho.

La gallada –esa audiencia ideal que se confundió con la noción de pueblo y de ciudadano promedio– era un adolescente ansioso de pensamiento concreto cuya vida fuera del trabajo era concebida como un largo recreo de colegio de varones en donde o se jugaba al fútbol o se buscaba una víctima a quien humillar para entretenerse hasta que sonara el timbre que anunciaba la próxima clase. Esa era la representación que tenían en mente ejecutivos de televisión y políticos de la manera en que se conducían los chilenos y las chilenas. Sobre ella se elaboraba una programación semanal de los canales de televisión que tenían el poder de llegar a todos los hogares como ningún otro medio podía hacerlo. La gallada era una mascota mañosa y glotona, que consumía bailes de moda, personajes ridículos y chimuchina de ocasión, pero también era una criatura que buscaba verse a sí misma en las pantallas de un medio en el que rara vez aparecía como protagonista.

La televisión y la publicidad renegaban de presentar a la gallada tal como era, porque no se ajustaba al ensueño blanco de rasgos europeos que la misma gallada juzgaba apropiado ver. Los “rostros”, otra categoría relacionada con la televisión surgida en la época, rara vez podían ser morenos o lucir rasgos indígenas. La norma se repetía en los periodistas ancla, los protagonistas de teleserie, los conductores de matinales y de programas nocturnos. La gallada era morena, pero sus embajadores en pantalla no podían serlo.

La teleserie más exitosa de la primera década del siglo fue *Amores de mercado* emitida por TVN en 2001. La producción recreaba en clave cómica la vida en el ambiente de los locatarios del mercado central. La trama partía con la confusión de dos hermanos gemelos separados al nacer. Uno era rico, el otro era pobre. Una especie de reinterpretación de *El príncipe y el mendigo*, en donde el actor protagónico, por supuesto, debía lucir más como el cliché del aristócrata inglés que como la realidad de un mesero chileno de restorán popular. En la ficción televisiva los morenos eran usualmente relegados a personajes secundarios o cómicos, como Los Venegas (1989–2011) una producción barata destinada al mediodía, un horario inofensivo. Los protagónicos debían ser blancos, sobre todo en el caso de las mujeres, tal como los llamados “rostros publicitarios”, personalidades que representaban una marca y que en ocasiones tenían poco que ver con el tipo físico de la mayoría de sus compradores. La posibilidad de un personaje indígena en una teleserie era aun más extrema, porque sencillamente no existían para la televisión, y cuando aparecían, eran encarnados por un actor o actriz que simulaba serlo. De hecho, el personaje de Millaray, la joven mapuche de la teleserie *Los Capo* (2005), fue interpretada por una actriz que tenía tanto de mapuche como Sofía Loren de sueca.

Según el criterio de quienes hacían televisión, a la gallada no le gustaba mirarse al espejo. Esto lo confirmó Alberto Gesswein, el productor ejecutivo de la serie *Los ochenta* (2008–2014), en una entrevista a *La Tercera*. Gesswein contó las dificultades que había encontrado entre los ejecutivos de Canal 13 para llevar a cabo la idea de una producción sobre una familia de clase media durante la dictadura. A los ejecutivos no les parecía atractivo, porque al público no le iba a interesar una historia que involucrara la política. Pero además había otro asunto sobre el que Gesswein enfatizó: los rasgos físicos del elenco no eran del gusto de los directivos.

“En un principio me decían, ‘pero son todos muy morenos’. [...] este proyecto se hizo de forma peculiar. Lamento decirlo, pero es verdad: gracias a que el canal estaba en crisis, y que no había nadie preocupado en ese minuto, el proyecto fue lo que fue. Porque si no, hubiese sido intervenido por muchas razones, entre otras porque el casting era muy moreno” <sup>10</sup>.

*Los ochenta* fue un hito: por primera vez la televisión abierta recogía la historia de una familia de clase media como eje del relato; por primera vez también se recreaba lo que había significado para la mayoría de los chilenos los años de dictadura en la televisión abierta, las tensiones domésticas y los pequeños miedos de una época venenosa cuyo recuerdo habíamos decidido mantener a resguardo.

\*\*\*

La manera más obvia de interpretar el interés masivo que provocó la convocatoria del artista norteamericano Spencer Tunick para participar en su proyecto *Nude Adrift* (2002), era que los chilenos –o más bien los santiaguinos– querían cortar con las amarras morales anudadas por los sectores conservadores de la Iglesia católica durante la transición. Había razones para pensarlo así. El gran destape a la española que muchos estaban esperando con el retorno democrático fue frustrado por una agenda religiosa avasalladora, que estableció un férreo control sobre los cuerpos de los chilenos (especialmente de las chilenas) durante los primeros años de la transición

y restringió la idea de “valores éticos” al ámbito de la sexualidad y la reproducción. En 1991 el arzobispo Carlos Oviedo Cavada –muerto en 1998 y denunciado por abuso sexual y violación en 2019– publicó el documento pastoral titulado *Moral, juventud y sociedad permisiva*; el objetivo final del texto era dar un golpe en la mesa, frenar programas gubernamentales de educación sexual y moderar las políticas del nuevo Servicio Nacional de la Mujer, cuya subsecretaria se declaraba feminista, una palabra que en esa época era considerada peligrosa. El documento del episcopado sembraba la alarma sobre “el libertinaje sexual” y el “hedonismo malsano” que acechaban a la sociedad. Poco tiempo más tarde, en 1992, hubo un intento gubernamental por difundir una serie de avisos televisivos como parte de la campaña de prevención del Sida. En los avisos se recomendaba el uso del preservativo. Canal 13, entonces la señal de mayor audiencia y dependiente de la Universidad Católica, y Megavisión, un canal cuyo dueño era un reconocido millonario católico conservador, rechazaron ponerlos en pantalla. La negativa se extendería en los años sucesivos. No solo las campañas de difusión masiva para frenar la epidemia fueron rechazadas por las organizaciones más conservadoras, también los programas de educación sexual organizados para las salas de clases fueron ferozmente criticados. En 1996 el gobierno puso en marcha las Jornadas de Conversación sobre Afectividad y Sexualidad, conocidas como Jocas. Expertos en salud se reunían con adolescentes de liceos y escuelas y les entregaban información sobre sexualidad, reproducción y enfermedades de transmisión sexual. La prensa de la época difundió la iniciativa en un reportaje escrito en el estilo de una denuncia. La nota publicada en *El Mercurio* en septiembre de 1996, estaba ilustrada con una foto de dos niños –que no formaban parte de los adolescentes incluidos en las jornadas– mostrando paquetes de preservativos. El reportaje anunciaba que ahora los jóvenes sabían cómo se usaban los condones. El escándalo estalló. Hernán Larraín, senador de la UDI, exigió la inmediata paralización de las Jocas y el obispo Jorge Medina recomendó a los padres que no permitieran que sus hijos participaran de las jornadas de educación sexual. En adelante, cualquier esfuerzo por elaborar programas de prevención masiva debía moverse sobre un campo minado, esquivando entregar información clara sobre las maneras de transmisión del VIH y las formas de prevención. Cada campaña era un riesgo para los especialistas a cargo; usar la palabra “condón” significaba exponerse a ser señalado como responsable de algo parecido a un crimen. No había que hablar de sexo, ni de genitales, ni de los efectos de ciertas conductas relacionadas con el placer, sino solo de amor y castidad. Esa línea se mantuvo por inercia y la consecuencia de largo fue el descontrol de la transmisión del VIH y de las enfermedades de transmisión sexual en la población adolescente <sup>11</sup>.

Existían, por lo tanto, razones para interpretar una performance con desnudos, como la que suponía el proyecto de Tunick, como algo parecido a una respuesta a la arremetida conservadora. El cuerpo desnudo era, para parte importante de la élite conservadora local, una incitación al desenfreno sexual. Sin embargo, el entusiasmo para participar en la fotografía de Spencer Tunick fue mucho más que una protesta o una manifestación en contra de algo específico; puede ser interpretado como una especie de acto voluntario y masivo para marcar presencia, la manera en la que miles de personas decían: esto somos, así nos vemos.

Los chilenos y chilenas, la mayoría menores de treinta años, que rara vez aparecían en los medios de comunicación, cuyos deseos y formas de mirar el mundo tampoco eran representados por los políticos en el parlamento, ni sus reivindicaciones atendidas por los partidos políticos, acudieron en masa la madrugada del domingo 30 de junio de 2002 a posar desnudos frente a la cámara de un artista desbordado por la situación. Tunick había llegado al país como parte de un seminario de arte contemporáneo junto con otros artistas pero, a la larga, su visita y su nombre

cobraron un peso y un valor propio que opacó el objetivo original. Nude Adrift era un proyecto que no tenía como meta romper records de asistencia ni hacer fotografías de desnudos masivos como provocación, pero esa fue la lectura que se le dio en Chile, una especie de competencia, una manera de figurar en un ranking inexistente. Durante la semana anterior a la fecha la expectación creció. La plataforma de inscripción en internet recibió miles de solicitudes.

Junto a una compañera periodista que cubría artes visuales para el suplemento cultural en el que trabajaba, decidimos que iríamos a ver qué resultaba de todo eso y nos acreditamos como reporteros. Al menos a mí me parecía descabellado que alguien quisiera desnudarse una madrugada de invierno en el Parque Forestal a vista y paciencia de extraños; tal cosa me parecía improbable. Estaba muy equivocado.

Llegué alrdededor de las cuatro de la mañana al barrio Bellas Artes. Las calles estaban cerradas con vallas y un piquete de carabineros vigilaba a grupos evangélicos que con pancartas recriminaban a los jóvenes que llenaban los calles solos o en grupo.

La mayor parte de los participantes venían de los bares y discoteques de la zona. Ahí entendí que para muchos, la foto sería el remate de una noche de fiesta.

La zona reservada para los periodistas estaba en el extremo norte del barrio, sobre el puente Loreto, con vista hacia el museo de Bellas Artes, el espacio en donde originalmente debían reunirse los convocados. Desde ahí podíamos ver el enjambre de personas que llegaba desde el sur y desde el barrio Bellavista; eran demasiados para el área dispuesta para posar. En un costado del Museo de Arte Contemporáneo había una zona cercada para que la gente dejara su ropa, pero fue desbordada por la concurrencia; con el paso de los minutos las ramas de los árboles aledaños fueron usados como colgadores de guardarropía. Los organizadores se paseaban con un gesto que iba de la preocupación al desconcierto. En un minuto debieron cambiar de planes y ordenar que la gente se reuniera a lo largo de la Avenida José María Caro, la calle que cruza en paralelo el Parque Forestal. Eran cuadras de personas desnudas esperando al artista.

La convocatoria para la foto de Spencer Tunick reunió cerca de cuatro mil personas que se desnudaron en la intemperie, a vista y paciencia de la prensa y los extraños. Hombres y mujeres, la mayoría jóvenes y algunos ancianos, saltando, riendo, cantando como hacen los niños pequeños cuando los bañan sus padres. La desnudez como una fiesta. Cuerpos comunes y corrientes, la inmensa mayoría sin evidencia de ejercicio físico a cuestas, la piel pálida, morena, amarilla, tersa en algunos, fofa en muchos otros. La musculatura escasa, la grasa abundante, las proporciones dispares. Algunos se abrazaban entre sí, otros se trepaban a los árboles, jugaban a correr sobre el pavimento para entrar en calor, gritaban y ondeaban banderas chilenas. No era ni lejanamente una situación erótica, tampoco la disposición que uno esperaría para una acción de arte, sino algo cómico, como una travesura infantil a ratos entrañable. A la distancia se escuchaban los gritos de los evangélicos que amenazaban con la furia divina. Spencer Tunick – montado en una escalera de tijera– miraba confundido el paisaje de cuerpos desnudos que se extendía en perspectiva hacia el oriente como un rebaño inquieto y alegre. Eran los cuerpos de los chilenos. La algarabía desatada no era el ánimo habitual entre los modelos de su proyecto en otras partes del mundo que, por lo general, eran grupos pequeños y silenciosos de personas que acudían para colaborar porque estaban interesados en el arte contemporáneo, o estaban vinculados a alguna escena artística que seguía las instrucciones de Tunick sin expresar mayores emociones, él sacaba las fotos y ya está. Así había ocurrido en Buenos Aires, la última ciudad que visitó antes de llegar a Chile. En Santiago, en cambio, el artista se encontró con un talante desbordado y nervioso y una atención mediática insólita.

A diferencia de las imágenes habituales de su obra, en donde los cuerpos yacen sencillamente

sobre la superficie elegida, los asistentes querían cobrar protagonismo, miraban a la cámara del mismo modo en que se posa para un retrato familiar. Aquí estamos, esto somos, parecían estar diciendo. Los cuerpos y rostros habitualmente barridos bajo la alfombra buscaban su espacio. La expectación nacional provocada por la fotografía de Tunick fue tan grande que opacó la final del Mundial de Fútbol de Corea-Japón que se disputaba a la misma hora y obligó al presidente Lagos a hacer una declaración que describió la escena artística de una multitud desnuda como “un acto que habla bien de Chile”.

\*\*\*

Entre 1995 y 2005 hubo un giro y aceleración en la forma en que las personas más jóvenes se relacionaban con los medios de comunicación masivos, sobre todo con la televisión. Lo que esperaban de esos medios ya no sería mismo que las generaciones anteriores, porque las tecnologías cambiaron y las maneras de compartir información y contenidos tomarían rutas distintas a las habituales. La televisión, y en menor medida la radio, comenzarían a ser desplazadas por la pantalla del computador, de uso personal, como aparato de conexión con el exterior. El declive de los programas juveniles de televisión orientados a transmitir videos musicales fue un fenómeno internacional que comenzó a acentuarse con el avance de la banda ancha que permitía acceder a través de internet no solo a texto, sino también a sonido y video.

El síntoma más notorio ocurrió efectivamente con los programas juveniles, que perdieron el sentido original que habían tenido desde los ochenta, transmitiendo videos musicales, promocionando bandas y solistas y comentando las nuevas tendencias de consumo cultural adolescente. El lugar en donde esos contenidos se obtenían ya no serían los medios masivos clásicos –el rol que cumplía MTV o los suplementos juveniles como Zona de Contacto de *El Mercurio* – sino internet y la posibilidad de tener contacto directo, sin intermediarios, con adolescentes de diferentes lugares de la ciudad, del país o del mundo. En internet habría mucho más sobre *animé* japonés, *indie* europeo, pop coreano y electrónica inglesa que en años de suscripciones a revistas extranjeras y suplementos nacionales en papel. Para un país geográficamente aislado del resto del mundo, en donde obtener información de lo que sucedía fuera en materia de cultura popular había sido siempre un asunto dificultoso, una especie de tráfico informal del que se encargaban unos cuantos excursionistas privilegiados que iban y venían de Buenos Aires, Miami, Nueva York o Londres, este cambio significó una brecha generacional a la que muy pocos prestaron atención. El síntoma callejero más visible de la transformación fueron los grupos de adolescentes que abrazaban un estilo híbrido conocido como “pokemones”, un nombre asociado a una serie de *animé*, con una estética visual andrógina en la que se adivinaba influencia gótica, pero cuyos gustos musicales –que podían ir desde el hip hop al pop latino– se distanciaban de la música anglo que tradicionalmente escuchaba esa tribu urbana. Los pokemones se reunían en zonas céntricas de Santiago y sus comunas de origen estaban en los suburbios de clase trabajadora. Tenían, además de los puntos de encuentro geográficos –Eurocentro, el Parque Balmaceda, el Parque Uruguay, el caracol de Nueva de Lyon–, sitios virtuales, Fotolog y Myspace, que usaban como vitrina de sus cuerpos, sus gustos y pasatiempos. Eran la primera tribu chilena surgida en la era del internet.

Los pokemones además vivían una sexualidad muy diferente a la tradicionalmente representada en los medios de comunicación masiva y a contramano de los discursos oficiales impuestos durante la transición. Incluso el *New York Times* consignó este aspecto en un artículo publicado en 2008 que fue titulado como “El despertar sexual de Chile”:

“Chile, considerado uno de los países más tradicionales en sudamérica, está chocando de frente

contra esa reputación con sus precoces adolescentes. La juventud chilena está viviendo un periodo de exploración sexual que, aseguran académicos y funcionarios gubernamentales, no se parece a nada a lo que el país haya presenciado antes” <sup>12</sup> .

Los adolescentes descritos en el *New York Times* eran pokemones que se reunían a “poncear”, es decir, a besarse y acariciarse alternativamente con distintas parejas durante una misma fiesta. Se establecía una nueva distancia entre aquello que el *establishment* pensaba que estaba pasando en el país, lo que ellos querían ver y lo que realmente ocurría. Las circunstancias materiales y tecnológicas parecían superficiales o irrelevantes, pero involucraban algo más profundo, una grieta que se extendería a través de las décadas en cuanto los teléfonos se hicieran portables, individuales, incorporaran internet, sistemas de mensajería y aplicaciones de contactos personales, rompiendo los límites de la habitación adolescente. En la televisión local eso tuvo un efecto progresivo: el antiguo formato de ranking de videos, imitado de MTV y el programa británico *Top of the pops* , desapareció. *Sábado taquilla* fue cancelado y los clásicos como *Extra j óvenes* debieron ser reformulados.

La programación cambió sus contenidos, los orientó hacia el auge de la exhibición de la intimidad con distintos formatos de *reality shows* –documentales, concursos de talentos, competencias físicas– y la explotación de la vida privada de personajes de farándula. En ese tránsito apareció *Mekano* (1997) en Megavisión, uno de los canales que se había negado a transmitir las campañas de gobierno de prevención del Sida y condenado las Jocas. En su primera temporada, *Mekano* no se diferenciaba de los antiguos programas juveniles, pero fue mutando hasta dar con una fórmula que tuvo un rotundo éxito. El nuevo formato tenía un conductor que estaba en permanente diálogo con un grupo de jóvenes con cuerpos de gimnasio que alternadamente bailaban, hablaban sobre sus conflictos y sus romances. El desembarco de los grupos de baile brasileños de *axé* , un estilo musical de norte de Brasil, consolidó la propuesta, provocando un fenómeno nacional. Los bailarines de *axé* –su aspecto, sus movimientos, su perpetua alegría– parecían ser todo lo que los chilenos no éramos. Eran el reverso del aspecto habitual de los pokemones, pero coincidían con ellos en la apelación a la sexualidad y el erotismo adolescente como una constante.

Cada uno de los personajes que formaban parte de *Mekano* , incluidos los bailarines de *axé* , se convertiría en un personaje, con seguidores y detractores. Era el primer brote de una industria de la farándula que dominaría la entretención durante varios lustros en la programación local, inundando desde los matinales hasta los programas nocturnos. Incluso la prensa escrita debió adaptarse para capturar la atención de esta nueva audiencia.

Las estrellas del pop envasadas en videos musicales fueron desplazadas por un nuevo tipo de celebridad cuya fuente de fama no era necesariamente el cultivo de un talento artístico específico. El atractivo consistía simplemente en sus personalidades, los rumores en torno a sus relaciones románticas, los rasgos de carácter de cada uno y el atractivo físico involucrado. *Mekano* y luego *Yingo* fueron un semillero de estrellas menores creadas para satisfacer a la versión adolescente de esa audiencia ideal llamada comúnmente “gallada”, difundiendo los valores en circulación –éxito, dinero, fiesta– y explotando la propia intimidad como un producto de consumo masivo que los medios estaban dispuestos a pagar.

La idea de “team” como conjunto de personajes de cuerpos trabajados que estaban permanentemente dispuestos al baile y a responder preguntas absurdas o indiscretas, cobró popularidad y fue apareciendo un circuito de programas que le dio voz a un coro que vivía en un universo paralelo: eran famosos porque aparecían en televisión y aparecían en televisión porque eran famosos. No había obra que mostrar. No eran actores ni actrices, ni músicos, ni cantantes, ni

atracciones de un show de variedades, ni de revistas. Tampoco eran aristócratas venidos a menos –la cantera clásica de revistas como *Hola* y *Cosas* –, ni menos aun herederos de millonarios, como Paris Hilton. Eran en su mayoría hijos de una clase media baja brumosa o extranjeros – brasileños, argentinos, españoles– que llegaban a probar suerte premunidos de rostros europeos y físicos de competencia. Con los programas juveniles y luego los *reality shows* –*Protagonistas de la fama* (2003)– nació una industria en torno a personalidades creadas para explotar su atractivo y sus conflictos de pareja –reales y simulados–. En algunos casos, la factoría de la farándula llegó incluso a instalar sus subproductos en la política en la forma de candidatos de cocción rápida, principalmente en partidos de derecha.

La farándula fue la máxima expresión de una industria hecha de aire viciado, una burbuja económica, un circuito de negocios y un fenómeno social. A través de las historias de estos personajes, de la forma en que la prensa cubría sus conflictos, también se intuía un remezón en las maneras de valorar las relaciones humanas y el consumo como promesa de estatus. La moral que establecía en sus conflictos televisados tenía como eje la satisfacción de la ambición de ascenso individual por sobre cualquier otra aspiración. Nos instruía una y otra vez en la importancia de ser frontal, decir las cosas tal y como se sentían en el momento, sin miramientos ni concesiones. Si te gusta, bien, si no te gusta, púdrete; había que desdeñar los falsos pudores y mostrar lo que se tenía, lucirlo sin complejos. En ese universo no existía el espacio para la derrota, pero sí para la humillación que solía ejercerse sobre los más débiles, en especial si eran mujeres.

La farándula no refutaba los roles de género tradicionales; bajo un barniz transgresor hervían juicios conservadores que siempre se acomodaban al *statu quo*. Aplaudía el mérito, pero cobraba caro el gesto, exponiendo a hombres y mujeres con escasa educación a la burla pública por su manera de hablar o por su forma de vida. Era una industria que exigía voluntad y ausencia de escrúpulos, pero por sobre todo ensalzaba un modelo de vida que subrayaba que lo importante no era competir, sino ganar. Solo ganar.

Hasta ese mundo llegó Nicole Moreno. Primero a *Mekano* en 2006 como bailarina y luego en 2007 a *SQP*, el programa decano en el chismorreó profesional. Allí aprendió las claves y los códigos de una industria en auge. Fue sacándose todo el partido posible para ser vista y recordada, y creó a “Luli”, un personaje improbable, que hablaba con un cantito insufrible, retardando las frases, luciendo el cuerpo bronceado de solarium, con la sonrisa estampada en la cara como un mal hábito que no se borra ni con las burlas que recibía en vivo y en directo, ni con los conflictos de poca monta en los que se involucraba para poder tener la única meta posible: más pantalla, más fama, más dinero. Nicole Moreno se vistió de Luli y construyó algo parecido a una muñeca –rizos platinados, escote erotizado, oratoria cómica– que muchos trataron como a una piñata: con burlas y golpes que ella sabía aguantar y responder. Todo por un sueño.

Su lugar sería, en adelante, el de la invitada a programas de farándula en donde la materia prima eran los conflictos de un circuito cerrado de estrellas de ocasión que se miran a sí mismas con el interés de la vecina sin vida propia. Nada como la desgracia ajena para relajarse.

Conocí a Nicole Moreno en marzo de 2016, cuando ya era famosa y le daba un nuevo aire a su carrera; por alguna razón, la directora de la revista *Paula* pensó que me interesaría entrevistarla. Estaba en lo correcto. Moreno había sido coronada Reina del Festival de Viña de ese año, el máximo galardón posible en la carrera de una celebridad femenina nacional y en revista *Paula* habían decidido llevarla en portada, una decisión poco habitual, porque generalmente la imagen de tapa estaba reservada para una modelo profesional o una mujer de la élite social. Titulé la nota “Una criatura llamada Luli”, haciéndole un guiño al perfil sobre Marilyn Monroe escrito por

Truman Capote, una broma que algunos interpretaron como un gesto de condescendencia o de burla con ella. No lo era. O más bien era una ironía sobre nosotros. Sobre mí mismo, sobre ella y el país y la época en que nos había tocado vivir. De cualquier modo, los lectores tenían cierta razón en desconfiar de lo que un periodista pudiera escribir sobre Nicole Moreno, una persona que había sido ridiculizada constantemente por sus dichos, su vida, su origen: la hija de un técnico textil y una dueña de casa que vivió su infancia en San Bernardo asistiendo al colegio del barrio hasta que se embarazó de su primer novio. Tenía catorce años y estaba enamorada, me dijo. Para mantener al niño dejó el colegio y buscó un empleo. Encontró uno como promotora en distintos centros comerciales, pero ella siempre quiso más, y eso significaba llegar a la televisión. El relato de su vida tiene mucho en común con el mundo descrito en los relatos del libro *Qué vergüenza* (2015), de su coetánea la escritora Paulina Flores, en donde el origen social, la noción de lo femenino y los empleos precarios conviven con la importancia de la imagen.

Durante la entrevista, Nicole Moreno trató de hablar lo justo, una cautela poco habitual en ella. Pese a mis esfuerzos, algo en mí la hacía sentir incómoda.

–¿Cómo fueron tus primeros trabajos?– le pregunté después que me contó de su embarazo adolescente.

“Mis primeros trabajos los recuerdo con felicidad. Eran trabajos de promotora...”.

Usó esa palabra, “promotora”, no dijo “modelo”, como solían presentarla.

–¿De qué hacías promoción?

–Hacía promoción de productos Unilever. Al desodorante Axe. Me instalaba en una cabina de supermercado, uno que se llamaba San Francisco, que ahora es Tottus. También en el Líder de Cantagallo, en el Jumbo de La Reina. También trabajaba para tarjetas de crédito, en Almacenes París; ahí me iba increíble, vendía seguros, todo eso. Eso lo hacía en el mall, en el Plaza Oeste, captando clientes para tarjeta París. Me iba bien, era la que más vendía seguros, la que más captaba clientes, la primera en llegar a las metas.

Nicole Moreno me contó todo eso con una sonrisa, estaba orgullosa del camino recorrido, de recordar el número de la micro que tomaba para ir desde su casa a Plaza Oeste –la 104– y también de poder mostrarme algunas fotos de sus vacaciones en Tailandia. Pero por sobre todo saber con precisión la marca del reloj y el anillo de cristales que llevaba ese día: Michael Kors y Swarovski.

–¿Te gustaría que tu hijo estuviera en televisión?– le pregunté mientras miraba las fotos de sus vacaciones. Su respuesta fue enfática:

–No. No. No. Me muero. Para mi hijo quiero lo mejor. Lo mejor. Quiero que sea todo lo que yo no fui.

Para cuando entrevisté a Nicole Moreno, el auge de la farándula iba en retirada. En 2017 sería cancelado *SQP* y luego desaparecerían de la programación todos sus sucedáneos. La crisis del género también alcanzó a los programas juveniles. Las redes sociales y los *smartphones* desangraron el negocio de las audiencias. Los avisadores huyeron de los medios tradicionales buscando nuevas plataformas en donde encontrarse con los consumidores en forma directa.

En enero de 2019 leí que el hijo de Nicole Moreno fue detenido luego de un tiroteo y formalizado por homicidio frustrado. El adolescente, menor de edad, fue internado durante tres meses en un centro del Servicio Nacional de Menores como medida cautelar mientras la investigación terminaba. Cuando quedó libre para cumplir arresto domiciliario mientras la investigación continuaba, Nicole Moreno publicó una *selfie* en su cuenta Instagram –con más de un millón de seguidores– asegurando que era el día más feliz de su vida. Ya retirada de la televisión, o más bien sin un programa en donde continuar trabajando, Nicole Moreno había

iniciado una carrera de fisicoculturista y de *influencer* , siguiendo al pie de la letra las señales del mercado.

\*\*\*

La foto es de una revista *Ercilla* de 1962 y retrata a cinco niños descalzos que visten con ropa sucia y permanecen sentados en lo que debe ser la banca sin respaldo de una comisaría policial. El grupo era conocido como la “banda de las manos chicas”, según indicaba el texto, y se dedicaban a robar. El líder era apodado “el Capitán Pollito” y tenía diez años. Era la época del Mundial de Fútbol y las autoridades habían puesto en marcha un plan para limpiar el centro de Santiago, lo que incluía sacar a cientos de chiquillos de las calles y llevarlos a “hogares” dispuestos para el caso, explica el historiador Jorge Rojas en su libro *Historia de la infancia en Chile republicano* . ¿Por qué habían llegado a vivir en la calle? ¿Quiénes eran sus padres? ¿Desde cuándo robaban?, eran preguntas que no tenían respuesta. Simplemente existían y era necesario que ya no estuvieran más a la vista de todos. El sentido común del momento se las había arreglado para hacer de esos niños una categoría especial, folclórica, “pelusas”, una palabra amable que evocaba mugre y desamparo, y al mismo tiempo un rodeo mental que ponía la vida de niños-mendigo en el ámbito de lo pintoresco.

La noticia sobre la banda de las manos chicas es un ejemplo del modo en que nuestra relación con los niños, niñas y adolescentes suele estar determinada por el origen social y la pobreza: niños que seguramente nacieron en la miseria, vivieron abusos y sobrevivieron delinquiendo, son dispuestos mentalmente por aquello llamado “sentido común” en una categoría especial, apartada, la del “pelusa”, a la que es posible contemplar como no se haría con otros nacidos en un ambiente diferente.

Desde los setenta era menos frecuente verlos vagando por las calles, durmiendo apiñados en el invierno o corriendo descalzos tal y como los había fotografiado Sergio Larraín en los cincuenta. Para los noventa habían desaparecido del paisaje urbano habitual; la nueva marginalidad los había hecho invisibles, pero lo que no había desaparecido eran las ideas asociadas a la pobreza.

En 1999 un grupo de padres de Alto Hospicio debió enfrentarse a esas ideas cuando sus hijas desaparecieron sin dejar rastro. Cada vez que acudían a las autoridades policiales de la época para rogarles que investigaran lo que había ocurrido con sus hijas, en lugar de hacerlo, las autoridades abrazaban la teoría de que las chicas habían huido de sus hogares para prostituirse en Perú. Era lo natural. Si eran pobres, seguramente tenían problemas en sus familias y la manera en que las adolescentes sin recursos resolvían esos conflictos era acudiendo al comercio sexual. Ese parecía ser el razonamiento de Carabineros, una idea refrendada por las autoridades políticas.

Alto Hospicio había sido un poblado pequeño, apenas un caserío, hasta que a mediados de los noventa fueron llegando cada vez más familias a levantar viviendas informales. Para cuando comenzaron a extraviarse adolescentes, Alto Hospicio ya era un enorme asentamiento de miles de personas que, a falta de techo en la vecina ciudad de Iquique, se tomaron los terrenos del borde de la meseta que enfrenta la costa, a ochocientos metros de altura. Las casas hechizas fueron esparciéndose sobre una pampa seca, bañada por una luz despiadada, formando un sarpullido de bordes irregulares sobre una costra polvorienta. La población creció, se multiplicó, improvisando calles, sin conexión a una red de electricidad ni agua potable. Los vecinos tampoco contaban con un sistema de transporte eficiente que los llevara y trajera de sus trabajos y escuelas en Iquique. Como en gran parte de los suburbios y ciudades de provincia, dependían de los colectivos informales para transportarse. Era el sistema que usaban con frecuencia las catorce mujeres asesinadas por Julio Pérez Silva, “el psicópata de Alto Hospicio”. Pérez usaba su auto

como taxi clandestino, así pudo recoger a las muchachas sin despertar sospechas, luego las llevaba al desierto, las violaba, mataba y enterraba. Eso hizo hasta que en 2001 una de sus víctimas logró escapar. Gracias a ella, la tesis que manejaba Carabineros se derrumbó, efectivamente había un hombre que atacaba mujeres. Los padres de las muchachas desaparecidas pudieron por fin desde ese momento conocer el destino de sus hijas.

Desde 1999 hasta 2001 las autoridades de gobierno habían respaldado la versión de la policía que aseguraba tener indicios de que las muchachas habían escapado voluntariamente de sus casas para ejercer el comercio sexual. Una indolencia similar a la que durante décadas mantuvieron los gobiernos democráticos con el Servicio Nacional de Menores, en cuyos centros –la mayoría de ellos externalizados a fundaciones privadas dependientes de instituciones católicas– era habitual que se cometieran abusos de todo tipo o que no se aclararan las razones de muerte de los internos. Cuando se trata de niños pobres a veces el péndulo se inclina por la alarma, otras por la compasión, la mayor parte del tiempo permanece quieto en la zona de la indiferencia.

Sobre lo que ocurría en el Sename nos fuimos enterando a cuentagotas. Había indicios, pero también un entramado bien firme de intereses al que no le convenía una investigación exhaustiva que informara públicamente los resultados, pese a que el servicio aparecía de cuando en cuando relacionado con las noticias de la crónica roja. En junio de 2002, por ejemplo, la policía detuvo a Roberto Martínez, alias “el Tila”, luego de encontrar restos humanos cerca de un paso ferroviario; eran los despojos del cuerpo de su pareja, una muchacha que como él, era adicta a la pasta base. Martínez la había asesinado, desmembrado y luego intentado calcinar. Cuando cometió ese crimen, Roberto Martínez tenía veintiséis años de edad, un nutrido prontuario de asaltos y violaciones, un paso por la cárcel y una biografía de pesadilla cuya única luz fue haber sido elegido en algún momento, como ejemplo de rehabilitación durante su paso por los centros del Sename en los noventa. Incluso apareció destacado en un reportaje como parte de un programa educativo en donde se hacía hincapié en sus habilidades artísticas. Martínez, aseguraban quienes lo conocieron, se expresaba de manera diferente a los chicos de su condición y escribía bien, tanto así que cuando estuvo preso esperando su condena por el asesinato de su pareja, le llevaron una máquina de escribir electrónica a su celda. Aprovechó la oportunidad y usó el cordón de la máquina para ahorcarse.

En marzo de 2006 una variación de la historia de horror del Tila se destapó luego que un perro callejero recogiera un hueso humano arrojado en un basural de una población de Puente Alto. Era uno de los pies de Hans Pozo, un muchacho de veintiún años que había vivido alternadamente en centros del Sename y en la calle. Pozo, abandonado por sus padres cuando era niño, había estado preso por hurto, era drogadicto, padre soltero de una niña y mantenía relaciones sexuales con hombres adultos a cambio de dinero. Uno de esos hombres –un comerciante casado, ciudadano ejemplar, dirigente vecinal y padre de familia– resultó ser el asesino que luego de dispararle lo descuartizó. Pozo lo habría estado chantajeando: si no le daba dinero, el muchacho le contaría a la familia la relación que mantenían. Las historias del Tila y de Hans Pozo se cruzaban no solo en la pobreza y el abandono, sino también en la debilidad institucional para detener la consecuencia casi automática que significaba haber nacido en medio de la miseria: el destino era crecer y morir en ella o acabar convertido en un criminal que va y viene de la cárcel. En las biografías de ambos personajes había también un nudo ciego de clandestinidad y abusos físicos que transcurría en una zona gris, entre los centros de atención del Sename y los circuitos callejeros asociados al narcotráfico y la explotación sexual. La opinión pública comenzaba a vislumbrar el verdadero universo que habitaban los pelusas de antaño, el de la banda de “Los manos chicas” o las caletas de los niños vagos del Mapocho, ese mundo

descrito con crudeza por Gómez Morel en su novela *El río*, en donde las instituciones aparecían como sombras amenazantes que había que saber esquivar.

Recién en 2003 hubo una cifra oficial del número total de niños, niñas y adolescentes que sufrían explotación sexual en el país; según un estudio del Sename eran cuatro mil en total, una cifra cercana al total de alumnos del Instituto Nacional.

El mismo año en que se dio a conocer esta cifra, estalló el caso Spiniak, una especie de folletín criminal de degradación humana en donde el Sename nuevamente aparecía nombrado. La historia de Claudio Spiniak y su círculo de proxenetas y *dealers* de droga se instalaba en el ámbito de lo ominoso.

Durante los noventa –desde *Caluga o menta* hasta *Taxi para tres* pasando por *Johnny cien pesos* – el cine local proyectó películas sobre una marginalidad acechada por la violencia que surgía en los barrios pobres, retratando ese mundo pero sin llegar a calar en el terreno movedizo y envenenado que se ocultaba tras la más brutal de las miserias, esa que afectaba a los más jóvenes y del que la opinión pública comenzó a tomar conciencia con dosis mensuales de casos de drogadicción, explotación sexual y suicidios de adolescentes en centros destinados a su protección. Finalmente, el biombo que habíamos dispuesto para evitar mirar de frente lo que sucedía en el Sename se vino abajo en 2016, con la muerte de una niña de once años llamada Lissette Villa en un centro de internación de Pudahuel.

Según la primera versión de las autoridades del Sename, Lissette Villa había muerto por una especie de arritmia cardíaca provocada luego de haber ingerido fármacos para calmar sus arranques desenfrenados de ansiedad. Una explicación extraña. Aun peor fue la declaración de la directora del Sename que cuando confirmó la muerte de la niña dijo: “Esto es una oportunidad”. Esa fue su respuesta a la pregunta de la reportera de CNN sobre las críticas de un grupo de parlamentarios al funcionamiento del servicio que ella tenía cargo. La directora respondía invitando a los representantes a conocer la institución, a recorrer sus instalaciones y buscar soluciones en conjunto. “Oportunidad”, repitió, y pensé en todas las palabras posibles que podían reemplazar a esa en un momento en el que todos estaban lamentando una tragedia. La funcionaria explicó además que Lissette Villa aparentemente había entrado en crisis porque nadie de su familia la había visitado el domingo. Mientras ella daba esas declaraciones, la madre de la niña esperaba que le entregaran el cadáver de su hija. La directora del servicio, en tanto, le explicaba a los reporteros que la chica muerta “estaba en riesgo vital” en su casa y por esa razón vivía internada desde los nueve años en el centro Galvarino, donde el riesgo se transformó en certeza.

“Hay gente con más vocación para adoptar perros y gatos, las personas pasaron a una tercera categoría”, declaró la misma directora del Sename, apuntándonos a todos por el nuevo fracaso de un sistema que, de manera escandalosa, había mostrado por años su brutalidad. Un servicio que en la práctica funcionaba como un vertedero en donde van a dar solo los más pobres, los bordes indeseables de la población que deben someterse a un régimen que les termina por clausurar todo horizonte. Como en una línea de producción en serie que arrancaba con la miseria, continuaba con un tribunal de familia que enviaba niños a centros del Sename como quien se lava las manos, y acababa con la experiencia desoladora de muchachos que debían someterse a una institución precaria que termina por despojarlos de su privacidad, de autonomía y esperanza. En la salida de esta línea de producción en serie, lo que se obtenía era más miseria.

Con el correr de los días, la versión inicial sobre la causa de muerte de Lissette Villa fue desmentida por el Servicio Médico Legal: la niña no murió por los efectos de las pastillas, sino por “asfixia por sofocación producto de compresión mecánica externa”. Sus cuidadoras la habían

inmovilizado en el suelo, una de ellas se subió encima de su espalda impidiéndole no solo moverse; tampoco podía respirar. Los medios indagaron y mostraron que hubo un informe de 2013 –ignorado por las autoridades– que detallaba las espantosas condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes del Sename. El documento elaborado en colaboración entre el poder judicial y Unicef, estuvo a cargo de la jueza Mónica Jeldres. El llamado Informe Jeldres había advertido en 2013, es decir tres años antes de la muerte de Lissette Villa, que había seis mil quinientos niños y niñas en alto riesgo en el sistema residencial y describía el más horrendo cuadro respecto a la infancia bajo la tutela del Estado. Sin embargo, nadie hizo nada. Tras la muerte de Lissette Villa surgió una pregunta: ¿Cuántos niños habían muerto en el Sename? La respuesta tardó. Nadie parecía haber pensado nunca que era necesario registrar el número de decesos –como tampoco sus causas de forma detallada– y juntar esa información en un mismo documento. Primero informaron que entre 2005 y 2016 habían registrado ciento ochenta y cinco niños, niñas y adolescentes muertos. Sin embargo, esas cifras quedaron en entredicho, eran inexactas, debían ser muchos más porque solo en los anuarios estadísticos institucionales que cubrían entre 2010 y 2015 la cantidad de muertos ascendía a cuatrocientos setenta y siete. Cuando ese error se hizo evidente fue anunciada una contabilidad macabra que resultó en una puesta en escena esperpéntica de desidia. Pasaron semanas y meses sin que las autoridades pudieran establecer un número claro de niños muertos. Quedaba al desnudo que si el sistema había seguido funcionando del mismo modo durante tanto tiempo, a lo largo de distintos gobiernos y a pesar de la evidencia cada vez más abundante de maltratos y abusos de todo tipo, era porque esa fábrica de miseria beneficiaba a alguien: a los partidos políticos que lograban disponer de empleos para ofrecer a sus militantes y los encargados de las fundaciones privadas – la mayoría en manos de la Iglesia católica– que recibían el dinero público para atender a los niños.

Sobre una cultura que había hecho de los niños pobres una figura folclórica y pintoresca, la política había construido un sistema que externalizaba el cuidado de los internos a fundaciones que ordeñaban recursos para mantener en pie una fachada llamada Sename. Había gente que siempre ganaba y otros cuya vida era una perpetua pérdida.

\*\*\*

A veces era lástima o compasión, otras una furia arrebatadora.

Alan Peña agonizó durante doce horas antes de morir en diciembre de 2016, pocos meses después de la muerte de Lissette Villa. Peña tenía trece años, vivía en Temuco y desde junio había sido alejado de su familia por decisión de un tribunal que lo había destinado a un hogar del Sename. El objetivo era protegerlo, porque tenía ciertos rasgos que hacían suponer que padecía un trastorno de espectro autista que sus parientes no podían controlar. Permaneció poco tiempo en el hogar del Sename, no le gustó y se marchó. Alan no se fugó, como sostenían los primeros reportes, porque no era un recluso ni un delincuente juvenil: era un niño pobre, con una familia pobre, un muchacho que sencillamente no soportó la vida que se le ofrecía en ese lugar. Deambuló por las calles de Temuco vendiendo calendarios junto a un amigo que de vez en cuando lo llevaba a pasar la noche a su casa. La desgracia sobrevino de repente. Un día desapareció del barrio en donde solía merodear y apareció muerto en un barranco. Luego se supo que el muchacho pasó las últimas doce horas de su vida a merced de un puñado de adultos que lo maniataron, asfixiaron y golpearon hasta matarlo con algo contundente, algo que la policía dijo, pudo ser un martillo. Entonces envolvieron su cuerpo en plástico y lo abandonaron.

Días después la policía encontró el cadáver y a quienes, supuestamente, lo habrían acorralado

para torturarlo. En la prensa apareció la foto de un grupo de policías vestidos con overoles blancos sacando un bulto –el cuerpo de Alan Peña– en una camilla desde una mediagua.

Los captores del chico justificaron el ensañamiento; el adolescente era el sospechoso de violar a una niña de cinco años que vivía en la casa en donde solía alojarse cuando se escapaba del Sename. La madre de la niña sacó conclusiones y se las comentó al marido. Después, la justicia comprobó que la niña nunca fue violada, pero Alan ya estaba muerto. ¿Por qué llegaron a pensar que eso había ocurrido? ¿Qué evidencias tenían? ¿Cómo resolvieron que Alan Peña era un violador? La única razón, según los reportes de la prensa, es que el muchacho desde niño mostró “conductas sexualizadas”, sin que existiera claridad de cómo o de quién las había aprendido.

Para los verdugos de Alan no tenía sentido esperar una investigación y resignarse a las molestias de una justicia que tenía demasiada compasión con los delincuentes. Eso era lo que repetían políticos y panelistas en los matinales de televisión y la prensa a diario. Nada más eficiente y veloz que las detenciones ciudadanas, nada mejor que el castigo espontáneo de la turba furiosa, nada más efectivo que una paliza colectiva al maleante, hechos que estaban sucediendo cada tanto y con amplia cobertura de la televisión.

Para los medios y en particular para la televisión, la delincuencia se había transformado a partir de la segunda mitad de la década del 2000 en un subgénero periodístico fronterizo con la entretención. Los noticieros dedicaban largos minutos a los asaltos del día, destacaban los nuevos métodos –alunizaje, portonazo– y las zonas de mayor incidencia. Las imágenes de las cámaras de vigilancia callejera incluso le dieron un tono, una estética, a los reportes que de vez en cuando eran acompañados de las fotografías de los rostros de los delincuentes, una narración de suspenso y una musicalización trepidante. La programación nocturna añadía un guión de espectacularidad al tema con programas sobre allanamientos policiales y análisis de los movimientos corporales de extranjeros sospechosos de entrar a Chile con intenciones de residir, pero sin la documentación suficiente. Un programa los mostraba como si fueran culpables de algo por anticipado.

Los políticos criticaban a los jueces por dejar a tanta gente libre y desenfundaban la imagen de la puerta giratoria; los delincuentes entran y salen de la cárcel, cuando deberían permanecer para siempre ahí. Aunque las cárceles estuvieran repletas y Chile exhibiera una de las tasas de prisioneros más altas del continente <sup>13</sup>.

Durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet el debate sobre la delincuencia se transformó en una competencia de políticos y parlamentarios que se disputaban el rol de voceros de la paranoia, manoseando un tema complejo que debía abordarse con seriedad, hasta el punto de reducirlo a un asunto que consistía en atrapar gente, castigarla y encerrarla. Ese ánimo impulsó a que en 2016 fuera promulgado el “control preventivo de identidad”, que le daba aun más poder a Carabineros, una institución que ya daba muestras de una profunda crisis interna. El control de identidad contó con el apoyo de la mayoría de los parlamentarios a contrapelo de los numerosos estudios que advertían que no servía como herramienta para la seguridad pública. El proyecto unió legisladores de izquierda y derecha en la tarea de dar la imagen de que algo se estaba haciendo para disminuir la delincuencia, mejorando de paso la popularidad del Congreso, una institución en franco desprestigio. El hecho de que la ley vulnerara las libertades civiles, reforzando los prejuicios de clase y raciales de la policía, eran detalles de los que la mayoría del *establishment* no se hacía cargo. El objetivo era mostrarse audaces e implacables. Quienes apoyaron esta nueva versión de la detención por sospecha, no lo hacían con argumentos surgidos desde la racionalidad de los informes de los expertos y las experiencias internacionales, porque todo eso contradecía el objetivo. Preferían citar un refrán que no se cansan de repetir cuando se

trata de suspender las libertades de aquellos que están más allá de su cuota de poder: “El que nada hace, nada teme”. Sembraron de paso la idea de que quienes eran contrarios al proyecto estaban defendiendo a los ladrones.

Así fue como lograron instalar el control preventivo de identidad. A la vuelta de un año, en septiembre de 2017, un informe de la Fundación Paz Ciudadana –una organización conservadora vinculada a sectores de derecha– presentado en la comisión de seguridad de la cámara de Diputados, demostraba que el control de identidad no resolvió su principal objetivo. El estudio aseguraba que “los policías privilegian los controles preventivos por sobre los investigativos” y que “los controles preventivos son menos efectivos para pesquisar órdenes de detención pendientes”. Añadía también que “una de las razones que justificaba la implementación de esta norma era que podría ser útil para poder pesquisar órdenes de detención pendientes. Sin embargo, cuando hacemos el análisis de los casos nos damos cuenta de que la norma nueva tiene la mitad de efectividad que la norma antigua”. Era más importante dar la sensación de que se estaba resolviendo un problema a través de una medida efectista, de corto plazo, con una retórica tramposa, que hacerlo realmente. Es el modo en el que la mayoría de los parlamentarios había decidido enfrentar la profunda crisis de credibilidad que enfrentan como institución: con señales de artificio.

En las encuestas la delincuencia solo dejó de ser prioridad después del estallido de octubre de 2019. Antes de la crisis era la principal preocupación de los chilenos y la alarma era tan intensa que las detenciones ciudadanas que incluían golpizas públicas se hicieron habituales. La calle quería tomar el toro por los cuernos. Los noticieros mostraban cuerpos maltrechos de carteristas consumidos a patadas y la figura patética de un hombre desnudo, literalmente pegado a un poste con cinta adhesiva luego de ser sorprendido robando. La policía aparecía solo para constatar los hechos consumados. Los matinales de televisión, en lugar de educar sobre el debido proceso y los derechos humanos, tomaban las imágenes como fuente de un cotilleo rabioso para debatir si el delincuente se merecía o no ese trato.

En noviembre de 2016, el mismo mes en que Alan Peña fue asesinado por haber cometido un crimen que no existió, un empresario envió una carta a Ciper. Su nombre era Enrique Faúndez, dueño de una pequeña empresa gráfica que identificaba con nombre y el rol único tributario. En el texto, Faúndez contaba que fue detenido por carabineros mientras estacionaba su auto en Vitacura. Escuchó un frenazo y vio a un hombre corriendo hacia él mientras le apuntaba con una pistola. Enseguida llegaron más autos y motos. Lo obligaron a él y a sus acompañantes –trabajadores de su empresa– a salir del automóvil que conducía, los hicieron tenderse en el pavimento y les dijeron que eran los principales sospechosos de un asalto a un banco. Al parecer, el modelo y el color del auto –un Toyota Yaris blanco como tantos miles en Chile– eran las pistas claves para detenerlos, aunque el empresario añadía otra: “Tenemos la piel morena y rasgos que no caracterizan a la gente que habita el sector donde fuimos arrestados”.

En su relato, Faúndez recordaba el momento en que, tendido en el piso, se percató cómo los transeúntes se detenían a fotografiar la escena con sus *smartphones*. Él y sus compañeros trataban de explicarles a los carabineros que no eran ladrones, que estaban allí para entregarle un trabajo a un cliente. Bastaba con revisar el auto para darse cuenta de que no tenían armas ni botín. Lo que recibieron como respuesta fueron insultos. Entre las groserías, los detenidos escucharon un grito desde la vereda: “¡Mátenlos!”, decía alguien en tono imperioso a los policías.

Faúndez y sus colaboradores fueron llevados a una comisaría en donde luego de buscar sus antecedentes un funcionario uniformado les dijo, en tono de broma: “Están más limpios que la

leche”.

\*\*\*

En diciembre de 2010 el incendio en la Cárcel de San Miguel conmocionó al país. Murieron ochenta y un reos atrapados por el fuego. Las condiciones en las que permanecían encerrados eran bestiales, tanto así que cundió la compasión cuando se conocieron los detalles de la brutalidad con que se malvivía dentro del penal. El hacinamiento y la violencia en las cárceles no era un asunto nuevo, pero la notoriedad de la tragedia transformó una realidad horripilante en una especie de revelación que nos llenaba de culpa y pesadumbre. Más aun cuando la televisión mostraba cómo los familiares de los internos pedían información a gendarmería; era gente modesta, con pocas herramientas para nadar en la burocracia durante una emergencia, personas desesperadas. Repentinamente para la opinión pública las víctimas no eran presos ni delincuentes que merecían estar encerrados, como solían sostener los panelistas de los matinales de televisión, sino personas con madres, padres e hijos que habían tenido vidas durísimas. El caso de Bastián Arriagada, un hombre de veintidós años que estaba preso por vender películas piratas y murió calcinado, se transformó en un símbolo de la injusticia del sistema. Arriagada no era delincuente, era pobre, no pudo terminar la educación media y trabajaba como vendedor ambulante para sobrevivir <sup>14</sup>. Había sido detenido en un par de ocasiones por ello, su nombre entró en la burocracia penal que finalmente lo atrapó. Le dieron una pena de sesenta y un días de cárcel.

La conmoción por el incendio, sin embargo, tenía como telón de fondo el creciente temor a la delincuencia. La sensación de inseguridad era permanente; los asaltos y robos, una realidad concreta, y la explotación del asunto como bandera política del populismo penal un ejercicio cotidiano. Por un lado, la conmiseración frente a la muerte espantosa de ochenta reos, por el otro, la necesidad de encerrar a todos los sospechosos posibles para vivir en paz.

¿Cómo era posible que convivieran esas dos pulsiones dentro de la opinión pública? Porque ambas tenían algo en común: el profundo sentimiento de injusticia y abuso con el que convivía la mayor parte de los chilenos. Una sensación que con el paso de las décadas se transformó en una plastilina pegajosa, sin forma, que algunos supieron amasar a su favor condimentándola con el miedo al pobre.

La gente con temor pide soluciones rápidas, no busca explicaciones ni quieren escuchar sobre planes complejos, lo que buscan son ejecuciones de actos que la liberen rápidamente de su ansiedad. El discurso se orientó exclusivamente a esa meta, sugiriendo, de paso, que el error lo cometían los gobiernos y los jueces que parecían estar del lado de los delincuentes y no de los ciudadanos honrados. Esa carnada servía para aliviar la ansiedad, y ahorra entender el fenómeno en su cuadro total, lo que significaba cambios políticos demasiado complejos para resumirlos en un eslogan de campaña. Como efecto colateral, el Ministerio Público y los Tribunales se desprestigiaban cada vez más y la ignorancia sobre el sistema de justicia cundía.

En 2006 conversé con un miembro de una pandilla neonazi para un reportaje sobre el asesinato de un muchacho cometido por antifascistas en venganza por el homicidio cometido por un neonazi. Una cadena de revanchas. El chico tenía unos veinticinco años, trabajaba como guardia en una discoteca y estudiaba una carrera técnica que esperaba terminar pronto para casarse. Él y los miembros del grupo al que pertenecía vivían en una comuna popular con serios problemas de seguridad. Para enfrentar esos problemas hacían lo que llamaba “barridas nocturnas”, recorrían las calles armados de bastones retráctiles buscando inmigrantes peruanos, vagabundos, hombres homosexuales y travestis. Los perseguían y golpeaban. “Son escoria”, repetía, y los culpaban de

los asaltos y el narcotráfico. Ese muchacho sentía que la injusticia era provocada por personas a las que identificaba como “basura humana”, gente que tal vez podía tener problemas similares a los suyos, pero a quienes él no juzgaba como iguales. Eran “casi” como ellos, y en ese “casi” hundían su odio. En su forma de ver las cosas, él hacía justicia. Ese joven neonazi era la versión más extrema de una pulsión muy humana y generalizada que consiste en desquitarse o buscar desahogo con lo que está más a mano para aliviarse de los agobios sufridos que tienen un origen lejano, invisible, inalcanzable a su furia. Un ciclo sin fin, como una ardilla que corre en su jaula, pensando que avanza hacia algún sitio. Para el joven neonazi no había una relación entre los índices de delincuencia de su comuna y las políticas de vivienda que dispusieron cientos de miles de personas en barrios sin fuentes de trabajo. Tampoco era un asunto que tuviera relación con la calidad de la educación, ni con la expansión del narcotráfico en zonas en donde el Estado está totalmente ausente. La culpa de todo era de los inmigrantes, las travestis y los pobres aun más pobres que él.

Bajo determinadas condiciones de agobio, todos necesitamos creer que las soluciones a los problemas que nos acechan son simples. Que la fórmula que nos ayudará a escapar del peligro depende de una voluntad de hierro que será capaz de dar la orden que nadie más ha dado –porque no se atreven, porque son pusilánimes– y ponernos a salvo de los riesgos. Necesitamos creer que hay una frontera nítida que nos separa del pozo en donde hierven todos los males –el hábitat de los delincuentes, el planeta de los criminales– y que para mantener la distancia solo hace falta un contingente de hombres armados dispuestos a disparar. Hay gente que vota por escuchar esas soluciones que llaman “de sentido común”. Por oír hablar de muros que los protegerán de las vidas abyectas o de guerras oficiales en contra de los maleantes.

Durante años hubo una promoción constante de esa pulsión de buscar un alivio automático que solo dependía de los jueces que no hacían su trabajo. Políticos y medios de comunicación explotaron el miedo a la delincuencia para convocar a una audiencia ansiosa y proponer soluciones rápidas, de “sentido común”, que iban en contra de todos los estudios y consejos de los especialistas en seguridad. Eso explica que en el estudio dado a conocer por la OCDE en 2018, la sensación de seguridad que existía en Chile fuera levemente superior a la de México, un país cuyos índices de criminalidad son exponencialmente superiores a los locales. Solo un país azotado por el narcotráfico industrial y las desapariciones masivas tenía una población más atemorizada que la nuestra por la inseguridad. La política en Chile, en lugar de concentrarse en las raíces de la delincuencia, buscó la leña para hacer una hoguera conveniente para ganar elecciones, sin pensar que, llegado el momento, ese miedo se podía transformar en rabia.

Hay ocasiones en que un grito, que parece justiciero y valiente, no es otra cosa que el anuncio de que la barbarie está demasiado cerca, rondándonos, como una bestia al acecho que acaba dañando a los más débiles, a aquellos que nacen para vivir bajo sospecha. Ellos son solo los primeros, luego la bestia irá por el resto.

### 3

## Ráfagas de injusticia, miedo y decepción

Durante la primera década del retorno a la democracia, Chile era un ejemplo, un modelo, un jaguar, un animal que trepaba y rugía. Todas estas imágenes nos sugerían que vivíamos en un gran campo de juego librando un campeonato perpetuo que no dejaba espacio para hablar de nada más que de ganar o perder. Ese espíritu empapó los debates en torno al futuro. Los discursos políticos de la autoridad indicaban que la idea misma de lo que éramos como país parecía levantarse nada más que sobre el funcionamiento de la economía, una maquinaria que debía mantenerse siempre a punto. A cargo de mantener andando ese motor había un grupo de personas, o más bien de varones, que concentraban las grandes decisiones y que a través de entrevistas y declaraciones a la prensa nos daban reportes periódicos sobre el camino recorrido y el que quedaba por recorrer. En ocasiones esos expertos mantenían disputas públicas, discrepancias que jamás llegaban a cuestionamientos de envergadura, sino a divergencias en torno a interpretaciones de un mismo modelo, como exégetas de un único libro y una sola verdad.

Un economista estadounidense usó un juego de palabras para definir nuestro país aludiendo a ese grupo de varones que se turnaba el timón que dirigía sus destinos: “Chile *it’s not a country. It’s a Country Club*”.

En 2010 el espíritu de la época fue coronado con el ingreso del país a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Era el primer país sudamericano que se unía a lo que era descrito por la prensa como “un club exclusivo” (una idea con la que estábamos familiarizados) de países comprometidos con la democracia y la economía de mercado. Un foro creado por países ricos aceptaba a Chile en su mesa. Nos aseguraban a través de entrevistas y columnas de opinión que el país, o sea los chilenos y chilenas debíamos sentirnos halagados y satisfechos. Así fue como muchos dirigentes políticos lo estuvieron hasta que esa misma lógica de índices y rankings comenzó a aplicarse a aspectos más amplios que el mero crecimiento y la competitividad.

Mudarnos simbólicamente de barrio tuvo un costo: nuestra educación y gran parte de nuestros índices sociales eran menos que mediocres, o derechamente pésimos comparados con el resto de los países que formaban la OCDE. Cada tanto un informe nos reflejaba como el peor país en algo más complejo y abstracto que una suma de dinero, aspectos que diferenciaban una sociedad realmente desarrollada de una que lo único que tenía a su favor eran las cifras macroeconómicas que indicaban crecimiento. Con los años, la pertenencia a la OCDE fue dibujando una panorama difícil de contemplar sin recurrir al humor negro para soportar la realidad. La frase “País OCDE” se transformó en muletilla de sarcasmo popular prefabricado cada vez que una noticia revelaba una de nuestras múltiples calamidades institucionales. No se trataba de índices y cifras emanadas de la ONU ni de la Cepal –organizaciones que a la centroderecha le generan suspicacias y considera poco más que un refugio de burócratas de izquierda–, sino de rankings elaborados por un foro cuyo horizonte es la economía de mercado. Un ejemplo es el estudio que la OCDE divulgó en junio de 2018 en donde se aseguraba que en Chile tomaba seis generaciones salir de la pobreza. El equivalente a ciento ochenta años. El encabezado del informe aseguraba que la

movilidad social “se estancó” durante los últimos años, eso significaba que en la cúspide, los más ricos continuaban amasando patrimonio pero menos gente en la parte inferior de la pirámide social había podido ascender. “Esto tiene graves consecuencias sociales, económicas y políticas”, advertía el informe. El mismo foro había ubicado a nuestro país al fondo de una tabla que ordenaba la confianza de sus ciudadanos en la justicia. Chile superaba solamente a Ucrania, una nación que había enfrentado durante los últimos años una crisis política que incluyó revueltas de milicias nacionalistas, enfrentamientos armados y una guerra contra Rusia. Es decir, solo los ciudadanos de un país convulsionado por la violencia política y que hace unos años había sido invadida por una potencia mundial tenía peor opinión que los chilenos de su sistema judicial.

¿Cómo se explicaba esto?

La transición comenzó con una advertencia hecha por el propio presidente Aylwin, aquella que nos anunciaba que los chilenos no debíamos esperar que todos los responsables de los crímenes de la dictadura pagaran por los abusos cometidos, sino conformarnos con justicia en la medida de lo posible. Esa frase, como ya mencioné antes, era una manera indirecta de aludir a que la democracia estaba bajo una tutela amenazante, que existían ciertas condiciones impuestas por el régimen de Pinochet y por sus seguidores para entregar el poder sin mayores contratiempos. El ejercicio de enlace y el boinazo protagonizados por el Ejército le daban la razón a Aylwin. El mensaje era que si la justicia avanzaba, como en los Pinocheques que ocultaban una trama fraudulenta, algo podía pasar. Lo mejor para todos era no averiguar hasta dónde podía llegar esa amenaza: sabíamos de lo que eran capaces. Sobre las violaciones a los Derechos Humanos hubo, por lo tanto, reconocimiento de los hechos en los Informes Rettig y Valech, y un cierto grado de reparación, pero también un manto de impunidad que se extendía hacia zonas insospechadas, más allá de las Fuerzas Armadas, un manto sostenido por la simulación política y el poder del dinero.

La frase de Aylwin cobró nuevo sentido con el paso de los años y la constatación de que para un sector de personas, las más poderosas, la justicia no era más que un percance que nunca tenía consecuencias mayores a un mal rato. El contraste con la rudeza con la que se trataba a los más pobres era evidente. Siempre había sido así, era parte de nuestra historia como nación. Lo que marcó una diferencia fue que los escándalos públicos en torno a las estafas y fraudes aparecían cada vez más como una conducta recurrente, que afectaban a personas modestas y que ni siquiera habían sido disimuladas pese a que en el discurso no solo éramos una república y una democracia, sino un país OCDE con pasaje al pleno desarrollo. Eran robos que habían estado ocurriendo durante años, fuera de control y comandados por personas que jamás parecían estar arrepentidas de lo cometido. Aun así, era muy poco probable que pagaran con cárcel, como sí ocurría frente a situaciones similares en Alemania, Estados Unidos o Corea del Sur.

La sucesión de abusos denunciados de todo tipo iba desde los cobros indebidos de servicios y las alzas inexplicables de los planes de salud de las isapres (una suerte de robo hormiga institucionalizado) hasta estafas a gran escala que afectaban a la población de menores ingresos como lo ocurrido con la multitienda La Polar (2010) y la Universidad del Mar (cerrada en 2012). Los afectados eran justamente esos chilenos a los que durante años la élite política y económica se refería como “la gente”, “la gallada” o “la señora Juanita”. Políticos y tecnócratas se jactaban de conocer sus gustos, inquietudes y aspiraciones, y no dudaban en pedir su voto, aunque cada vez les fuera más y más esquivo. Los escándalos desnudaban la realidad, mostraban para qué servían las instituciones, quiénes tenían protección del poder y quiénes no.

Los casos de colusión de precios de las farmacias (2008), de los pollos (2011) y del papel higiénico (2014) dejaron en claro que la libre competencia era un decir en un mercado pequeño

controlado por un puñado de empresas con intereses cruzados y ejecutivos inescrupulosos. Había en esos tres casos, como en el de La Polar, un ensañamiento brutal con los sectores más pobres, para quienes la salud, la alimentación y la higiene significan un porcentaje altísimo de sus ingresos. Ellos eran finalmente los más perjudicados por prácticas que incluyeron actos tan ridículos como ejecutivos arrojando computadores a un zanjón para ocultar evidencias.

En 2012 los habitantes del poblado de Freirina no soportaron más los malos olores de una enorme planta de faenamiento de chanchos y cortaron la carretera para llamar la atención de las autoridades. Fue la señal más potente en años de una comunidad pequeña de provincia que se levantaba frente a los abusos de una gran empresa que los mantenía viviendo en un ambiente irrespirable. Parecía ser la única manera para que las autoridades les prestaran atención, sobre todo cuando estaban fuera de la región Metropolitana. En adelante, y por distintas razones, habría movilizaciones en Magallanes (2011) por las tarifas del gas en Aysén (2012) por el abandono de las comunidades, y en Chiloé (2016) por las descargas de toneladas de desechos de las salmoneras al mar. La primera respuesta del Estado en cada uno de esos casos fue enviar Fuerzas Especiales de Carabineros a controlar a la población. Intentar soluciones policiales a crisis sociales complejas era casi un reflejo condicionado: todos los gobiernos desde la transición lo habían hecho en La Araucanía para enfrentar el conflicto territorial entre las comunidades mapuche y las empresas forestales; la misma fórmula se había ocupado en la población La Legua el 2005 para controlar el narcotráfico. Eran dos crisis muy distintas en su origen, a las que el Estado había aplicado la represión con la policía militarizada como remedio a comunidades pauperizadas. A partir de 2018 el gobierno intentaría hacer lo mismo con las violentas protestas al interior de los llamados liceos emblemáticos, disfrazando el control policial bajo la etiqueta del programa “Aula Segura”. Una estrategia que se fundaba en atavismos culturales de nuestra propia forma de convivir.

El respeto a la figura del carabinero –y del uniformado en general– se sostenía en una cultura que había vinculado fuertemente la idea de orden a la noción de obediencia a una autoridad fuerte y amenazante. El orden público no surgía de la necesidad de mantener la convivencia entre iguales por el bien común, sino del temor a un eventual castigo propinado por una institución implacable, sobre todo con los más pobres, con efectivos policiales que podían ser arbitrarios y hasta despiadados, pero honestos e insobornables. En eso se fundaba el pacto social tácito entre Carabineros y la ciudadanía en general y por eso la figura del policía uniformado había resistido el desprestigio que significó su rol durante la dictadura. El nombre que suelo darle a ese componente cultural es “el espíritu del retén”, es decir la necesidad del retén policial que, como un faro custodio, tranquilice nuestra angustia frente al caos que supone su ausencia. El retén como una animita oficial que salpica caminos, pueblos y ciudades, otorgándole carácter y unidad a villorrios disímiles y expandiendo nuestra particular manera de comprender el orden y el temor al pobre o al distinto.

Las encuestas demostraron altos niveles de confianza en Carabineros durante toda la transición, pese a los vaivenes políticos y épocas de manifestaciones. Es más, en 2008 la policía militarizada logró muestras públicas de apoyo después de la muerte del general director Alejandro Bernales en un accidente aéreo en Panamá. Bernales repentinamente fue levantado como un ícono institucional y fue despedido con manifestaciones callejeras, en parte gracias a una campaña entusiasta de la televisión que lo apodó “el general del pueblo”. La confianza en la policía militarizada sobrevivía incólume a pesar de la acumulación de denuncias en su contra en la Araucanía –Bernales había sido jefe de zona cuando un carabinero mató al joven mapuche Álex Lemún de un disparo en 2002– y la violencia habitual desplegada durante las marchas de

protesta en 2006.

El espíritu del retén, ese pacto atávico, sin embargo comenzó a fracturarse el verano de 2017, después de que el general director de carabineros Bruno Villalobos, citó a una conferencia de prensa para informar de un desfalco en Magallanes que involucraba a miembros de la institución y que alcanzaba los seiscientos millones de pesos. El fraude había sido descubierto por la fiscalía de la zona. Villalobos anunció que le había pedido el retiro –no los dio de baja– a nueve oficiales. En un principio, el gesto del general de anunciar la investigación fue interpretado como una señal de transparencia y franqueza, sin embargo, con el paso de los días esa interpretación fue matizada por los antecedentes que iban surgiendo gracias a las investigaciones del Ministerio Público y la prensa que demostraban que el fraude era mayor, involucraba a decenas de uniformados y se extendía a todo el país; Magallanes había sido la punta de una hebra que conducía hacia una madeja enorme y enmarañada. Un reportaje de Ciper publicado en línea poco después del anuncio del general Villalobos, aseguraba que durante siete años y de distintas maneras, el equipo de investigación periodística había dado a conocer indicios de fraudes en Carabineros sin que nadie hiciera nada. La nota advertía que hubo más de cuarenta alertas “que nadie quiso escuchar”.

Por ese “nadie” habría que entender “los gobiernos de la época”, es decir, las primeras administraciones de Bachelet y Piñera, que seguramente podían alegar estar atados de manos, porque gracias a la ley, el control civil sobre el dinero de Carabineros y las Fuerzas Armadas, en general, es casi inexistente.

El monto del fraude y la cantidad de oficiales involucrados no paró de crecer a medida que transcurrían los días; de los seiscientos millones iniciales anunciados en marzo, la cifra llegó a los dos mil millones durante las primeras semanas de abril. Cada semana se incrementaba la cantidad de dinero público que se había esfumado a vista y paciencia de un general cuyo cargo anterior había sido director de inteligencia de la institución. El poder civil parecía no tener control alguno sobre lo que estaba ocurriendo ni sobre las medidas internas que se tomaban dentro de Carabineros para conocer el fondo de la trama. En abril de 2017 esa impresión se hizo evidente cuando el general Villalobos interrumpió a Mario Fernández, el ministro del Interior del momento, durante una conferencia de prensa en La Moneda. Villalobos estaba molesto por las informaciones publicadas en torno al desfalco y se dirigió a los reporteros con el rostro encendido sin siquiera tomar en cuenta al secretario de Estado quien se hizo a un lado y le cedió la palabra. Villalobos levantó el dedo índice –como lo podría haber hecho un inspector de colegio cabreado por el mal comportamiento de los alumnos– y le advirtió a la prensa: “No hagan un festín de la situación que estamos viviendo”. El general hablaba como si el fraude fuera un conflicto familiar en el que los extraños –la opinión pública– no tenían derecho a inmiscuirse.

Un año más tarde, la malversación, llamada megafraude por los medios, rozaba los treinta mil millones de pesos, con ciento treinta y cinco funcionarios imputados.

El prestigio de Carabineros había comenzado a desmoronarse. En agosto de 2017 durante una visita a la Araucanía, quizás como una manera de frenar el derrumbe y reafirmar su gestión, el general Villalobos anunció que se estaban afinando los detalles de una investigación importante en la zona, escenario frecuente de incendios a camiones y maquinaria de las forestales y de un crimen horroroso como el incendio a la casa del matrimonio de Werner Luchsinger y Vivianne McKay, una pareja de ancianos que murió calcinada en enero de 2013, en las postrimerías del primer gobierno de Sebastián Piñera <sup>15</sup>.

Villalobos se refería a los resultados de la llamada Operación Huracán, que semanas más tarde sería anunciada con gran despliegue por la prensa, con imágenes de allanamientos y la detención

de nueve comuneros mapuches acusados de asociación ilícita y terrorismo. Lo que siguió fue un guión esperpéntico: el Ministerio Público descubrió que las pruebas presentadas por la Unidad de Inteligencia creada por Villalobos para investigar los atentados en la Araucanía eran falsas. Los mensajes de WhatsApp presentados con fanfarria en la televisión habían sido fabricados por carabineros. Aun más, Carabineros argumentaba que las pruebas habían sido capturadas gracias al diseño de una aplicación especial llamada Antorcha, creada por un asesor, un hombre llamado Álex Smith, a quién llamaban “el profesor” y presentaban como a un genio, pero que a fin de cuentas no era más que un charlatán. Carabineros de Chile pasó de ser la institución que lideraba una investigación compleja contra una organización terrorista, a ser un grupo investigado por falsificar pruebas.

El día que el Ministerio Público ordenó allanar las oficinas de Inteligencia de Carabineros en la Araucanía, el general Gonzalo Blu, a cargo de la unidad, citó a una rueda de prensa en donde defendió con voz firme la legitimidad del *software* espía creado por Smith y sembró dudas sobre el trabajo del Ministerio Público. Mientras Blu hablaba, un puñado de vehículos de Carabineros impedía que la policía civil, la PDI, entrara a las dependencias de la unidad a cumplir la orden de la fiscalía. Era un despliegue que fácilmente podía ser interpretado como un acto de deliberación o sedición, sin embargo el Ejecutivo no se pronunció.

En sus declaraciones sucesivas, los generales Villalobos y Blu le aseguraban a la opinión pública que sus palabras eran el reflejo de los hechos, que ellos hablaban con la verdad. Ambos fueron respaldados por las autoridades civiles. Eran los últimos meses del segundo gobierno de Michelle Bachelet. En cuanto asumió el nuevo gobierno, el director general de Carabineros Bruno Villalobos renunció o más bien “le fue aceptada su renuncia”, porque al parecer nadie podía removerlo a secas. Una situación que nos recuerda que en nuestro país cuando se pertenece a determinadas instituciones o se llega a ciertos ámbitos de poder, la gente no es despedida ni destituida; por muy graves que sean los desatinos o derechamente los delitos que ocurran en una institución, quien la encabeza permanecerá allí mirando el techo o indignándose cuando le piden explicaciones. En nuestro orden político y social, lo que ocurre en esos casos es que las personas “dan pasos al costado”, como quien se desliza levemente fuera de encuadre o se evapora dejando tras de sí una estela de dudas que nadie está dispuesto a aclarar.

Antes de dejar su cargo, el general Villalobos tuvo la delicadeza, eso sí, de grabar una despedida para su institución y eventualmente para la opinión pública, desde un escritorio oficial y con las banderas correspondientes de fondo. ¿En qué sociedad moderna después de que la institución encargada del orden y la seguridad pública haya estado involucrada sucesivamente en desfalcos, incluso robos de armas y falsificación de pruebas durante una investigación criminal, el responsable de guiarla graba un video para recordarnos lo sacrificado de su trabajo?

Villalobos pidió perdón “por aquellas acciones que puedan haber expuesto la credibilidad de Carabineros de Chile”. Así de impreciso. Incluso la forma verbal fue tibia, al borde del modo condicional que deja espacio a la duda de la existencia real de los hechos.

Más que un director general de la policía uniformada que se hace cargo del desastre que dejaba atrás, parecía el discurso de quien no alcanza a darse cuenta de la gravedad de los hechos y pretende aparecer duro como una manera de disfrazar la propia ineptitud. Para matizar su discurso, el general advirtió que en las redes sociales y los medios de comunicación “se difunden muchas veces de manera irresponsable informaciones falsas que manchan el honor de oficiales y suboficiales, degradando nuestra credibilidad institucional”. Un intento de empate muy poco elegante, más aun después de que Ciper revelara que la unidad de Inteligencia de Temuco –la misma de Álex Smith y las aplicaciones falsas– hacía seguimiento y espiaba a periodistas de

distintos medios que habían denunciado actos de corrupción en Carabineros. Tal y como se hacía en dictadura.

En diciembre de 2018, meses después de su retiro, Bruno Villalobos fue imputado por el delito de cómplice de aplicación de tormentos con resultado de muerte en contra de Patricio Manzano, un joven de veintiún años, alumno de ingeniería de la Universidad de Chile durante la dictadura. El caso se remontaba a 1985. El general Villalobos, en ese entonces de veinticinco años, formaba parte del equipo policial a cargo de la detención de los estudiantes. En tanto el general Gonzalo Blu fue imputado por la causa de la fallida Operación Huracán y en julio de 2019 entró en prisión preventiva, arriesgando más de diez años de cárcel por los delitos de asociación ilícita, falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación.

Antes de que la llamada operación Huracán terminara desmoronarse, Álex Smith explicó brevemente a los medios el proceso a través del cuál fue reclutado por la unidad de Carabineros de la Araucanía para ejercer labores de Inteligencia. La historia era simple: Smith había sido profesor de un joven uniformado en una universidad. Era un ramo menor que el alumno se tomó muy en serio al punto de acercársele, entablar conversación y pedirle información extra. Era el gesto bienintencionado de un estudiante que se interesa en una materia y busca un guía para profundizar. La historia dio un giro cuando ese alumno recomendó al profesor Smith a sus superiores. Según el dizque creador de la aplicación espía –llamada “Antorcha”–, le bastaron un par de conversaciones y algunos certificados de estudio –que la fiscalía descubrió que eran falsos– para encontrar un puesto y una tarea en la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada de Carabineros de La Araucanía, creada por el general Villalobos y liderada por el general Blu para combatir la violencia rural entre las regiones de Biobío y Los Ríos.

Antes del relato de Smith, el más desprevenido de los ciudadanos habría pensado que una repartición policial que lleva la palabra “Inteligencia” en su descripción de tareas, tenía un sistema de reclutamiento de expertos algo más sofisticado que un trato de palabra o una mera gauchada entre dos cercanos que se tienden la mano para salir de un apuro. En una época en la que se exigen entrevistas psicológicas hasta para apretar un timbre, resultaba insólito que una persona con evidente tendencia a las descripciones fantasiosas de sus propias capacidades, pasara el cedazo que debería existir en estos asuntos. El rol de Álex Smith era el de un asesor que cumpliría labores en una zona con una crisis profunda, una región en donde se habían cometido crímenes espantosos –como el asesinato de dos ancianos en un incendio intencional– y en donde el Estado había elegido durante toda la transición democrática mantener el orden ejerciendo la acción policial represiva. Esta fórmula, lejos de acabar con el conflicto, lo había transformado en una herida crónica que supuraba por todos sus bordes.

Si el desfalco había puesto la atención de la opinión pública sobre Carabineros, la Operación Huracán la concentró en el rol que la institución cumplía en el conflicto mapuche. Las versiones oficiales sobre el resultado de detenciones y allanamientos en comunidades mapuche, eran apenas puestas en duda por el común de los chilenos que veía el conflicto en la Araucanía como un asunto lejano que no los involucraba.

Después del caso Huracán, el resultado de los operativos de la policía en la Araucanía provocarían más y más desconfianza. De un modo brutal, Huracán había develado una fórmula de abusos y mentiras respaldada por el poder político que resultaba intolerable. El asesinato de Camilo Catrillanca, ocurrido el 14 de noviembre de 2018 y presentado por Carabineros como el resultado de fuego cruzado, acabó con los jirones de prestigio de esa policía.

\*\*\*

La lista de jóvenes mapuche baleados por carabineros durante la democracia no es breve. Entre los casos más conocidos está el de Brandon Hernández Huentecol, por ejemplo, que recibió ciento cuarenta perdigones mientras estaba en el suelo boca abajo. Él sobrevivió. Otros no. A Álex Lemún lo mataron cuando tenía diecisiete, a Matías Catrileo cuando tenía veintitrés, a Jaime Mendoza Collío cuando tenía veinticuatro. Todos fueron asesinados en procedimientos policiales semejantes a excursiones de guerra en tierras enemigas. Los primeros informes entregados por Carabineros en cada uno de esas muertes carecían de detalles que concatenaran un episodio con el siguiente de manera lógica. Arrancaban con un conflicto determinado que era sucedido por acciones y conductas policiales que escapan de toda racionalidad y proporción; los saltos de guion se matizaban en ocasiones con supuesto fuego cruzado sin pruebas concretas. El único punto nítido era la tragedia que cerraba el reporte: otro mapuche muerto. Lo que había en los extremos de esos informes policiales, entre el principio y el fin, era un pozo de dudas que nadie parecía dispuesto a aclarar, ni siquiera la justicia. Si los mataron, algo habrán hecho, es lo que se le sugería persistentemente a la opinión pública.

La misma pauta se repitió cuando la prensa informó que Camilo Catrillanca había muerto en noviembre de 2018. El relato era una nube difusa, carente de definiciones nítidas, incluso desde la forma verbal que encabezaba la noticia replicada por los medios: un joven mapuche “falleció”, decían. Aquel giro diluía la acción, encogiéndola, cepillando las puntas, moldeando los bordes de un acontecimiento dramático y espinoso hasta convertirlo en la versión amigable que sitúa toda sospecha en la víctima y retira al victimario de la escena. La bala –en un principio se sugirió que solo fue una– sencillamente llegó hasta la cabeza de un hombre que conducía un tractor, porque el destino así lo quiso o porque tal vez se lo merecía. Quién sabe. No había información pura y dura, sino versiones que fueron surgiendo a cuentagotas; aparentemente había sido un robo que dio paso a una persecución y acabó en fuego cruzado. Pero ninguno de esos elementos tenía solución de continuidad, sino cuadros aislados. La única certeza eran los personajes involucrados: de un lado el llamado Comando Jungla de Carabineros, el mismo que fue presentado a la prensa durante una ceremonia encabezada por el propio presidente Sebastián Piñera en junio de 2018; del otro, un joven de veinticuatro años sobre un tractor acompañado de un muchacho de quince quien luego de presenciar los hechos –las balas, la sangre, la muerte de Catrillanca– fue detenido por los policías. Horas más tarde, un juez declaró ilegal su detención. El tribunal estableció que no se acreditó delito alguno de parte del muchacho, quien además sufrió maltratos de carabineros mientras estuvo bajo su custodia.

Luego de que la noticia de la muerte de Catrillanca se difundiera, habló el intendente, habló el ministro del Interior y habló el director general de Carabineros. Catrillanca pasó de ser sospechoso en la mañana a simple víctima de un incidente confuso sin responsables claros, en la tarde. Pasó de tener antecedentes penales a no tenerlos. Pasó de huir conduciendo un tractor a estar simplemente enseñándole a un adolescente las labores agrícolas que lo ayudarían a mantener a su familia. Ninguna de las declaraciones emanadas del gobierno rendía cuentas claras de lo acontecido. Las únicas frases firmes que las autoridades pronunciaron no tenían que ver con el compromiso con la justicia, tampoco con condolencias a la familia del joven asesinado, sino con el férreo apoyo a Carabineros. Había que creerles. Tal como lo habían ordenado una y otra vez los gobiernos anteriores.

La última imagen de Camilo Catrillanca difundida a través de las redes sociales mostraba su cuerpo sobre una camilla, rodeado de mujeres con atuendo mapuche que permanecían de pie con gesto dolorido. En la foto se veía la cabeza del joven, cubierta de vendas y gasas teñidas de sangre. Ya nadie podía ver su cara, pero parafraseando los versos de Raúl Zurita, su rostro

cubriría el horizonte y su muerte colmaría de luto rabioso a un pueblo entristecido por el maltrato y la violencia.

\*\*\*

Pensábamos que las cosas funcionaban de una forma, pero estábamos equivocados. Hasta el año 2014, por ejemplo, la mayoría de los chilenos creíamos que había un sistema legal y medianamente transparente de financiamiento de las campañas políticas. No era así y nos fuimos enterando de la realidad por episodios. Como un efecto dominó, la investigación de un fraude cometido por un funcionario corrupto del Servicio de Impuestos Internos llevó a la fiscalía hasta una trama mayor, que salpicaba a conspicuos hombres de negocios y a políticos de la derecha chilena; los detalles empezaban a conocerse públicamente en septiembre de 2014, con las primeras pistas de los vínculos entre las empresas Penta y la UDI. El cuadro final no solo mostraba a millonarios de derecha pagando honorarios por servicios inexistentes a políticos de su sector, también mostraba que SQM, una empresa privatizada en dictadura y controlada por el exyerno de Pinochet, financiaba a distinguidas personalidades de la Nueva Mayoría, y no solo eso, sino también había pagado gastos de la segunda campaña presidencial de Michelle Bachelet. Grandes fortunas costearon carreras políticas a espaldas del escrutinio público, defraudando impuestos y extendiendo su poder hasta los despachos del Congreso y las oficinas de gobierno. Como en un acto de magia fallido, la cortina se caía una y otra vez dejando a la vista el material del que estaban hechos los dirigentes políticos que negaron frente a las cámaras de televisión lo que ya estaba probado. El mejor argumento que tendrían para defenderse en adelante era que todos habían hecho lo mismo.

El caso SQM y luego el caso Caval, destapado durante el verano de 2015, socavaron la promesa de igualdad y del fin de los privilegios que prometía el segundo gobierno de Bachelet en contraposición a la meritocracia neoliberal; el terreno se hundía en el pantano de las boletas truchas y el turbio negocio en el que estaba involucrado el propio hijo de la presidenta, que trabajaba en el gobierno. Todo indicaba que Sebastián Dávalos, el hijo mayor de Bachelet, no se conducía como alguien que defendía ideas progresistas, sino más bien todo lo contrario: él y Natalia Compagnon, su señora, habían montado una empresa de papel, sumándose a un proyecto de especulación inmobiliaria, relacionándose con pillos profesionales, adversarios políticos de la presidenta, buscando trato preferencial para encontrar financiamiento y consiguiendo reuniones con uno de los hombres más ricos de Chile, para lograr acceso a créditos que estarían muy lejos de lograr por cualquier hijo de vecino. Independiente de si hubo o no delito, solo el relato de la reunión privada del matrimonio Dávalos Compagnon con Andrónico Luksic liquidaba el principal mensaje del gobierno y esparcía una duda razonable.

Los casos Penta y SQM fueron la demostración más clara, evidente y concreta de que la legislación estaba diseñada para que los grandes robos fueran tomados como tropiezos entre caballeros que quedaban en el anecdotario de los salones, sin más castigo que multas irrisorias en proporción a las fortunas involucradas. Lo mismo ocurriría los años subsiguientes en casos de uso de información privilegiada, cohecho y tráfico de influencia. Aquello que es penado con elevadas multas, cárcel y con la reprobación social en los países que la élite local admira, en Chile apenas recibe amonestaciones y escasas consecuencias sociales; había ocurrido antes que los involucrados en delitos calificados como “de cuello y corbata” eran arrojados por sus cercanos, manteniendo inalterables sus hábitos y vínculos sociales.

Tradicionalmente ha existido un relato interno, una narrativa reafirmada generación tras generación sobre la honestidad y la sobriedad como valores propios de la clase alta local. Ambas

virtudes la distinguían no solo del resto de los chilenos, sino también de las otras élites latinoamericanas. Esa mirada complaciente sobre sí misma llegó a extenderse incluso hasta beneficiar al general Pinochet, que durante la dictadura era descrito por sus partidarios de clase alta como un caso diferente de dictador latinoamericano, porque no se trataba de un militar corrupto. Pudo haber ordenado crímenes, pero robar, jamás. De hecho esa es la razón para que la palabra “corrupción” sea utilizada para señalar a mandos medios, funcionarios anónimos que son descubiertos en pillerías puntuales y se la mantenga alejada de personajes de prosapia. Los arreglos turbios que ocurren en la cúpula del país no suelen disponerse bajo la misma etiqueta. En lugar de “corrupción”, la prensa prefería hablar de “irregularidades” y los involucrados en “situaciones anómalas”. En el peor de los casos se recurre al contraste con otras sociedades vecinas –preferentemente Argentina–, en donde los montos de los robos, sobornos y cohechos son aparentemente mayores, y por lo tanto sí merecen repudio. Esta escisión entre la manera en que la élite percibe la realidad, creando relatos casi inexpugnables sobre sí misma, alimentando su vigoroso sentido de comunidad y justificando ciertos privilegios jactándose de virtudes exclusivas transmitidas por la sangre, por un lado, y la manera en que los hechos se despliegan, por otro, parece ser una constante que funciona como guardabarrera frente a los extraños. Una práctica que fácilmente adoptan quienes son cooptados por esa élite en beneficio mutuo, hasta que dejan de ser útiles. Ocurrió con Hugo Bravo López, gerente general de las empresas Penta quien apareció involucrado en el fraude original al Servicio de Impuestos Interno que derivó en la investigación por financiamiento político. La máquina de defraudar al fisco era manejada por un funcionario corrupto que le ofrecía a empresas descontar impuestos a través de una falla del sistema que él había descubierto. Ese funcionario contactó a un hombre que a su vez conocía a Bravo y comenzaron a operar favoreciendo a Penta hasta que los controles internos del servicio detectaron el fraude. Bravo era cercano al mundo de los dueños de Penta –Carlos Lavín y Carlos Délano, ilustres personalidades de la clase alta y grandes amigos del presidente Piñera–, pero no era considerado un igual. Cuando los dueños se dieron cuenta del peligro que corrían, lo echaron, como si el problema fuera Bravo y sin él todo retornaría a la normalidad. Dejaron a Bravo a la intemperie como único responsable del delito. La venganza de Bravo fue cooperar con el Ministerio Público, facilitándole a la fiscalía todo el material y los minuciosos registros que él mantenía de los mecanismos de defraudar; gracias a eso la fiscalía pudo profundizar la investigación y sumarle aristas al caso Penta. A pesar de toda la evidencia, el castigo final impuesto por la justicia para Délano y Lavín fue asistir a clases de ética en una universidad privada. En febrero de 2020 Penta volvió a ubicarse entre los diez mayores grupos económicos del país.

\*\*\*

La endogamia del poder en Chile es una especie de sello o matriz cultural que se perpetúa de distintas maneras y afecta las relaciones entre personas, independiente del sector social de pertenencia. La confianza, el acto de convivir sin sospecha ni temor con otro, es una experiencia que en Chile solo parece ser posible cuando existen lazos de sangre o cuando se pueden establecer cuerdas genealógicas que unan a Fulano con Zutano, a ambos con Mengano y a todos con la fuente del dinero y el poder. Una manera de vida feudal injertada en un modelo de mercado, como un órgano extraño que produce síntomas curiosos que solo parecen revelarse cuando el paisaje es sacudido por un estruendo, como el vendaval de boletas de los casos Penta y SQM. Entonces –gracias a la lluvia de nombres involucrados–, aparece el intrincado mapa de relaciones que nunca son del todo profesionales; vínculos que funden parentescos con posgrados

y destreza académica con lazos familiares. Un país de padres e hijos, de tíos y sobrinos, de nueras y exyernos. Un país que parece estar siendo planificado por unos cuantos durante comidas y veraneos.

En este contexto no es para nada raro que Chile tenga el peor índice de confianza interpersonal entre los países de la OCDE <sup>16</sup>, porque confiar aquí es un asunto restringido al ámbito de lo doméstico, lo privado, y en contadas oportunidades algo que se extiende hacia el ancho mundo de lo público, en donde la mayoría serán simples desconocidos. El ejercicio de la política también asume ese código de clanes y parentescos que resuelve los conflictos que se suponen públicos como si se tratara de asuntos familiares, con poca tolerancia a los extraños o los recién llegados a no ser que tengan un respaldo social vigoroso.

La política es la proyección de un orden social que, en el caso chileno, está repleto de matices, claves y códigos que tienden a ocultarse en tiempos de paz y a esgrimirse subterráneamente en momentos de crisis o necesidad, como suele hacerse con las armas blancas. La historia de Rodrigo Peñailillo, el exministro del Interior del segundo gobierno de Bachelet, en la escena política local fue, en gran medida, una representación de algo más profundo, una forma de vida que lo sobrepasaba a él y a sus circunstancias. Peñailillo, sin proponérselo, apareció precedido de las metáforas tejidas en torno a su figura, la del escudero que probaba su lealtad a la presidenta guardando silencio y la del militante que había escalado desde la base hasta la cima sin más red de protección que su propia habilidad para mantener el vuelo. Había una historia y había un orgullo en torno a dos virtudes: la lealtad con sus padrinos políticos y la discreción.

Como ya describí antes, conocí a Rodrigo Peñailillo durante una entrevista en su oficina en La Moneda, antes de que el caso SQM se descubriera. En esa entrevista Peñailillo me contó parte de su infancia. Un relato que funcionaba perfecto para el contexto y los tiempos: el menor de cuatro hermanos, hijos de una madre que enviudó tempranamente y que debió sacar adelante a la familia durante los años más rudos de la crisis económica que se inició en 1982. Hubo una descripción en particular de sus años de adolescente en Coronel que me llamó la atención: la caminata que hacía entre la casa de su abuela y la de una tía que ayudaba a mantener al clan. La ruta más corta entre los dos puntos era seguir la línea del tren. Desde ahí, como quien atraviesa un corredor de condenados, el joven Peñailillo podía ver en perspectiva a cientos de personas que permanecían sin hacer nada, que deambulaban abandonados a la miseria de una comuna con un desempleo abismal. La suya era la historia de un país de madres y de hijos –más que de hombres y mujeres–, de padres fantasmales, de la provincia abandonada y de la política como una vía de promoción social. La entrevista que me dio fue horas después de su interpelación en el Congreso, ocasión en la que fue interrogado por José Manuel Edwards. Cuando traté de que contrastara su historia con la del entonces diputado Edwards –de edad similar pero de origen privilegiado– sonrió adivinando el veneno involucrado en la sugerencia y se negó amablemente: “podría sonar odioso”, dijo. Luego, cuando le pregunté qué usaba para mantener el peinado lustroso como una escultura, contestó “solo agua”. En ese momento pensé que parte del trabajo de un político era no solo hacer lecturas de la realidad, sino también saber presentar esa realidad en el momento adecuado de una manera verosímil y útil para reafirmar su poder.

Poco antes de que la presidenta sacara a Peñailillo de su cargo de ministro en mayo de 2015, *The Clinic* en su portada mostraba una caricatura de ambos, otorgándole a él un rol servil, pintoresco y cómico, y haciendo un juego de palabras con su apellido. Era la señal de que todo aquello que en un momento había sido juzgado como una virtud del ministro –su origen social, su cercanía con la presidenta– se había transformado en un defecto. Comenzaban a desenfundarse los códigos y claves que, como armas blancas, suelen aparecer en nuestro medio –

aun entre los más progresistas— cuando un recién llegado yerra y deja de ser útil. Para esos personajes no existe escudo de protección social.

La cruda realidad había hecho irrupción y el ministro del Interior —el mismo que con su biografía parecía haberla desafiado y utilizado a su favor— empezaba a sucumbir.

Frente a la sucesión de escándalos —Penta, SQM, Caval, Corpesca— que ponían en evidencia la fluidas relaciones entre el mundo de la política y el de los negocios, el expresidente Ricardo Lagos especulaba en una entrevista publicada el 21 de julio de 2016 en *La Tercera* sobre una solución política para una crisis que él calificó de “institucional”. Lagos desarrolló en esa entrevista una síntesis histórica, mencionando momentos de quiebre anteriores y remató con la experiencia española —le fascinaba hacerlo— durante la transición posfranquista. En ese punto mencionó un plazo para lograr ver una salida y lo hizo con una fórmula que sonó un tanto atemorizante: “Yo no sé si el país aguanta año y medio con esta crisis”. Erró por dos años. El país siguió soportando y los encargados del timón continuaron estirando la cuerda.

El proceso de refichaje de partidos políticos durante 2017 puso en evidencia una vez más la brecha que existía entre el *establishment* político y la ciudadanía, cuando de pronto tuvieron que sincerar el número de militantes que tenían y ese número estaba muy lejos de los aires que se daban. El conjunto de partidos había descuidado tanto su vínculo con las bases, que acabaron por desentenderse de ellas o, más bien, relacionarse con una dimensión política fantasmagórica: la de las “sensibilidades”. A ellas acudían de tanto en tanto en un ejercicio de exaltación intermitente para su propia conveniencia, preferentemente en época de elecciones. Por otro lado, la excusa de capturar el llamado “voto de centro” —una especie de talismán del que se habla profusamente cada cuatro años— acabó por desdibujar las identidades hasta un nivel absurdo: socialistas con profundas convicciones neoliberales; liberales con discursos de fanáticos religiosos; demócratacristianos defendiendo intereses que habrían hecho vomitar a los fundadores de la falange. Cada cual a su manera fue demostrando que los principios anunciados en la fachada de sus tiendas no eran más que declaraciones de buenas intenciones que, de ser necesario, pueden negociarse. Sus líderes se volvieron expertos en crear épicas instantáneas de imposturas pasajeras.

Desde el comienzo de la transición, los partidos habían mutado hasta convertirse en una especie de híbrido, algo que podría describir como organizaciones de estimulación electoral periódica de ciudadanos, con mensajes de ocasión y promesas que, a falta de un horizonte amplio de ideas, exhibían la virtud de ser concretas e inmediatas. Una artillería de lemas para el cartel de campaña financiado por SQM, Penta o Corpesca que aparecían en temporada de candidaturas y luego se guardaban hasta la próxima elección. Esta suerte de evolución los hizo independientes de las bases, que a la larga se transformaron en lastres. Poco les importó la sostenida disminución de ciudadanos que acudían a las urnas y el incremento de las protestas callejeras. No valía la pena volver a escuchar a la gente. Más que una advertencia lo juzgaron como una oportunidad para seguir haciendo lo mismo. La derecha abrazó el discurso autoritario en alza en el exterior, la izquierda se pasmó y dejó pasar de largo causas como el feminismo, la diversidad sexual y el cambio climático, que debió haber hecho suyas desde hacía décadas. Pero no les convenía: Chile no estaba preparado, decían los progresistas de los noventa a la salida del *Te Deum* de la catedral.

\*\*\*

En algún momento la libertad que prometía el modelo tomó la apariencia, ya no solo de franca desconfianza, sino de abandono. Ni como ciudadanos ni como consumidores los chilenos

comunes y corrientes, o para precisarlo, aquel segmento con ingresos iguales o menores a los cuatrocientos mil pesos, parecían estar resguardados por el Estado. Las señales que daban las autoridades y la justicia podían ser interpretadas fácilmente como la constatación de que no había manera de hacer valer los derechos civiles ni de consumidores frente a las grandes empresas. Eran inmunes. Permanecían blindadas. Ni el Servicio Nacional del Consumidor, ni el Servicio de Impuestos Internos, ni los ministerios, ni las superintendencias podían enfrentarse a ellas. Todo se había acomodado a las viejas tradiciones: la frase de que en Chile un vendedor ambulante de películas podía ir a la cárcel, pero los responsables de un fraude millonario, jamás, se transformó en un tópico de uso habitual, porque los ejemplos estaban a la vista, se habían expuesto sin recato.

Independiente de sus simpatías políticas, la experiencia del abuso era una realidad constatable, no se trataba de un asunto ideológico o un desacuerdo político puntual, sino de situaciones concretas, repetidas en el tiempo y que crispaban la vida de los ciudadanos comunes y corrientes. Ocurría con las cuentas de electricidad, las del teléfono, con los proveedores de cable, con los de internet, con la atención en la salud pública y con las coberturas de la salud privada; ocurría también que cada año que pasaba se sumaba un nuevo cohorte de personas que se jubilaba con pensiones misérrimas después de haber cotizado toda una vida, a pesar de que los expertos habían anunciado otra cosa, como en aquella nota publicada el 4 de febrero de 2000 en *El Mercurio* en donde la Asociación de AFP aseguraba que “los actuales afiliados al sistema jubilarán con una renta equivalente o superior al 100% de su remuneración promedio durante sus años de trabajo”.

Por un asunto demográfico –la cantidad de personas jubiladas ya era considerable–, la discusión sobre las pensiones pasó de la periferia de las preocupaciones nacionales al centro de ellas en julio de 2016, cuando una marcha que pedía el fin del sistema de fondos de pensiones convocó a más de medio millón de personas en la Alameda de Santiago. El economista José Piñera, creador del sistema de fondos previsionales concedió una entrevista en televisión para defenderlo, describiéndolo como una obra de arte renacentista y luego como un auto de lujo. Aquella comparación me hizo recordar otra, hecha por Nicanor Parra a fines de los setenta, cuando habló del departamento de Estudios Humanísticos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile como “un palacio en medio de una población callampa”. La frase la dijo cuando la mayoría de las facultades de la universidad habían sido intervenidas y el debate intelectual y político era casi inexistente. Aquel palacio en el que se refugiaron tantos insignes –Raúl Zurita, Cristián Huneeus, Diamela Eltit, Enrique Lihn– respondía así al sello de la época que se inauguraba: el de las realidades paralelas, los universos cerrados, las islas de prosperidad y las fronteras invisibles. Un país que se había transformado en una sociedad dividida entre represores y reprimidos y que con los años llegó a ser poco más que un conjunto de segmentos apenas comunicados entre sí. Muchos precipicios sin puntos de encuentro. En ese mundo se redactó la Constitución de 1980 y se diseñó el sistema de fondos previsionales.

José Piñera –el economista y ministro durante la dictadura– defendió su creación en medio de una cascada de cifras y estadísticas que desnudaban el miserable monto de la mayoría de las pensiones que entregaban. Piñera respondió como un padre que protege a sus hijos del acoso violento de los extraños. Desde su perspectiva, el sistema previsional chileno era espléndido y había conseguido el objetivo que él se propuso: una corriente permanente de dinero fluyendo desde la llanura hacia las zonas altas, el lugar en donde los grandes capitales cobran vida propia, crecen y se reproducen. Una creación que se levantaría como uno de los pilares del nuevo modelo económico. El invento funcionó tal como él esperaba: los fondos se acrecentaban en la

medida que la cosecha obligatoria se extendía. Siguió así por décadas y muchos de quienes, se podría suponer, eran críticos a la fórmula, se dejaron llevar por el torrente ascendente, pasando a formar parte de directorios o asesorándolos. Los fondos eran sacudidos de vez en cuando por alguna crisis, pero el diseño estaba pensado para que los de abajo, aquellos que en la metáfora de José Piñera son los encargados de inyectar el combustible que hace andar la maquinaria, compensaran los inconvenientes de quienes estaban en la cima.

La cúspide, entonces, quedaba a salvo de los desperfectos. El problema es que a la gran mayoría lo que le importaba es el flujo en sentido contrario, el momento de la jubilación, aquella etapa en la que el caudal se vuelve un goteo escuálido, con pensiones que en su mayoría alcanzan montos similares o menores al ingreso mínimo.

¿Valía la pena enrostrarle a José Piñera la frustración de la mayoría? Tal vez sí, mal que mal él fue el creador y difusor de las AFP y frente al menor estímulo lo recordaba. Pero había que considerar que el debut ocurrió en 1981 y que la dictadura entregó el poder en 1990. Durante todos estos años, José Piñera –como él mismo lo dijo– nunca había vuelto a un puesto en el gobierno. En rigor, entre 1990 y 2016 habían pasado casi tres décadas de democracia y solo cuando más de quinietas mil personas salieron a la calle el *establishment* político cayó en cuenta de que tal vez habría que hacer reformas importantes, porque en los años venideros habría miles de nuevos pobres; hombres y mujeres que después de trabajar una vida entera para lograr obtener ingresos que les permitieran cierta tranquilidad, vivirían su ancianidad en la miseria.

La primera respuesta de los expertos fue recomendarle a los chilenos que ahorraran más (¿cómo hacerlo con la tasa de endeudamiento tan alta?) y trabajaran hasta que pudieran hacerlo (¿en qué empleo contratan personas de más de sesenta años?). Ambas recomendaciones fueron repetidas con insistencia a través de los medios de comunicación.

Los expertos en el sistema aprovecharon de recordar que para colmo de males ahora la gente vivía más que hacía treinta años, una especie de regaño que parecía intentar liberar de responsabilidad a un sistema diseñado para un país con una esperanza de vida de setenta años.

La primera marcha masiva contra las AFP fue en julio de 2016, tres meses después fueron las elecciones municipales de octubre de ese año, que sumaron otro récord a la sostenida baja de participación electoral registrada desde las elecciones de 1990 en adelante. En las municipales de octubre solo el 36% de los chilenos habilitados para sufragar acudió a las urnas, o dicho de otra manera, nueve millones de personas decidieron no ejercer su derecho a voto. En las elecciones presidenciales de 2017 votó menos de la mitad del padrón. La disminución de participación en Chile no solo era una de las más bajas de los países OCDE, sino también “una de las más agudas a nivel mundial”, según un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

La transición le había hecho una promesa de prosperidad a los chilenos que había sido bien recibida durante la primera década de democracia. Pero, en adelante, esa promesa nunca fue renovada ni ajustada a las nuevas condiciones ni a las nuevas generaciones. Seguía dependiendo de un par de palabras: crecimiento macroeconómico. Era lo principal. Si los tiempos eran buenos, no había nada que reformar. Si eran malos, mejor no reformar nada para no empeorarlo.

Mientras el mantra se repetía una y mil veces, aparecían más y más señales ambientales que indicaban que ese crecimiento era aprovechado por unos pocos a costa de todo el resto: las ganancias de las isapres, de los bancos y de las AFP no paraban de crecer a vista y paciencia de la mayoría de los chilenos que vivían cada vez más endeudados, ganando sueldos que apenas cubrían sus necesidades y frustraban sus aspiraciones. Sobre la abulia y la desconfianza política fueron acumulándose capas de decepción, indignación y resentimiento. Como si se tratara de sedimentos geológicos que se superponían. Una roca que si se cortaba con un cincel, enseñaba

una oscuridad variable teñida de una profunda desconfianza en las instituciones, que parecían no estar ahí para proteger a los ciudadanos comunes, sino para resguardar intereses que se mantenían fuera de la vista de la mayoría.

El escepticismo creció de un modo ambivalente en la medida que se constataba una y otra vez que el hilo siempre se cortaba en el punto más débil.

\*\*\*

El 2018 fueron muchos años a la vez. Mirado en retrospectiva fue como un prólogo de la agitación circulante. El año arrancó con la visita del papa Francisco, que a la larga acabó por empujar a la Iglesia católica chilena a un despeñadero moral, policial y judicial que no encuentra fondo. ¿A quién había que creerle? ¿En quién podíamos confiar realmente? Las instituciones permanecían de espalda no solo a los reclamos, sino a los hechos de la realidad. Un desdén que explica la revolución feminista de mayo, que comenzó con una toma universitaria en provincia y que se extendió por facultades de todo el país. Fue la manera que encontraron las estudiantes para obligar a las universidades a mirar de frente el abuso reiterado como parte de la cultura interna de esas instituciones, el abanico de formas en que las mujeres eran desdeñadas, relegadas, ignoradas o abusadas en los campus. ¿Había alguien escuchándolas? Al parecer no, tampoco parecían existir respuestas para ellas más allá de los discursos sobre la manera apropiada de disponer de su cuerpo y las convenciones sobre la conducta adecuada para su género.

El feminismo, eso que había sido una mala palabra hasta hace muy poco tanto en la derecha como en la izquierda, cobró en 2018 una dimensión nueva que tiñó los discursos, planteó conflictos y estimuló decenas de declaraciones bienintencionadas, aunque probablemente por mucho tiempo más las mujeres seguirán ganando menos, trabajando el doble y viviendo en alerta constante. La propia historia de las reivindicaciones de la mujer durante el siglo xx lo demostraban.

“El sexo existe” era el título de la columna que publicó en 1991 Soledad Larraín, la subdirectora del flamante Sernam, en la revista *Apsi*. El arzobispo de Santiago de la época reclamó. Tiempo después una pequeña frase en una agenda patrocinada por el Sernam que declaraba los derechos de las mujeres sobre su cuerpo, significó una nueva queja de los sectores más conservadores contra la funcionaria, quienes querían la salida de la subdirectora, la acusaban de ser feminista, algo que, naturalmente, era grave. Finalmente, Soledad Larraín debió dejar el cargo. Eso no cambió mucho después de que Chile eligiera su primera mujer presidenta, ni siquiera cuando la reeligió.

Las palabras tienen el poder de iluminar la realidad. Por eso en determinados momentos pueden resultar herramientas valiosas para describir aquello que permanecía oculto en el follaje de una cultura que mimetizaba su propia violencia como un aspecto más de un cierto orden moral. Éramos capaces de sentir disgusto con costumbres lejanas que considerábamos censurables –la lapidación como un castigo para la víctima de violación, el uso de la burka, la ablación como rito–, pero incapaces de percibir la manera en que nuestra propia forma de ordenarnos frente al poder determinaba que las mujeres estuvieran obligadas a vivir en la desventaja permanente.

Lo que había ocurrido es que las linternas se habían encendido. Palabras como género, feminismo y femicidio habían logrado que nos detuviéramos en esos rasgos que antes eran pasados por alto, que surgieran preguntas que en otra época nadie hubiera formulado; habían hecho posible distinguir pautas de comportamiento, conductas automáticas que en otro tiempo eran juzgadas como naturales o simplemente partes de un particular folclor que nadie hubiera

tenido por sospechoso.

La difusión del concepto de “género” –hasta hace unas décadas restringido a la academia– nos mostró un paisaje que siempre estuvo ahí, pero que había estado fuertemente resguardado bajo el peso de una cultura que nos sobrepasa, una formidable maquinaria que se reproduce a sí misma y que limita cualquier cambio de mayor envergadura que signifique alterar los privilegios.

La ola feminista de mayo de 2018 existió por la fuerza que adquirieron corrientes submarinas que la generaron. La convergencia de condiciones históricas, sociales, políticas y demográficas que impulsaron un movimiento que a pesar de las burlas y el desdén, se impuso y obligó a cuestionar el orden de las relaciones y la disposición del poder en torno a un fenómeno: el abuso. Un tema omnipresente en los vínculos de género y las jerarquías sociales en Chile. Hasta los noventa, la violencia contra la mujer era un asunto doméstico, privado, en donde ni siquiera el lenguaje podía inmiscuirse; matar a una mujer porque sí era un “crimen pasional”. Basta ver los argumentos para rechazar la Ley de Violencia Intrafamiliar y la que tipificó el Femicidio como delito en 2010. Para muchos, la muerte de una mujer en manos de su pareja o de otro hombre era algo que sencillamente ocurría, un arrebato en una relación que no merecía mayor reparo, como tampoco las violaciones a niñas y adolescentes silenciadas por la costumbre. Actualmente sabemos, por ejemplo, que diariamente en Chile se cometen más de tres violaciones a niñas menores de catorce años. Ese es el punto de arranque en una carrera que continúa con los sesgos de enseñanza en el sistema, las dispares expectativas familiares y la impronta de las ambiciones apropiadas a su condición: las princesas no estudian, no desean, no alzan la voz ni disienten; las señoritas se acicalan para el príncipe –solo para uno– y esperan un anillo que sellará su futuro y anunciará la reproducción como la cumbre vital, el momento en que la princesa se transforma en madre. Si el guion tarda en cumplirse o se altera, sobreviene el peligro y la sospecha del fracaso. Algo le faltó, algo no funcionó, algo falló y ese algo es responsabilidad de ella.

El 2018 también fue el año de una izquierda sobrepasada por su entrañable capacidad para hacer diagnósticos sobre un pueblo idealizado que dejó de escucharla y que es capaz de votar a la ultraderecha y mofarse de los reproches del viejo militante que exige conciencia de clase como quien alecciona a un niño malcriado. ¿Por qué hacerle caso? ¿Dónde estaban ellos cuando la población se llenó de narcos, cuando las casas se llovían, cuando el hacinamiento les impedía respirar o cuando los liceos se caían a pedazos? Una izquierda que en la región del Biobío no tuvo respuesta para las demandas de los pueblos y ciudades empobrecidas. ¿El resultado? Una región en donde las sectas evangélicas funcionan como movimientos políticos, con huestes asumiendo puestos de gobierno y aspirando a representación parlamentaria. Un mundo en plena transformación que la izquierda parece no ver, porque prefiere mirarse el ombligo que internarse en un territorio pobre que juzga ajeno.

El 2018 marcó el final de un gobierno, el segundo de Bachelet, que terminó su mandato con la moral herida y el comienzo de otro, el segundo de Piñera, que asumió con la pachorra habitual de los que están acostumbrados a ganar en la vida, pero que a poco andar debió enfrentar con desesperación que su gran promesa de campaña, el crecimiento, los tiempos mejores, más dinero para todos, no se estaba cumpliendo. Las altas expectativas sembradas por Sebastián Piñera en una campaña llena de burlas y críticas al desempeño de su antecesora, fueron frustrándose en la medida que los índices económicos les regalaban morisquetas a las circunspectas autoridades del área. No hubo despegue a la altura de los discursos de campaña. Lo que sí hubo fue un sector político que buscó en la inmigración un chivo expiatorio y en Jair Bolsonaro un modelo de liderazgo digno de admiración, pese a su historial de ignorancia, intolerancia y fanatismo. El entusiasmo de la segunda presidencia de Piñera por el ultraderechista derivó en el surgimiento de

un neopinochetismo distinto del que conocimos en dictadura, aquel que cundía entre los beneficiados por el régimen. Esta vez los pinochetistas recurren a la épica de lo contestatario, eran los rebeldes ocultos –muchas veces de origen popular– que decían haber sentido temor a expresar su verdadera identidad por las represalias que podrían sufrir debido a la tiranía de la corrección política y la cultura de los Derechos Humanos, dos ámbitos que esos grupos desdeñan. El discurso que repiten es el del “valiente” que se atreve a confrontar las convenciones que los oprimían. El neopinochetismo raptó para sí el discurso de las víctimas que reclaman haber sido sometidas por un poder mayor ¿A qué se supone que estaban sometidos ellos? A la izquierda, al Estado laico, a la ONU, a la ciencia y a la propia historia. Desconfían del conocimiento con la misma intensidad que se rinden a la construcción de un pretérito idealizado en donde la DINA tenía las funciones de un guardaparque y el comando conjunto hacía deporte aventura en helicóptero. Todos los discursos de una derecha liberal democrática y moderna quedaron en nada en el momento en que una diputada declaró en un encendido discurso su admiración por el dictador muerto durante una convención partidaria y lo que recibió de vuelta fue una ovación cerrada. La vocera de gobierno del momento explicó que en eso consistía la rica diversidad imperante en la derecha chilena.

El primer año del segundo mandato de Sebastián Piñera estuvo pleno de giros argumentales y del advenimiento de la cultura de la mentira como arma política. Estrategias viles que bajo el eufemismo *fake news*, permanecen sobrevolando como buitres o drones una opinión pública fragmentada, que sospecha de las instituciones y que solo encuentra plena confianza en su *smartphone*, en sus contactos de redes sociales y en todo lo que alimente su propio descontento.

En una columna que escribí en diciembre de 2018 comparé el paisaje político y social imperante, lleno de incertezas y de indignaciones que estallaban sucesivamente en un bucle repetitivo que no acaba de resolverse, con una instalación de Carlos Leppe. La obra se titulaba “Fatiga de material” y fue inaugurada en 2011 en una galería que ya no existe. Leppe creó una habitación llena de despojos, dispuestos de tal manera que se alcanzaba a intuir que en algún momento había existido allí, al menos en apariencia, un orden y una coherencia violentamente alterados. La sugerencia de una catástrofe indeterminada de la que solo podíamos adivinar su magnitud por los efectos que aparecían frente a nuestros ojos. ¿Qué había ocurrido? No estaba claro, no tenía un nombre. El indicador de la magnitud solo podía deducirse de los daños que percibíamos, la evidencia dispersa en forma de objetos degradados que le indicaban al público que en donde había existido un hábitat ya solo existía un montón de escombros.

La segunda década del siglo XXI había estado dominada en Chile por la crispación y la decepción de los ciudadanos insatisfechos, que demandaban más derechos y una mejor distribución de la prosperidad alcanzada por el país, una riqueza que cada tanto era recordada jactanciosamente por una élite que pensaba que la mejor forma de conformar al pueblo era recordarle que antes todo era peor. El fenómeno que irrumpió en 2011 era, por lo tanto, el despertar público de un malestar extendido que iba desde comunidades hastiadas por el abandono y los problemas ambientales hasta las movilizaciones estudiantiles, pasando por las marchas para la cobertura de salud y las pensiones miserables. A través de un recuento de las demandas y sus justificaciones, se podía reconstruir el paisaje de dificultades que debían sortear una gran cantidad de chilenos –endeudados– para rozar al menos la promesa de una vida mejor. Los gobiernos respondieron con anuncios de reformas y promesas. Las grandes marchas disminuyeron. Pero el descontento persistió fragmentariamente, se transformó en un zumbido de fondo o, más bien, en gestiones de crisis acotadas sin una propuesta coherente a largo plazo. Tal como se rellenan los baches de una pista de asfalto, en la medida que un grupo se organizaba en

torno a una demanda, se redactaba una ley con un nombre propio o se destinaba un monto de dinero para calmar el disgusto. La relación entre ciudadanos y autoridades quedó reducida a un mesón de reclamos. ¿Significa eso que el descontento se esfumara? Creo que no, solo se transformó en otra cosa, algo que, como el desastre incógnito de la instalación de Leppe, aún no tiene nombre.

## La normalidad nos fue guiando hacia octubre

Poco después de que el primer gobierno de Sebastián Piñera asumiera en 2010, distintos medios publicaron notas sobre jóvenes profesionales que asumían cargos en el nuevo gobierno. Eran caras nuevas que reemplazaban el paisaje humano que había dominado por dos décadas las oficinas de los directivos de los servicios públicos. La gran mayoría de ellos con posgrados fuera de Chile en ámbitos relacionados con la gestión económica. El énfasis en su formación académica no era lo único que detallaban esos artículos. En cada una de esas notas se hacía hincapié en algo de manera insistente: eran personas que de haber elegido trabajar en el sector privado, tendrían remuneraciones que doblarían o triplicarían las que estaban recibiendo como funcionarios públicos. A través de sus respuestas nos señalaban a los lectores, a los ciudadanos comunes y corrientes y a la opinión pública, que estaban haciendo un sacrificio y que lo hacían por nosotros. Había en ese gesto una especie de advertencia espinosa: ojo, si nos aburrimos nos vamos a donde ganaremos mucho más dinero y ustedes quedarán a la deriva.

Aquella advertencia revela una manera curiosa de ver el mundo y de enfrentar un compromiso político, como un favor que se hace hacia “otros” que no son lo mismo que “nosotros”. Cuando en este caso se hablaba de un “nosotros” se hacía referencia a “los mejores” o más explícitamente “el gobierno de los mejores”, un eslogan con sentimiento aristocrático <sup>17</sup> que pretendía generar confianza en un equipo preparado y eficiente. Esta escisión entre dos mundos paralelos, habitual entre los dirigentes de derecha, es una impronta, una especie de paternalismo benefactor aplicado a lo público, algo tan profundo como la tradición de la misa dominical o la playa de veraneo. No se trata de rechazar o ignorar una realidad, sino más bien de habitar una versión propia, superior, que en ocasiones se trata de imponer a la mayoría y en otras se recoge sobre sí misma, como lo hacen ciertos moluscos cuando sienten un cuerpo extraño. Tampoco debe confundirse esta manera de estar en el mundo con una falta de conocimiento sobre las necesidades y reclamos de “los otros”. Nada que ver. No se trata de ignorar “la realidad”, sino más bien de desdoblarla, como una hoja de papel que se curva y una misma superficie enfrenta direcciones contrapuestas en los extremos. Tomar distancia de ciertos espacios, ideas, costumbres hasta perder conciencia sobre la manera en que sus propias acciones están siendo vistas desde la galería o la forma en que sus discursos están siendo escuchados por la audiencia. Algo así como ensanchar un punto ciego hasta el exceso de no percibir lo que “los otros” están mirando. Aquel primer gobierno de Piñera mostró una y otra vez los flancos abiertos por esa mentalidad, con frases jactanciosas innecesarias que, como los huracanes, en cuanto tocaban tierra se debilitaban, fracasaban o rozaban el ridículo. Ocurrió de manera tan persistente, que frases hechas como “el gobierno de los mejores” a la larga se transformó en una ironía. Algo similar ocurrió desde el fracasado censo de 2012, anunciado como “el mejor de la historia” pero que finalmente fue un fiasco que fracturó el Instituto Nacional de Estadísticas, hasta el insólito error del puente de Chacao. Pero el carácter del presidente Piñera no permitía reconocer errores, tampoco derrotas. Lo que él se permitía una y otra vez era iluminar con luz incandescente triunfos que consideraba logros personales, como el rescate de los mineros de la Mina San José en 2010. Los explotaba tanto y de manera tan innecesaria, que acababa transformándolos en

material de burla.

Uno habría esperado que para su segundo mandato ese sello, esa manera de presentarse a sí mismo y a sus decisiones, sería al menos atenuada, por el bien del gobierno. Era lo que indicaba la lógica: que aquello que dañó de un modo severo el primer gobierno de Sebastián Piñera, sería corregido durante el segundo, que se iniciaba en marzo de 2018. No fue así. Lo que lleva a pensar que tal vez ese estilo, tan marcado, nunca fue percibido por Piñera y sus cercanos como un error, ni siquiera como un rasgo imprudente. Simplemente es el modo en que ese “nosotros” funcionaba en el mundo.

La primera señal de que su nuevo gobierno conservaría la vieja impronta surgió cuando la prensa adelantó los datos de su gabinete tal como lo hizo la vez anterior, indicando los colegios en donde habían estudiado sus futuros ministros. Hacer énfasis en ese punto era como si el movimiento estudiantil de 2011 que mantuvo al gobierno bajo estado de alerta no hubiera ocurrido, subrayando un elemento que a una gran cantidad de chilenos podía resultarle odioso. Los medios, de manera bastante franca, enfatizaban con esa información el origen social del gabinete, restringido a un puñado de instituciones privadas, la mayoría de ellas entre las más exclusivas del país. Otra vez aparecía el mismo “nosotros”, el mismo sentimiento aristocrático exhibido como un valor, aun cuando la opinión pública lo percibiera de otro modo. Más que un asunto de política nacional, los artículos que describían a los ministros parecían un campeonato interescolar entre colegios de Las Condes y Vitacura.

“Cuatro del Tabancura y tres del Saint George: los colegios de donde egresaron los futuros ministros”, informaba el portal electrónico de *El Mercurio* el 25 de enero 2018 detallando el nombre de los establecimientos y en algunos casos el monto de la matrícula y el arancel. Naturalmente ninguno de sus ministros había egresado de un liceo público.

La nota añadía que entre los tres exalumnos del colegio Saint George, estaba el ministro de Educación Gerardo Varela. Aparentemente, dentro de algunos sectores de la derecha, esto era algo tranquilizador. Para la gran mayoría, sin embargo, significaba otra cosa.

Gerardo Varela, uno de los tres “georgians” del gabinete se mantendría en el gobierno solo hasta agosto de 2018, cuando fue removido luego de sumar declaraciones públicas insólitas para alguien en su cargo, una de ellas comentando el número de preservativos que le compraba a sus hijos varones, jactándose de la vida sexual de los adolescentes, y otra, políticamente más grave, ocurrida durante un aniversario de una fundación educacional un día sábado 21 de julio de 2018. Varela era la máxima autoridad presente en una ceremonia pública a la que no llegó la prensa. El entonces ministro dijo ante una audiencia de educadores la siguiente frase:

“Todos los días recibo reclamos de gente que quiere que el ministerio le arregle el techo de un colegio que tiene goteras o una sala de clases que tiene el piso malo. Y yo me pregunto: ¿por qué no hacen un bingo? ¿Por qué desde Santiago tengo que ir a arreglar el techo de un gimnasio? Son los riesgos del asistencialismo, la gente no se hace cargo de sus problemas, sino que quiere que el resto lo haga”.

La declaración fue grabada con un *smartphone* por alguien que asistió a la ceremonia y que la hizo circular por las redes hasta que fue recogida por CNN Chile, medio que se encargó de difundirla. ¿Realmente el ministro Varela mientras hablaba no caía en cuenta de la gravedad de lo que estaba diciendo? ¿Era pura insensibilidad? ¿Era desprecio? Semanas después, Varela tuvo que ser reemplazado por Marcela Cubillos, exalumna del colegio Los Andes y de La Maisonnette.

La derecha que llegaba al gobierno exhibía una vez más una incapacidad alarmante para darse cuenta del modo en que sus palabras y actitudes estaban siendo percibidas por el resto de la

opinión pública más allá de sus seguidores, un fenómeno que tiene muchos síntomas; uno de ellos, por ejemplo, es el querer conservar la llave de cambios anhelados por amplias mayorías, cambios que operan en el resto del mundo civilizado sin problemas, pero que no se ajustan a sus “convicciones” y, por lo tanto, merecen ser frenados aunque los argumentos para hacerlo sean ridículos, primitivos o derechamente falsos.

La Ley de Divorcio fue un ejemplo. Connotados dirigentes de derecha –entre ellos la propia Marcela Cubillos– se opusieron durante dos décadas a legislar sobre algo tan evidente como que había parejas que ya no podían seguir juntas y necesitaban que la ley contemplara su situación. ¿Esos dirigentes desconocían esa realidad? Naturalmente no, pero como eso era moralmente escandaloso en su círculo, o sea en ese “nosotros”, debía ser negado para todos. De algún modo se pensaban a sí mismos a salvo del fracaso matrimonial, porque para ellos era un asunto que consistía en seguir una regla religiosa, no simplemente los vaivenes de una vida compartida con otro ser humano. Si para ellos el matrimonio era para toda la vida, así debía ser para el resto, aunque a la vuelta de los años sus propios matrimonios fracasaran.

Otro ejemplo, aun más curioso del efecto de la identidad de grupo cohesionado por un sentimiento aristocrático, es la relación que mantienen con los discursos que ellos mismos levantan para demandar conductas de probidad en el resto. El nepotismo, por ejemplo, fue una bandera ampliamente agitada durante la última campaña presidencial de Sebastián Piñera. Como candidato, Piñera habló con firmeza en contra de una práctica existente entre políticos de la Nueva Mayoría de regar los servicios públicos con parientes. ¿Estaba hablando de algo falso? No. Apuntaba a una realidad. Lo hizo tan enfáticamente que incluso acusó con nombre y apellido a una precandidata de la Democracia Cristiana, porque dos de sus hermanos trabajaban para el Estado, sugiriendo que sus puestos habían sido conseguidos gracias al parentesco con la dirigente política. Seguramente, muchos de sus electores tomaron en cuenta ese discurso cuando votaron por él. Sin embargo, al poco tiempo de asumir, cuando le recordaban ese discurso y lo contrastaban con la designación de familiares suyos y de su entorno de amigos en puestos de relevancia en el gobierno, eso le resultaba ofensivo y odioso. El presidente Piñera tampoco dudó en sumar a dos de sus hijos, ambos empresarios, en una gira a China en abril de 2019 y sentarlos en una mesa oficial de negociaciones comerciales. Nunca una disculpa. Muy rara vez el reconocimiento de un error aun cuando fuese un asunto público, como cuando el ministro de Hacienda Felipe Larraín, luego de anunciar la puesta en marcha de políticas de austeridad –algo sorpresivo, porque la promesa de campaña había sido otra–, debió responder por un viaje a Estados Unidos para un encuentro de exalumnos destacados de Harvard. La invitación había sido extendida cuando él aún no era ministro, pero el viaje fue costado con fondos públicos. El ministro podría haber respondido frente a la revelación que fue una torpeza, una desprolijidad administrativa haber pagado con dinero del Estado aquel viaje, sobre todo después de hablar de ajustes y exigir austeridad. Pero no lo hizo. La versión que eligió dar fue que si bien la invitación era privada, su visita a Harvard le daba un “prestigio al país” que la opinión pública debía valorar. Es decir, advertía que las críticas no solo eran una pequeñez sino también un gesto propio de malagradecidos. Nuevamente se asomaba la diferencia entre un “nosotros” situado en un pedestal, soportando los malos modales del resto que no sabe entender que los discursos tienen dos versiones: una para tiempos de campaña y otra para tiempos de gobierno. Un mismo vuelo en donde algunos siempre viajaran en *business* por el bien de todos los que se apretujan en la micro esperando tiempos mejores.

En las reflexiones de los ministros Varela y Larraín, sobre el bingo en los colegio y sobre la deuda de gratitud con Harvard, había además un elemento disciplinario. Eran mensajes que

tenían en común una especie de golpe sobre la mesa que ponía las cosas en su lugar a través de un reproche. Para Varela, las comunidades escolares debían aprender a resolver por sí mismas sus problemas económicos; para Larraín, la opinión pública debía sentirse orgullosa de tener un ministro como él. Reclamen menos, trabajen más y agradezcan que estamos aquí, parecían estar diciendo.

Ya en su campaña para la reelección, Piñera había prometido “restituir el sentido de autoridad” que, según él, se había perdido durante el segundo gobierno de Bachelet. No todo era reclamar derechos, decía en sus discursos, también había que someterse a ciertos deberes que bajo su gobierno debían ser cumplidos. En esa línea justificaba la férrea oposición a la ley que terminaba con la selección escolar promulgada durante la anterior administración. La llamada Ley de Inclusión fue bautizada como “tómbola” por el segundo gobierno de Piñera, sugiriendo que se trataba de una especie de juego de azar que usaba el destino de los escolares como quien hace girar una ruleta, arriesgando su futuro, aunque en realidad el sistema fuera otra cosa: un algoritmo diseñado por expertos y científicos, que logra asignarle una escuela o liceo de su propia preferencia a más del 80% de los postulantes, sin pasar por una selección que no es más que un método que segrega los mejores rendimientos, algo que en Chile está vinculado directamente con las condiciones sociales en que viven los estudiantes. Eso hacían los liceos más afamados para asegurarse buenos alumnos.

Con un par de declaraciones el gobierno frivolisó un proceso defendido por especialistas de prestigio, expertos que incluso se identificaban con la derecha política. Al mencionar la palabra “tómbola” apelaban al terror fundado de quienes aspiraban a que sus hijos lograran cupo en los liceos de mayor fama.

Durante casi tres décadas el mensaje indirecto de los gobiernos era que había que escapar de la educación pública y que quienes no podían pagar educación privada tenían como única opción los establecimientos conocidos como “liceos emblemáticos”, botes salvavidas que elegían quién subía y quién se quedaba fuera. Para muchas familias la Ley de Inclusión significaba que ya ni siquiera tendrían la seguridad de saltar a esos botes. La izquierda parecía no entender que eso podía generar resistencia en una población que necesitaba algún grado de certeza de que sus hijos prosperarían y no más zozobra; por su parte, la derecha en el gobierno decidió explotar esa angustia para combatir la Ley de Inclusión.

En enero de 2019 la ministra de Educación Marcela Cubillos anunció un proyecto para reformar la Ley de Inclusión y permitir que los liceos y escuelas volvieran a seleccionar a los alumnos. Lo hizo durante las vacaciones, cuando no existía la posibilidad de discutirlo o criticarlo. La ministra dijo que era necesario premiar el esfuerzo, el mérito de los niños y no dejarlos a merced de una tómbola. Anunció además que el corte selección se permitiría a partir de séptimo básico, es decir, alrededor de los once años. Lo que sugería la autoridad implícitamente con su anuncio era que todos aquellos niños y niñas que a los once años no lograran determinada nota, o eran flojos o sus padres no conocían el valor del mérito, debían permanecer en la retaguardia.

La ministra anunció el proyecto en una conferencia de prensa que incluyó el testimonio de un niño que se lamentaba porque no había quedado en el colegio que esperaba. El escolar explicó a los medios que él juzgaba injusto que un compañero que solo tenía promedio 5.0 hubiera logrado matrícula en un liceo de prestigio, mientras él, que tenía más de un 6.0, aún buscaba escuela. Nadie preguntaba qué pasaba con los otros chicos que tenían 5.0 o 4.0 de promedio; ¿se merecían ir a parar al sótano de la educación corriente, el lugar de los fracasados?

El algoritmo era injusto, subrayó la ministra. Sin enfrentar que tal y como funcionaba el

sistema educacional en Chile, el destino de los niños estaba vinculado estrechamente al segmento social en el que les había tocado nacer. Tampoco era justo medir con la misma vara a jóvenes que fueron criados en casas minúsculas, hacinados, con padres sin tiempo ni formación para guiarlos, escolares en barrios tomados por el narco, con alumnos cuyo principal contratiempo es esperar el auto del apoderado para trasladarlo a su casa en un vecindario en perpetua placidez. Tampoco es justo simular que todos los casos arrancan desde un mismo punto, sin embargo es lo que se hace año a año con una prueba de selección universitaria sobre la que se publican rankings de calidad de la enseñanza que luego se citan como ejemplos a seguir. El algoritmo no era el origen de la injusticia, sino una manera de atenuarla.

Todos los expertos en educación valoraban el uso del proceso algorítmico que la ministra Cubillos desdeñaba, pero según sus propias palabras, antes de hablar de investigaciones y estudios de evidencia, ella prefería hablar del “sentido común”.

En forma paralela al avance de esta nueva política anunciada en enero de 2019, los conflictos en los llamados “liceos emblemáticos” de Santiago crecían. Cada tanto, los noticieros mostraban imágenes de jóvenes vestidos con overoles blancos, lanzando bombas mólotov y haciendo barricadas fuera de los establecimientos. Durante 2018 la educación pública había pasado de las noticias políticas a las policiales. Algo se había roto y nadie parecía querer hacerse cargo de lo que estaba pasando.

La respuesta del gobierno a la situación fue disciplinaria; tal como lo haría frente a la crisis en la Araucanía, o las manifestaciones de todo tipo, el gobierno buscó resolverla con represión policial. Con el proyecto “Aula segura” estableció una suerte de doctrina sobre la educación pública que agota su discurso en hechos ocurridos en un puñado de liceos de Santiago, pero sobre todo en el Instituto Nacional, gracias a la atención desmesurada que ocupa en los medios en su calidad de reliquia rescatada de un tesoro extraviado. En 2019 el Instituto Nacional acabó transformándose en el emblema de una agonía que de tan larga, estaba resultando agotadora. Una travesía lastimera cuyo último hito fue la discusión sobre la necesidad de revisar las mochilas de los estudiantes como política educacional para evitar el transporte de artefactos o armas. Esto solo podía haber sido interpretado como el síntoma de un socavamiento mayor del que también eran responsables los gobiernos anteriores.

En mayo de 2019 Rodrigo Pérez, en ese momento presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional, concedió una entrevista a *The Clinic*. En la nota, Pérez habló de alumnos con depresión, de estudiantes que se suicidaban, de asambleas en las que quien grita más fuerte gana la discusión y de antiguos maestros que dedicaban gran parte de su clase a aconsejarlos en el arte del acoso al más débil y las destrezas para conseguir una novia rubia de facultad prestigiosa. Sostenía, además, que entendía la rabia de los estudiantes “radicalizados”, dibujando un borde muy ambiguo en torno a “la necesidad de encapucharse” para no ser perseguidos ni denunciado a sus familias o a las autoridades. Rodrigo Pérez describió las paupérrimas condiciones materiales del liceo –sin agua caliente y pupitres en mal estado– y concluía que en el ambiente cotidiano todo se había vuelto desesperanza y represión. Aseguraba, asimismo, que no sabía de dónde venían las bombas mólotov con las que suelen ilustrarse las notas de los noticieros de televisión, tampoco conocía a quienes las arrojaban. La entrevista al presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional parecía más el testimonio de un habitante de un enclave de refugiados políticos asediados por una potencia amenazante, que las impresiones de un estudiante secundario en democracia. No había en sus palabras un despunte de futuro, sino un diagnóstico asfixiante en donde incluso ese pasado glorioso que suele invocarse sobre el Instituto Nacional quedaba en entredicho. Después de leer la entrevista a Rodrigo Pérez solo cabía pensar qué

quedaba para el resto de los liceos, para aquel 99% de escuelas del país de las que nadie hablaba en la televisión, de los que nadie escribe en los diarios porque allí no se gestaron ni los fulgores de la patria ni los mitos de promoción social que mantuvieron durante tanto tiempo la ilusión de una meritocracia a cuentagotas.

Todo indicaba que al menos durante un par de generaciones, hablar sobre escuelas y liceos sería lo mismo que debatir sobre la mejor forma de disponer los escombros de una construcción abandonada.

\*\*\*

La derecha chilena tiende a mirar los cambios, más que con suspicacia, con alarma. Una suerte de susto que tiene como consecuencia una clausura frente a la curiosidad y la autonomía individual. Para sus dirigentes, esa mirada no es “ideológica” –una palabra que sus adherentes usan con desdén y que aplican a la izquierda–, sino lo “natural” o normal. Desde su punto de vista, por muy arbitrarias que sean sus ideas, son parte de la naturaleza, lo mismo que las piedras, el aire o la transubstanciación.

Esta peculiaridad la pudo comprobar en 2010 el intelectual francés Guy Sorman luego de ofrecer una conferencia a los ministros del primer gobierno de Piñera sobre la Nueva Derecha. Cuando Sorman tuvo que abordar la “agenda valórica” –que es como la derecha chilena llamaba a los aspectos de la sexualidad y la vida privada de las personas–, el francés recomendó abandonar posturas religiosas y abrazar la idea de responsabilidad individual. La sugerencia provocó cierto revuelo y rechazo. Días después, un dirigente del sector escribiría una columna indicando que las ideas del filósofo podían funcionar en Europa, pero no en Chile, porque nuestro país “era una sociedad cristiana”. Según ese dirigente, lo que más le convenía a la derecha local era imitar a los ultraconservadores norteamericanos, los mismos que luego ganaron la presidencia con Donald Trump. Eso hicieron durante el segundo mandato: seguir la estrategia de Trump a la que le añadieron la de Bolsonaro en dosis más o menos pequeñas de exaltación de un nacionalismo agresivo salpimentado por el pentecostalismo evangélico que llegó al parlamento como representante de un ultraderechismo popular en avance.

Aquel episodio –el rechazo a la propuesta de Sorman– puede interpretarse como la manera en que un sector político asume la bifrontalidad como patrón de conducta. Un mismo rostro con dos perfiles mirando en direcciones contrapuestas. Uno de esos perfiles sostiene un discurso de progreso económico apuntalado en la libertad (de comprar y vender) encogiéndose el rol del Estado; el otro sugiere todo tipo de restricciones a la autonomía individual utilizando al Estado o, más directamente, la represión policial. Ambas caras están unidas por el mismo ánimo temeroso y en muchas ocasiones, agresivo frente a los cambios. Porque detrás de cada idea nueva –feminismo, ciencia e innovación, inclusión social, educación sexual, regulación urbana– la derecha adivina la sombra de una herejía política del tamaño de la Unidad Popular, un período de la historia de Chile que conserva como los traumas que se pegan al cuerpo.

El fantasma de la UP reapareció para la derecha local con la desastrosa gestión de Nicolás Maduro en Venezuela, atizando un pánico en el conservadurismo nacional que no se veía desde los años de la Unión Soviética ¿Era posible que la Revolución Bolivariana se repitiera en Chile? Para el corazón del derechista de pura cepa, claro que sí. Ningún argumento ni recuento de hechos, en estos casos, servirá para tranquilizar la angustia de la derecha, porque no se trata de una conclusión lógica, sino de una reacción fóbica, emocional. Visto desde fuera puede parecer descabellado, pero en sus coordenadas internas cobra pleno sentido. Incluso más, el terror reactivo puede ser un detonante de acciones movilizadoras exitosas, muy eficientes y ejecutivas

para asegurar la tranquilidad del sector. Ese temor llegó a acuñar el concepto de “Chilezuela” y ver en Michelle Bachelet una suerte de antecedente a una Revolución Bolivariana local. En esa lógica era necesario detener el avance de las reformas, y sobre todo, encarnar en el Frente Amplio, todos los cucos del chavismo acechante.

El temor a Chilezuela contribuyó en gran medida al segundo triunfo de Sebastián Piñera en 2018, el mismo talismán que luego fue utilizado para intentar transformar al presidente en un líder regional. Un logro que, de paso, desviaría la atención sobre los magros resultados económicos que ya se estaban constatando desde el segundo semestre de 2018.

Entre 2017 y 2019 la cantidad de minutos que los noticieros chilenos dedicaban a la crisis venezolana solo eran comparables a la de notas sobre la delincuencia y la inmigración latinoamericana a Chile. Hubo enviados especiales a la frontera colombo-venezolana, largos análisis y cobertura a la penosa travesía de venezolanos pobres atravesando países huyendo de un régimen que los tenía castigados por el desabastecimiento y la inflación. La derecha chilena, particularmente los nuevos liberales de Evópoli, desafiaban a la izquierda local a condenar los abusos a los Derechos Humanos cometidos bajo el gobierno de Maduro. La izquierda chilena respondía a medias o guardaba silencio. Los liberales insistían, reclamaban con vigor, denunciando la calamitosa situación en un país que alguna vez tuvo el producto per cápita más alto de Latinoamérica. Había razones de sobra para hacerlo: muertes, golpizas, detenciones, prisión, crisis sanitaria y una diáspora que vaciaba el país de habitantes y de futuro. Tenían razón en levantar la voz y empujar a la izquierda chilena a hacerlo; exigir consideración por quienes malvivían bajo el rigor de un gobierno desquiciado. Sonaba bien que las voces por el respeto a los Derechos Humanos surgieran de la derecha, una derecha nueva, que si bien brotaba a la sombra de aquellos que apoyaron la dictadura, exhibía las credenciales democráticas impolutas de los recién llegados. Nosotros somos otra cosa, parecían afirmar cada vez que alzaban su voz por un país latinoamericano que parecía en ruinas. Lo suyo no era ideología, sino valores, principios, convicciones que no variaban según el clima o la geografía. Podíamos estar seguros de que no sería así, repetían.

La diáspora venezolana estaba sirviendo de plataforma provechosa para apuntar el desplome de la convivencia en ese país como un arma de política para otros liderazgos vecinos: Bolsonaro lo hizo en su campaña advirtiéndole que el caos estaba cerca si no lo elegían a él, y le resultó; lo mismo ocurría en Chile. La izquierda latinoamericana había sido puesta en jaque por Maduro y su propia megalomanía.

El conservadurismo sudamericano sacó ventaja y logró hacer de la crisis incluso un evento televisado que sirviera a un puñado de personalidades para erigirse como defensores de una causa justa. Eso fue el Venezuela Aid Live de febrero de 2019, un espectáculo organizado en la ciudad colombiana de Cúcuta, que evocaba el concierto de beneficencia de 1985 contra la hambruna africana, pero a diferencia de aquel, con un puñado de estrellas menores y una celebridad en decadencia.

El concierto de febrero no resistió el paso de los meses, envejeció mal. Maduro no cayó y la oposición venezolana no logró consolidar el momento. El presidente Piñera no se transformó en el líder que pretendía y, a los pocos meses, la solidaridad con la oposición venezolana chocaba con la política anti-inmigrantes que el mismo gobierno había puesto en marcha, expulsando sobre todo a inmigrantes haitianos, pero también impidiéndole a cientos de venezolanos cruzar desde Tacna hasta Arica. Luego del informe de julio de 2019 en donde Michelle Bachelet, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, de manera contundente registró la gravísima situación venezolana, la situación en ese país perdió la calidad de argumento en disputa con el

que la derecha atacaba a Bachelet y a la oposición en general. El documento de la ONU acreditaba los casos, las cifras y las voces de quienes habían sufrido atropellos y abusos por parte del Estado venezolano.

Tres meses más tarde, en octubre, el mismo gobierno chileno que clamaba una y otra vez el respeto a los Derechos Humanos en Venezuela, que le exigían a la ONU declaraciones, los mismos liberales que invocaban los abusos de la policía de Maduro, guardaron silencio cuando se producían en Chile las primeras denuncias de muertes, mutilaciones, violaciones y detenciones injustificadas cometidas por carabineros en plena democracia, después del estallido.

\*\*\*

El 6 de septiembre de 2018 Carlos Recondo, director nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario, encabezaba la celebración del Día del Campesino en Olmué. En un momento de su discurso pidió un vaso de agua, pero nunca se lo llevaron. A modo de broma dijo “Fueron a conseguir agua a Petorca”, aludiendo a un poblado vecino que sufría una sequía intensa que ya duraba una década. La situación en Petorca era agravada porque los derechos de agua privatizados le pertenecían a empresarios productores de palta que ocupaban los cauces naturales para regar sus plantaciones. La historia de esa comunidad desesperada había sido incluso materia de reportajes en medios internacionales, pero en la agenda política local apenas tenía espacio.

Después de la broma de Recondo hubo un abucheo entre el público y se escuchó una respuesta iracunda: “Estar sin agua no es un chiste, no es para que la gente se ría. Olmué está viviendo lo mismo, también está sin agua”. Uno de los asistentes registró el momento, la broma del funcionario de Indap y la respuesta del público, con su *smartphone*. Las imágenes circularon por las redes sociales y los portales de noticias en internet, pero solo después de que el asunto pasó a ser noticia nacional, el funcionario ofreció disculpas públicas. Se repetía el guión del ministro Varela y su llamado a hacer bingos para costear arreglos en los colegios, una suerte de soberbia torpe e hiriente sostenida por el desprecio al sufrimiento ajeno.

Durante la campaña presidencial de 2017 la falta de lluvias en la zona central de Chile ocupó una fracción mínima de los debates políticos, aunque en ese momento había evidencia suficiente para alarmarse. Era una sequía anormalmente extendida en el tiempo y afectaba a toda la zona central, más específicamente a la porción del país comprendida entre La Ligua y Temuco, en donde está la mayor parte de la industria agrícola del país y vive el 70% de la población de Chile, sin embargo, no era un asunto que despertara mayor interés; había más tiempo para discutir sobre Corea del Norte. La crisis solo comenzó a estallar públicamente en 2019, con los informes internacionales y cuando los científicos anunciaron que el déficit hídrico proyectado para el país producto del cambio climático sería de entre un 5% y un 20%, esta última cifra era la del escenario más catastrófico. El déficit de agua caída para Santiago en agosto de 2019 era del 70%.

En los discursos políticos chilenos, sin embargo, la escasez de agua parecía ser un tema que involucraba a representantes regionales y autoridades provinciales de menor rango. Como si el clima fuese un mosaico que dependiera de intendencias y municipalidades. Aun más, la situación de comunidades rurales de la Región Metropolitana, es decir, vecinas a Santiago, cuyos cultivos se habían secado y apenas tenían agua para su consumo, eran reportadas como un asunto que estaba solucionándose con camiones aljibe, una salida fácil de corto plazo de la que alguien estaba sacando provecho económico, tal como lo registró Ciper en un reportaje de 2017 titulado “El puñado de empresas de camiones aljibe que se reparte noventa y dos mil millones”. Aparentemente, toda desgracia podía ser una oportunidad de riqueza para alguien.

El paisaje moribundo al interior de la región de Valparaíso –como Olmué y Petorca–, a su vez,

era descrito por las autoridades como una especie de malentendido que debía ser investigado y los manchones –inexplicablemente verdes– de plantaciones de paltos para exportación, que contrastaban con la costra reseca merodeada por animales famélicos, una suerte de ilusión óptica de la que sacaban provecho algunos activistas. Las instituciones funcionaban para algunos como un pilar de hormigón resistente, para el resto, apenas como un débil hilo de agua que no alcanza a saciar la sed del ganado macilento. Internamente, para el gobierno los efectos del cambio climático eran un tema menor, sin embargo en los foros internacionales nuestras autoridades se mostraban conmovidas por las consecuencias que tendría en el mundo. Otra vez la bifrontalidad.

En diciembre de 2018 el gobierno anunció que Chile organizaría la cumbre mediomambiental COP25 en reemplazo de Brasil que había renunciado a servir de sede. En diciembre de 2019 nuestro país recibiría a los representantes de más de treinta países en una conferencia cuyo lema es tomar acciones contra el cambio climático tan pronto como sea posible. Sin embargo, el mismo gobierno de Chile, es decir el propio país anfitrión de la cumbre que clama por medidas urgentes, había postergado la firma del Tratado de Escazú, cuyo objetivo es garantizar la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. La COP25, que se realizaría en Cerrillos bajo una cordillera cuyos glaciares retrocedían año a año, finalmente fue suspendida después del estallido de octubre y organizada en Madrid. Chile conservó la presidencia del encuentro, encabezando las negociaciones. La versión de la COP acabó en un rotundo fracaso según la prensa internacional y los participantes, en gran medida por la incompetencia de la delegación chilena.

\*\*\*

El valle central se estaba secando a vista y paciencia de todos desde inicios de la década. Como un animal que agoniza silencioso en un rincón, sin que nadie se sienta perturbado. Era posible concluir que la indiferencia política de la opinión pública se debía a que mientras el agua saliera de los grifos urbanos, no cundiría la alarma. En tanto las ciudades contarán con ella, el tema estaba condenado a estar sepultado pese a la gravedad del asunto.

Una señal de lo que podría ocurrir en las ciudades en la zona de sequía ocurrió en julio de 2019, cuando un derrame de petróleo dejó sin suministro de agua potable a Osorno, una comuna de ciento sesenta mil habitantes, durante una semana. Poco después del accidente, en una entrevista en la televisión, la fiscal designada para investigar la situación visitó las instalaciones de Essal, la empresa concesionada encargada de acopiar y distribuir el agua potable de Osorno, y lo que encontró le pareció sorprendente: en las instalaciones no había más tecnología que una aguja que marcaba el nivel del estanque y un operador encargado de mirar esa aguja y manipular la válvula del combustible que hacía funcionar un generador; es decir, la noche del incidente todo el sistema dependía de una persona, el operador de turno, que hasta el momento en que la fiscal asumió el caso era indicado como único responsable del derrame que también acabó contaminando el curso del río que cruza la ciudad de Osorno.

Los días que siguieron al derrame, la información que brindó la empresa Essal a la población fue confusa o sencillamente inexistente: no hubo claridad sobre la reposición del servicio e incluso el presidente Piñera fue mal informado durante su visita a la ciudad, anunciando una solución en cuestión de horas que no fue tal. El gerente de Essal, en tanto, le respondía indignado a un periodista que le pedía información precisa: “Te pido respeto, esta situación es demasiado grave. Estoy siendo transparente para que toda la comunidad tenga claro lo que está pasando. La situación supera todas las expectativas” <sup>18</sup>, dijo, como quien se siente ofendido ante una consulta indiscreta.

Mientras la emergencia cundía, la televisión entrevistaba al expresidente Ricardo Lagos. Durante su período de gobierno fueron concesionadas las mayores empresas sanitarias del país, entre ellas la que operaba en Osorno. Inevitablemente surgió el tema de los derechos de agua que agobiaban a las comunidades rurales del valle central. Lagos explicaba en un matinal que el proceso de privatización de las sanitarias llevado a cabo durante el gobierno Eduardo Frei Ruiz Tagle, que incluyó los derechos de agua solo en tres provincias –Santiago, Valparaíso y Concepción– y lo que sucedió en Osorno fue diferente: allí la empresa tenía una concesión, no la propiedad. “Ellos no son dueños del agua”, dijo Lagos y añadió “lo que fue entregado en concesión son los fierros para administrarla y hacer las inversiones que tienen que hacer”. En ese punto de las declaraciones del expresidente resultaba inevitable volver sobre la imagen de un operario solitario durante la noche frente a una aguja mecánica mientras abre una válvula de combustible. El expresidente sostuvo, por último, que era posible que una vez terminado el plazo de concesión –quince o veinte años– el gobierno en el poder podría eventualmente retomar el control de la empresa.

Cinco meses después del incidente en Osorno y las declaraciones del expresidente Lagos, el superintendente de las empresas sanitarias anunció que la sequía era gravísima y que de seguir así, probablemente tendrían que racionar el agua en Santiago. Dijo, además, que ningún experto anticipó “la severidad” del fenómeno <sup>19</sup>.

\*\*\*

“Él me dijo que iba a ser mi padre” recordó la teóloga Marcela Aranda durante la entrevista que concedió a la televisión y que fue transmitida el 29 de abril de 2019 por Mega. Aranda describió públicamente los abusos a los que fue sometida por el sacerdote jesuita Renato Poblete –fallecido en 2010– durante los años en que él fue su director espiritual. Con el testimonio de Aranda caía la última viga que sostenía el prestigio de la Iglesia católica chilena, una institución que comenzó a desplomarse en 2010 cuando los testimonios de abusos en contra del sacerdote Fernando Karadima fueron hechos públicos.

La misma frase que dijo Aranda la escuché muchas veces de boca de víctimas de otros sacerdotes jesuitas mientras estuve investigando casos de abusos para un libro que se concentraba en los salesianos, una congregación importante, pero sin el despliegue de poder de los jesuitas. La acusación de Marcela Aranda refrendaba algo que la Compañía de Jesús intentó ocultar desde que el caso Karadima estalló: su congregación mantenía las mismas prácticas de abuso y encubrimiento del sacerdote de la parroquia de El Bosque y de todo el resto de la institución.

“Él me dijo que nadie me iba a creer” contó Marcela Aranda que le advertía Poblete. Estaba en lo correcto. Hasta hacía diez o quince años, nadie la habría creído a ella. Tampoco le habrían creído a las otras personas que lo habían denunciado pero no se mostraban públicamente por vergüenza y temor. Esos dos factores –la vergüenza y el temor de las víctimas– son la herramienta que la Iglesia católica había sabido usar a su favor para evitar el desprestigio y que la Compañía de Jesús aprovechó en Chile para mantener la idea de que su congregación estaba libre de escándalos y contar con el beneplácito no solo de los creyentes, sino de gran parte del progresismo agnóstico y de los directores y editores de medios de comunicación.

Durante el tiempo en que su propio provincial era acusado, los jesuitas solo eran requeridos por la prensa para opinar sobre otros casos ajenos, pontificar sobre ellos y aprovechar la ocasión para llevar agua a su molino. En la eventualidad de que alguien les preguntara sobre las acusaciones en contra de sus colegas de la Compañía de Jesús, solo repetían algún ambiguo comunicado

oficial, tan difuso como el dado a conocer luego de la entrevista a Marcela Aranda. ¿Actuaban los jesuitas de manera diferente al resto de la Iglesia? ¿Eran distintos? Aparentaban serlo, pero no lo eran, no lo son. Se habían conducido tal y como los salesianos, los maristas o los diocesanos, solo que en su caso existía una red de poder económico, político y de relaciones públicas muchísimo más fuerte. El golpe final ocurrió en julio de 2019 con el informe de una investigación privada, contratada por la congregación como respuesta al escándalo, que acreditó que las denuncias contra Poblete eran consistentes y numerosas.

Mucho antes de que eso ocurriera, el cura Poblete era recordado como un santo por políticos de distintos sectores. El sacerdote mantenía amistad y cercanía con empresarios importantes y con el presidente Piñera y la presidenta Bachelet. De hecho, su muerte fue un acontecimiento nacional y el momento de su agonía, relatado como un suceso de destellos numinosos por sus hermanos sacerdotes.

En el número de marzo de 2010 de la revista interna de los jesuitas se publicó una suerte de obituario de Renato Poblete escrito por el sacerdote Agustín Moreira. Era una edición especial dedicada al terremoto ocurrido en febrero de ese año, nueve días después de la muerte del cura. La nota de Moreira estaba acompañada por una foto de Renato Poblete sentado frente a su escritorio, bajo un retrato en óleo de san Alberto Hurtado.

El texto de Moreira es sencillo, detalla que Poblete había estado internado durante diciembre de 2009 por una infección en las válvulas coronarias, y aunque fue dado de alta en enero de 2010, su estado de salud era frágil. Tenía ya ochenta y cinco años. Moreira cuenta en la nota que durante el verano el sacerdote pudo participar de la reunión anual de la congregación y en las actividades religiosas del llamado Miércoles de Ceniza. “Al recibir la ceniza se nos recuerda que polvo somos y en polvo nos convertiremos”, sentencia Moreira al final del primer párrafo. En ese punto la narración se detiene en el jueves 18 de febrero. Ese día, durante la mañana, después de desayunar, el grupo de jesuitas –alrededor de ciento cincuenta– escuchó unas palabras a modo de reflexión a cargo de Eugenio Valenzuela, en ese entonces provincial de la Compañía de Jesús. Una vez que Valenzuela terminó de hablar, los jesuitas reunidos rezaron en conjunto: “Fue en ese momento –precisa Moreira en el texto– en que vi que Renato se inclinaba en la silla y se desvaneció”. El anciano fue sostenido por su amigo el sacerdote Josse Van der Rest que permanecía sentado junto a él, y enseguida llevado en andas por otros religiosos hasta su habitación. Los demás continuaron rezando: “Todos teníamos en la mente y el corazón a nuestro compañero. Acabada la oración nos enteramos de que Renato había muerto”. Un final plácido, tranquilo, rodeado de cariño y reconocimiento. Era la conclusión de una vida ejemplar, de un hombre que había gozado no solamente de la admiración privada entre los pares, sino de aquella que se invoca en actos oficiales y que queda fijada en bronces y discursos. Un redoble de tambores coronado por el Premio Bicentenario, el reconocimiento que le entregó en septiembre de 2009 la presidenta Bachelet.

“Dios –escribió Agustín Moreira como despedida– ha sido delicado con este hombre bueno que tuvo tantos gestos de amor y delicadeza con nosotros. Es la recompensa divina para quien ha sabido amar en lo pequeño y también en lo grande. Se lo lleva a su encuentro y gozo eterno, tras una vida fecunda y generosa de entrega”. Al día siguiente de su muerte *El Mercurio* publicó: “El sacerdote según sus pares, ‘es un auténtico jesuita’. Trabajó estrechamente con el padre Alberto Hurtado y fue su gran amigo. La Compañía de Jesús reconoce que fue el motor de su canonización y que a él se debe la construcción de su santuario”. La misa fúnebre en la iglesia San Ignacio fue encabezada por el cardenal Francisco Javier Errázuriz quien destacó “el amor a los pobres y el sentido de justicia” de Poblete. En su libro *Digerir lo vivido* de 2013, el sacerdote

Felipe Berríos evoca el funeral, explicando que la muchedumbre que acudió a la ceremonia no lo hacía solo por el carisma de Poblete —“esa sería la respuesta fácil”— sino porque era “un apasionado del Señor que supo ser el vínculo entre el P. Hurtado y las generaciones que no lo alcanzamos a conocer [...] Pero quizás fue el amor por los pobres del P. Poblete, ese que lo llevo a utilizar magistralmente los medios de comunicación para ser la voz de aquellos que la sociedad silencia”, concluye Berríos.

Después de la ceremonia, el cuerpo del difunto fue trasladado desde el centro hasta el Santuario de Estación Central en la llamada “camioneta verde”, el automovil que los jesuitas usan como símil del que conducía Alberto Hurtado para trasladar niños pobres.

Había muerto un hombre bueno, un hombre excepcional, un santo en vida. Eso era lo que todos repetían. Había muerto, sin embargo, un criminal ¿Qué pensarían de él en ese momento sus víctimas? ¿Qué sentirían al escuchar las declaraciones de autoridades y figuras connotadas? ¿Qué recuerdos les despertaría ver su rostro multiplicado en la prensa? ¿Qué emociones surgirían en esas personas cuando contemplaban a la multitud despedir como héroe a quien había sido para ellos una especie de verdugo? ¿Tendrían ánimo de salir a la calle y gritarles la verdad? ¿Quién los habría escuchado?

A veces, enfrentar la verdad duele, eso lo sabemos todos, pero la experiencia de que la verdad es un secreto que cuesta mucho, que cansa, quema y fatiga la conocen solo quienes la viven como algo que se guarda y esconde; porque de mantenerla en sigilo depende sobrevivir, tener un trabajo y conservar una familia.

Creo haber percibido por primera vez algo de la profundidad de esa experiencia la tarde que entrevisté a un hombre que había sido abusado durante años por Eugenio “Keno” Valenzuela, el sacerdote provincial de los jesuitas que encabezó las oraciones el día en que murió Renato Poblete. Ese hombre —cuarenta años, profesional, padre de familia— dio un largo rodeo biográfico antes de detallar directamente la manera en que había sido abusado por Valenzuela en su juventud. Le dolía contármelo y lo hacía como quien aproxima lentamente la mano hasta el lugar en donde supura la herida. Un día su propia madre —católica y admiradora del sacerdote— le mencionó que se notaba que “la dirección espiritual del Keno” había surtido efecto en él: “Estás más maduro”, le dijo. La verdad era tan distinta, pero no podía decirla en voz alta, no era posible hacerlo sin dañar a su madre y al mundo en el que vivía. La verdad lo arrojaba a un rincón oscuro, lo dejaba solo. No fueron esas sus palabras, fue lo que yo sentí hablando con él y con las víctimas de los jesuitas Leonel Ibacache, Jaime Guzmán Astaburuaga y Juan Leturia. Todos ellos —junto a otros tantos menos connotados— habían abusado de niños, adolescentes y jóvenes durante los mismos años en que Renato Poblete cometía sus fechorías. La misma congregación, al mismo tiempo, durante años, durante décadas. Mientras tanto, las entrevistas a los jesuitas en la prensa escrita, la radio y la televisión no solo los convocaba para preguntarles de sus obras de beneficencia, sino de sus opiniones que iluminaban la conducta ajena —como amigos y directores espirituales de millonarios y políticos— y la guiaban por los vericuetos de la realidad que ellos se jactaban de conocer al revés y el derecho.

Tal como Berríos escribió en su libro *Digerir lo vivido*, Renato Poblete había logrado un prodigio: transformar la figura de los sacerdotes jesuitas en líderes de opinión pública a través de su cercanía con los medios de comunicación. La suma de sus intervenciones durante las últimas décadas podría servir para una tesis. Si hay algo que lo distinguía de Fernando Karadima, quien fue su amigo, era justamente eso: la visibilidad que había alcanzado a través del trabajo con los más pobres, encabezando cruzadas mediáticas, asistiendo a ceremonias, cócteles y directorios. Sin embargo, luego del escándalo, el propio director social del Hogar de Cristo, Pablo Egenau,

declaró que en realidad Poblete hablaba de pobres, pero no se acercaba mucho a ellos. En una entrevista radial luego de que las acusaciones salieran a la luz sostuvo que Poblete no estaba “en terreno”, sino más bien era un embajador, un representante en los medios y “un generador de recursos”, lo que en franco castellano quiere decir que su vida transcurría entre los ricos y que esas imágenes profusamente difundidas después de su muerte, en donde se le veía dándole la mano a enfermos de un hospital público, eran una buena secuencia para transmitir por la televisión, pero no un estilo de vida. El amor por los pobres era una pasión a distancia. ¿De eso también se enteraron con el informe sobre sus crímenes? Sospecho que lo sabían, pero no les molestaba dar una impresión equivocada. Todo lo contrario.

La predilección del señor Poblete por relacionarse, no solo con la clase alta, sino directamente con millonarios o personas que actuaban como enlaces para llegar al poder político o empresarial fue siempre un asunto evidente. Bastaba revisar las páginas sociales de los últimos treinta años para repasar la vida del sacerdote y su valiosa agenda. Frente a los poderosos sus virtudes resplandecían, bruñidas por el efecto deslumbrante que solía provocar la figura del cura entre católicos y agnósticos con culpa, una suerte de fascinación que en nuestra cultura los reviste de atributos desmesurados y dones de los que muchas veces carecen. Karadima podía decir cualquier ramplonería, porque sabía que la mayor de las vacuidades declaradas vistiéndose sotana puede llegar a sonar como una revelación profunda y significativa para una audiencia capturada por el hechizo del tramposo. Pero había una diferencia significativa entre ambos: Karadima nunca se mostró como un benefactor, no encabezó ninguna campaña de nivel nacional ni usó la vida de las personas pobres en sus discursos. Poblete sí lo hizo. El mundo de los ricos fue sin duda su círculo de pertenencia, algo que por supuesto no es ningún crimen. El problema es que el mensaje era otro para la opinión pública. ¿Era su discurso sobre los más pobres un fin o solo un medio para acumular el inmenso poder que alcanzó a ostentar?

Luego del informe que sepultó la reputación de su antiguo líder, los jesuitas levantaron dos tesis para explicar la razón para que, según ellos, nadie nunca se enterara de las conductas que Renato Poblete tuvo dentro de la congregación. Sostuvieron que durante los casi cincuenta años en que abusó, violó y maltrató mujeres, poco y nada supieron. La primera forma que encontraron para hacer razonable lo inverosímil fue explicando que Poblete llevaba una doble vida totalmente fracturada. Ellos le daban la espalda y el cura se transformaba en otra cosa, como Gollum, el personaje de *El señor de los anillos*. Poblete era una puerta de dos hojas, ellos veían solo una, la que conducía a la Cena de Pan y Vino. La otra, la de las transgresiones sexuales en serie que escalan por decenas, jamás la abrieron. Curiosa ceguera para quienes se dedican a guiar personas como principal oficio. Nunca supieron de Poblete, nunca del jesuita Guzmán, tampoco de Ibacache, ni de Leturia, ni de Denegri, ni de la larga lista de espera que acumulaban. Me intrigó el por qué en esos casos no invocaron el recurso de la doble vida y en la de Poblete sí. ¿No es la estricta sujeción al superior una de las características de la orden? ¿Poblete no contaba sus felonías? Si no lo hacía, es que la bisagra estaba bien firme entre ambas personalidades y conocía muy bien las consecuencias de sus actos. San Renato sabía lo que hacía el pícaro Poblete y no lo incluía en la Cuenta de Conciencia anual con su provincial. Si, por el contrario, era sincero con su superior, era imposible que la congregación estuviera al margen de los hechos. La segunda teoría, a mi juicio la más pintoresca, fue que usaba un “disfraz de jesuita”. Según esa interpretación, Poblete en realidad habría hecho un *cosplay* durante cincuenta años y la congregación no se enteró. Es decir, la Compañía de Jesús que ha hecho de sus capacidades intelectuales un sello y de su dominio de la realidad un atributo, jamás vio signos de que tenían un infiltrado. Estos argumentos son una manera delirante de alejarse de los desechos tóxicos de

una vida de mentira, también una falta de respeto para las mujeres que se atrevieron a denunciar: crearon durante décadas un discurso de fe bordado de amor al prójimo y al desposeído y bajo ese discurso lo que había disimulado era soberbia y una prodigiosa ansia de poder. Cuando la mentira se descubrió, otra institución terminó por desplomarse frente a los ojos de los chilenos y chilenas.

Había pocas cosas en las que seguir confiando.

\*\*\*

Ocurrió un martes de mayo de 2019, durante un cambio de semáforo en la distancia que hay entre una esquina de Vicuña Mackenna y el bandejón central a la altura de la estación de metro Los Quillayes, en la línea 4. Mientras esperaba el verde para peatones para cruzar la avenida escuché la voz de un hombre elevarse. Era el volumen de alguien ofuscado que le reprochaba con sorna a otra persona haberle incomodado el paso sin siquiera pedir permiso o disculparse. Miré fugazmente hacia atrás. El hombre debió tener poco más de treinta años, estaba bien peinado –pelo muy oscuro, raya al costado– y llevaba bajo el brazo algo como un bastón o una muleta. Había unas seis personas esperando el semáforo, pero por la orientación de su rostro, supuse que le hablaba a una mujer de una edad similar, vestida de blusa, chaqueta y falda gris, el conjunto habitualmente usado como uniforme de empresa por oficinistas y dependientes. El hombre siguió lanzando frases, muy articuladas, mientras cruzábamos la calle, enrostrándole a la mujer sus malas maneras. Yo caminaba dándole la espalda a él, pero detrás de ella, a media distancia entre ambos. Al llegar al bandejón bajo el metro elevado, la mujer giró la cabeza, dijo “cállate” y añadió algo que bien pudo ser un insulto, pero que no alcancé a distinguir. El hombre respondió firme “no sabes argumentar, maleducada”. Usó la palabra “argumentar” y “maleducada”, pensé. No dijo groserías. Ella apuró el paso. Cuando la mujer subía las escaleras de la estación, el hombre le gritó algo que parecía una arenga: “Se nota que eres una esclava del sistema, mírate cómo andas vestida, seguro trabajas en el *retail*, eres una rota de *retail*”. Fue su venganza. Dijo “*retail*”, pensé. La frase me retumbó en el cuerpo por el resto del día, como un eco punzante y venenoso.

El sociólogo francés Pierre Bourdieu nació en una familia obrera de una provincia francesa, una región en donde se hablaba un dialecto que lo alejaba de la lengua educada de la capital. Bourdieu era hijo de un trabajador agrícola, cursó sus estudios en instituciones públicas –liceo, escuela normal– y fue ascendiendo posiciones gracias a una mente capaz de reflejar de forma brillante en sus obras –*La distinción*, *Capital cultural escuela y espacio social*, entre otras– el entramado de relaciones y poder de su entorno.

En sus ensayos, Bourdieu escribió sobre los “errores de blanco” que surgen entre quienes viven alejados de las decisiones y se sienten atropellados en sus derechos. El fenómeno se da entre las personas que se perciben como víctimas de un sistema injusto; ciudadanos que escuchan discursos políticos enarbolar eslóganes que no pasan de ser un saco de palabrería que los candidatos traicionan apenas llegan al poder. Es una población para la que no hay progreso ni alivio, solo asperezas. Sienten que la democracia les falla. Una experiencia repetitiva que provoca frustración y decanta en ira. Si no hay justicia ni recompensa por el trabajo bien hecho –o al menos la percepción de que existe tal cosa– lo que queda es el desquite, pero ¿con quién desquitarse? No con los políticos que están demasiado lejos de su círculo, ni con entidades abstractas sino con aquello que está más cercano, tal y como ya había sucedido durante los meses anteriores en distintos incidentes: quemando los mismos buses que usan cada jornada, destruyendo los liceos maltrechos, golpeando auxiliares en las salas de urgencia de los

hospitales, atacando al profesor de la escuela municipal que recibe un sueldo miserable.

El vertedero o “blanco” de la rabia acumulada es más fácil de personificar en el vecino ligeramente distinto, como lo hacía aquel pandillero neonazi que entrevisté en 2006. El primer movimiento es buscar la manera de situar el objetivo del desquite en el escalón en donde circulan los dignos de repudio. Abanicar entonces las infinitas distinciones posibles, agitarlas separando a la gente según castas, aspecto, costumbres, lengua, lugar de residencia y de educación. Una vez determinado el blanco y su ubicación en la jerarquía del poder –siempre algunos centímetros más abajo del propio–, ejecutar a mansalva, usando ese arsenal de insultos, aquello que los chilenos manejamos con tanta habilidad, la suficiente como para incluso darle la apariencia de una declaración progresista a una estocada profundamente hiriente: eres un esclavo del sistema, un empleado, un roto, no como yo que al menos sé cómo funciona el mundo. Escrutar en la víctima una señal –su cara, su uniforme de trabajo, su forma de hablar– y luego expulsar la ira en un arrebato que la disponga aun más cerca del foso en donde no se alcanza a ver el horizonte, la esquina en donde esperan los que nacen con el futuro clausurado. Hacerlo y luego vivir fugazmente la fantasía de pertenecer al club de los privilegiados a salvo de la zozobra, aquellos que predicán desde la cúspide el evangelio del mérito y el esfuerzo, mientras el resto espera una señal del semáforo para avanzar.

En octubre, cuando vi por televisión la imagen de la estación Los Quillayes envuelta en humo, como una burbuja metálica hirviendo en medio del estallido del viernes 18, recordé la escena de la que fui testigo en esa esquina durante el otoño. La ira circulando como un fuego repentino que busca una salida.

\*\*\*

La normalidad consistía en esperar un futuro precario. Había señales que lo indicaban. Estaban a la mano, pero dispersas como puntos pequeños dispuestos sobre una hoja en blanco. No era necesario ser experto. Uno de esos puntos era, por ejemplo, un informe del Banco Central difundido en abril de 2019 que advertía que el endeudamiento de los hogares chilenos había crecido más que el último máximo registrado el año anterior. La frase exacta, escrita en aséptica jerga de economista, informaba lo siguiente: “Los hogares registraron un stock de deuda equivalente a 73,3% del ingreso disponible, superior en 3,2 puntos porcentuales al cierre del año anterior” <sup>20</sup> . Agregaba que la riqueza de los hogares chilenos había disminuido en un 3,6% respecto del anterior periodo. Unas semanas más tarde, otros puntos aparecieron sobre el lienzo. Luis López-Calva, el encargado regional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo advertía en una entrevista que parte importante de la población considerada como “clase media” en algunos países latinoamericanos como Chile, en realidad era un grupo beneficiado del auge de los *commodities* que no había consolidado su nuevo estatus. Frente a cualquier acontecimiento inesperado –enfermedad, desempleo– rápidamente volvían a su situación original de pobreza <sup>21</sup> . El experto añadía que entre los países estudiados, habían aumentado los años necesarios de trabajo para comprar una vivienda propia: “O la clase media se ha vuelto más precaria o se ha vuelto más difícil ser de clase media”, concluía.

Según una encuesta publicada en mayo de 2019 en *La Tercera* , ocho de cada diez personas nacidas después de 1980 “vive actualmente bajo la presión del endeudamiento y un significativo 41% de chilenos entre dieciocho y veintiún años, ya se declara endeudado”. La generación de chilenos con más años de educación formal en la historia del país debe dinero aun antes de egresar de la educación superior. Un 25% de los encuestados declaró además haber pedido un crédito para pagar otro.

Las señales esparcidas iban creando una figura que contradecía a cierta élite local –política y económica– que describía una clase media que parecían desconocer totalmente, o de la que apenas sospechaban sus condiciones de vida. Cada declaración que hacían dejaba en evidencia que quienes estaban a cargo del gobierno sencillamente no hacían ni siquiera el esfuerzo por entender las demandas de los sectores medios.

Luego del derrumbe de las expectativas económicas sembradas durante la campaña, el gobierno, a través de sus autoridades, de manera constante hacía declaraciones cuyo contenido contradecía, no solo de la experiencia de la mayoría, sino además de los mismos hechos. Hubo un ministro de la Vivienda que, por ejemplo, aseguraba en una reunión técnica que la gran mayoría de los chilenos “somos propietarios” de una casa de residencia, otra de descanso y dos departamentos, eso era lo habitual para él; hubo un subsecretario de Salud que sostuvo en una entrevista de radio que para los ancianos enfermos acudir de madrugada a un consultorio para lograr una hora de atención, era una manera de hacer vida social; y un ministro del Trabajo que intentó convencer a una audiencia de un programa matinal que cualquier trabajador podía sentarse de igual a igual con su jefe a discutir sus horarios laborales, como si se tratara de un acuerdo entre amigos. Eran ejemplos que tal vez podrían haber pasado por anecdóticos de haber sido aislados, pero marcaban un patrón de pensamiento irritante. Lo que aparecía ante la opinión pública era un discurso, no solamente distinto a su propia experiencia diaria, sino totalmente contrario a ella. Es decir, lo que se percibía de parte de la autoridad en el gobierno no solo era indolencia, sino franca burla. No existía solución de continuidad entre los discursos de gobierno y la realidad. Tampoco la voluntad para establecer una agenda sobre los desafíos del futuro.

Una nota aparecida el 13 septiembre de 2018 en *La Segunda* sostenía que por cada millón de dólares invertido en Chile, se creaba menos de un empleo permanente. Esta mezquina proporción se debía en parte al progresivo avance de la automatización que extinguirá empleos y funciones en tasas altísimas, sobre todo en labores repetitivas o físicas como en la gran minería. Esa información me recordó un artículo de Ciper publicado en 2017 que citaba el informe de la consultora internacional McKinsey Global. La consultora estimaba que en Chile, solo en el sector de las grandes tiendas de venta al detalle, el 51% del trabajo podía ser automatizado “lo que eventualmente podrá producir una pérdida de ochocientos mil empleos”. Sobre esta hecatombe al acecho no se hablaba más que con frases hechas con regusto terapéutico; decían, por ejemplo, que en los tiempos que corren es necesario “reinventarse” laboralmente varias veces en la vida, como quien recomienda cambiar los atuendos de temporada. Pero ¿qué significaba “reinventarse laboralmente” para una población como la nuestra, si según el último informe de la OCDE sobre habilidades básicas de alfabetización, aritmética y de resolución de problemas del entorno, los chilenos ocupamos el último lugar de la lista? Si para la OCDE no contamos “con las habilidades básicas necesarias para desempeñarse en un mundo digital”. ¿Cómo nos vamos a reinventar entonces? No había una respuesta clara para todas esas dudas.

El 8 de octubre de 2019, diez días antes de que la sucesión de protestas, saqueos e incendios comenzara, el presidente Sebastián Piñera había asegurado en una entrevista en un programa matinal de televisión que Chile era un “oasis” de estabilidad democrática en una región acechada por crisis institucionales y económicas. Piñera acudía, en su estilo, al tópico de la excepcionalidad chilena, aquel lugar común del que tanto se enorgullecía la élite política y económica de un país que durante tres décadas había exhibido cifras de crecimiento y señales de prosperidad material nunca antes alcanzadas en su historia. “Chile era la colonia más pobre de España”, solía recordar Piñera en sus entrevistas a medios internacionales, como para que sus interlocutores valoraran aun más la gesta de la que él se mostraba a la vez artífice y protagonista.

Ese ideal era compartido por la élite de dirigentes políticos y por los grandes empresarios locales, que solían mirar con suspicacia las críticas por la desigualdad de ingresos que el modelo de desarrollo provocaba. Lo importante era el crecimiento económico, repetían los analistas de los principales centros de estudio. Al cabo de un año de gobierno, las señales indicaban estancamiento económico y el desempleo no cedía. Pronto el eslogan de campaña tuvo que ser reemplazado por “Chile en marcha”, una expresión tomada de la carrera presidencial de Emmanuel Macron, que sugería un presente continuo de trabajo conjunto: la república está avanzando, era el mensaje que el gobierno de Piñera pidió prestado a su par francés. La pregunta que nadie se hacía era ¿hacia dónde?

\*\*\*

La normalidad consistía en hacer como si nada.

Eso sucedía hasta la semana en que grupos de estudiantes secundarios de Santiago comenzaron a evadir el pago del metro saltando los torniquetes. Lo hacían en tumultos. Mi primer pensamiento cuando los vi corriendo escaleras abajo estuvo teñido por el temor; pensé que podían tropezarse por la escalera, arrastrar a otros pasajeros, a una mujer con un niño, a un anciano, caer en el andén de los trenes. Imaginé muchas formas de accidentes y pensaba en todas las posibilidades que existían para que salieran heridos, pero en ninguna de esas escenas de fantasía oscura aparecían carabineros vestidos para un combate. Mientras escribo este párrafo recuerdo esa semana como si se tratara de un pasado lejano en el que yo era otro, cuando todos éramos distintos. Como si ese momento –hace apenas cuatro meses– ya perteneciera a una era clausurada de nuestra historia. Tengo en la memoria las escenas de los tumultos de jóvenes irrumpiendo en el metro, y recuerdo haber escuchado decir que ese tipo de cosas no sucedían en países civilizados. Lo decía alguien que subrayaba la palabra *civilizado*, evocando algún viaje transatlántico de vacaciones o alguna lectura digestiva de verano. Alguien a quien decidí no volver a hablarle después de que fuera octubre. Durante la semana en que las evasiones del pago del metro de los secundarios se intensificaron pensé mucho en las notas de prensa escritas durante la llamada Revolución de los Pingüinos de 2006. Eran artículos que ponían especial énfasis en las características de la generación que la lideró; hacían hincapié en que se trataba de estudiantes educados durante la transición que no habían heredado el miedo a la dictadura de sus mayores y usaban la nueva tecnología de los mensajes de texto para coordinarse. En 2019, transcurrida más de una década de aquel movimiento, pensé que habría que repetir el ejercicio y sumar rasgos del mundo en el que se habían criado los escolares que saltaban los torniquetes. El más importante de ellos era que la educación pública no era ya ni siquiera una meta, sino poco más que un montón de ruinas de las que nadie se quería hacer cargo, ni la oposición, ni menos un gobierno que a poco de asumir anunció que solo se salvarían los mejores y que para el resto lo único que tenía que ofrecer era un proyecto de Aula Segura. La generación de secundarios de 2019 era la del sálvese-quien-pueda, la que había contemplado desde la infancia el derrumbe institucional. Niños y niñas que habían visto que las leyes se compran, los impuestos se evaden o eluden, los generales de Ejército viven como magnates y los de carabineros como gerentes; que el agua se privatiza, que las AFP ganan millones pero dan jubilaciones de hambre; que las isapres se indignan porque las mujeres tienen útero; que el Estado hace recuento de los jóvenes muertos en el Sename mientras aprueban leyes para que la policía detenga adolescentes pobres por tincada. Estos escolares de 2019 habían visto en vivo y en directo que las leyes tienen el diseño de un embudo que encierra solo a los pobres y que la ética es una religión muerta que ya nadie practica. Con todo lo aprendido en mente, escucharon que la élite política le sugería a sus

padres madrugar aun más para alcanzar a cruzar el torniquete en horario económico o aprovechar de comprar flores porque bajaron de precio. Para estos adolescentes ya ni siquiera valía la pena tomarse los liceos, en donde quedaba poco que defender. El recurso usado entonces fue el desborde, saltar del bote náufrago y hacerse notar en el metro, el último reducto en donde era posible el encuentro entre los distintos fragmentos de una capital segregada con bisturí, tal como la educación.

En eso pensé durante esos días, haciendo círculos mentales con mi propia historia, hasta el viernes 18 de octubre en la tarde, cuando el metro dejó de funcionar y las principales calles de Santiago comenzaron a poblarse de peatones buscando alguna forma de volver casa, consumidos por un hastío profundo que primero era un murmullo espeso que fue oscureciéndose hasta que reventó la noche.

Primero eran los escolares saltando torniquetes, después los miles de santiaguinos sin transporte caminando a sus casas con resignación, enseguida las protestas espontáneas en la calles, las fuerzas especiales inundando estaciones; luego los vándalos, los incendios, la periferia ardiendo, los carabineros replegados, las autoridades ausentes, el mutismo de una oposición pasmada, la foto de un presidente en un restorán de Vitacura mientras las estaciones de metro eran quemadas, ¿por quiénes? Un día después, el vértigo, el descalabro y el absurdo de un mandatario declarándole la guerra a un enemigo incógnito en cadena nacional.

Lo que siguió fue tanto como una vida entera confundida en imágenes y escenas superpuestas. Esto ya lo había visto antes, no quería volver a verlo, pero ahí estaban las tanquetas militares llegando a Plaza Italia, los soldados en tenida de combate avanzando por Providencia, el rostro de un estudiante con la cuenca de los ojos ensangrentadas porque carabineros estaba disparando balines a la cabeza, el filo hiriente del silencio de una noche de toque de queda.

\*\*\*

El martes 10 de diciembre de 2019 el presidente Sebastián Piñera encabezó la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Luego de hacer un rodeo retórico sobre el desarrollo del concepto en distintas legislaciones, el primer mandatario hizo un llamado a “fortalecer una cultura de derechos humanos que se anide en el corazón y en el alma de todos los chilenos, porque la naturaleza humana y la historia nos muestra que cada vez que dejamos un espacio o damos una facilidad se vuelven a repetir hechos dolorosos”.

Eso dijo en la mañana del martes.

En la noche de la misma jornada, dos personas –un hombre adulto y una adolescente de quince años– fueron gravemente heridas por bombas lacrimógenas lanzadas por carabineros durante las manifestaciones en Plaza Italia. Las bombas les dieron de frente provocándoles un daño severo en sus cráneos. Un día después del discurso del presidente, Sergio Micco, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, informó que durante las manifestaciones de la tarde anterior hubo catorce casos de heridos por la acción de agentes del Estado. Micco sostuvo que “el Instituto se basa en lo que ve y lo que ha visto anoche es terrible. Realmente, esto tiene que terminar” y añadió que el miedo se estaba expandiendo y que eso le hace mucho daño a la sociedad civil chilena”. Luego de escuchar al director del INDH leí que Fabiola Campillai, una mujer herida por una bomba lacrimógena mientras esperaba micro la tarde del 26 de noviembre, le habría pedido a sus familiares que no salieran a la calle, porque era peligroso. Estaba aterrada. Campillai, tal como las personas heridas el martes 10 de diciembre, recibió el impacto de la bomba en la cara. Sobrevivió, pero quedó ciega.

El mismo día de las declaraciones desesperadas de Sergio Micco, Ciper publicó un reportaje

detallando un hallazgo: Carabineros había estado usando durante las manifestaciones un tipo de munición del que no hay registro en sus protocolos. El proyectil, conocido como “bean bag”, está compuesto por una bolsa o saquito que en su interior contiene numerosas esferas de plomo del tamaño de una legumbre. “Los fabricantes advierten que no debe ser disparado a la cabeza, cuello, tórax ni columna vertebral, pues podría causar la muerte”, explicaba el reportaje. Ese habría sido el proyectil que el 28 de octubre le fracturó el cráneo a un hombre de identidad reservada durante una de las protestas. Aquel caso fue recogido en el informe de Human Rights Watch. La nota de Ciper recordaba además que hasta diciembre había más de un millar y medio de personas que habían sido heridas por perdigones desde el inicio del estallido.

El jueves 12 de diciembre y como reacción a los graves cuestionamientos sobre la institución, Mario Rozas, general director de Carabineros, anunció cambios en la estructura policial. En adelante, las llamadas “Fuerzas Especiales” serán conocidas como “reparticiones de control de orden público”. En su discurso Rozas informó además que en el proceso de modernización, Carabineros “le pedirá la ayuda de distintas instituciones, como INDH y Defensoría de la Niñez”. Esto último resultaba curioso, porque ambos organismos habían sido los encargados de recoger las denuncias de violaciones a los Derechos Humanos incluidas en los informes internacionales, los mismos que Carabineros había rechazado y cuestionado públicamente. En su reunión con la prensa, el general Rozas no hizo referencia a las denuncias sobre agentes químicos presentes en los gases lacrimógenos, sustancias que habían provocado irritaciones y quemaduras entre manifestantes reprimidos por la policía.

El viernes 13 de diciembre en la mañana fue dado a conocer el informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El documento hacía un contundente balance de los abusos cometidos por agentes del Estado durante la crisis hasta ese momento. Además de incluir la información proporcionada por las instituciones locales, el equipo de la ONU recopiló denuncias y registró testimonios, entre los que se cuentan veinticuatro casos de violencia sexual contra mujeres, hombres, niñas y un niño en el contexto de las protestas. “La violencia sexual reportada –detalla el informe– incluyó violación, amenazas de violación, tratamiento degradante, comentarios homofóbicos o misóginos, golpes o actos que causan dolor en los genitales y manoseos”. Después de conocer el documento de Naciones Unidas, el gobierno puso en duda la veracidad de los antecedentes, sugiriendo que podía tratarse de “noticias falsas”.

\*\*\*

Durante la semana inmediatamente posterior al estallido vi en el noticiero de TVN la historia de dos mujeres de mediana edad de Puente Alto, de la misma zona que yo había visitado en 2010 reportando sobre los guetos urbanos. La cámara las mostraba sentadas junto a un gran contenedor de basura que les brindaba algo de sombra. Ambas vestían una especie de uniforme raído y permanecían allí en el medio de un eriazó en una población en donde una turba saqueó y quemó los supermercados que existían. La periodista explicaba que durante años los vecinos no contaban con grandes comercios, ni menos con servicios habituales en otros barrios de la ciudad –cajeros automáticos, centros de pago, comisarías– y que el solo hecho de que se instalaran esos supermercados les cambió la vida. Los vecinos tenían dónde comprar sin gastar dinero en viajes al centro de la comuna y los pequeños almacenes familiares podían abastecerse fácilmente. Después de la noche del 18 de octubre no quedó nada. La reportera conversaba con las mujeres que miraban el paisaje insolado, las veredas sin árboles y las casas dispuestas como cajas de cartón arrojadas sobre suelo desnudo. Una de ellas, aparentemente la más vivaz, habló. Contó que trabajaba en uno de los supermercados cuidando autos, que gracias a eso tenía ingresos

diarios en efectivo. La reportera le preguntó el monto mensual que ganaba, “Cincuenta mil pesos”, le respondió la mujer. Enseguida la periodista sutilmente intentó que le aclarara si esa era una porción importante de sus ingresos. La mujer le respondió que de eso vivía, que no era una fracción del total, que eso era todo. Luego hizo una pausa y, como para matizar la rudeza con que la vida la ha tratado, mostró una botella de Coca-cola que alguien le regaló para pasar el calor.

Transcurridas las primeras semanas desde el 18 de octubre los expertos y analistas habituales de los medios trataban de explicar lo sucedido –¿estallido? ¿revuelta?– como si hablaran sobre los prodigios de un animal fantástico, una criatura mitológica que había irrumpido en la realidad, alterándola, poniéndola bajo interrogantes que nadie jamás hubiese querido formular. Un dragón que revoloteaba, arrojaba llamaradas, alteraba las ideas preconcebidas; un monstruo espeluznante que azotaba los algoritmos de vigilancia, las encuestas de satisfacción vital y la descripción de nuestro país como un conjunto de promedios y rankings de informes internacionales. ¿De dónde había salido esta bestia? ¿Cómo fue que su furia llegó hasta nosotros si hasta anteayer todo era satisfacción y comodidad? Había cosas que no podían pasar aquí, esa era la convicción de políticos, economistas, analistas y empresarios. De eso nos habíamos convencido después de tres décadas de democracia. Éramos un país modelo y un oasis, repetían, pero en gran medida también éramos un espejismo.

- 
- [1](#) . “El clasismo sigue perpetuándose pero ahora existen herramientas culturales para impugnarlo”. Entrevista que le hice a Raimundo Frei, sociólogo PNUD, en *La Tercera* , el 1 de diciembre de 2019.
  - [2](#) . De hecho, en la encuesta sobre Innovación y Desarrollo realizada durante 2018 por el Instituto Nacional de Estadísticas dio como resultado que el gasto en innovación y desarrollo como porcentaje del PIB había bajado sostenidamente desde 2016. Así, pasó de un 0,37% en el año 2016 a un 0,36% en el 2017. Chile continuaba siendo el país miembro de la OCDE con menor inversión en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB, más de seis veces por debajo del promedio de la OCDE.
  - [3](#) . Informe del Banco Central, abril 2018.
  - [4](#) . Según la Comisión Nacional de Productividad, en 2019, el promedio de espera para una operación en los servicios públicos era de trescientos ochenta días.
  - [5](#) . Indicadores económicos y sociales de Chile 1960–2000, Banco Central de Chile.
  - [6](#) . Un 77,3% de las familias erradicadas fueron desplazadas a solo cinco comunas del área sur de Santiago: La Pintana, Puente Alto, La Granja, San Bernardo y Peñalolén. Fuente: Memoria Chilena.
  - [7](#) . Estudio de guetos en Chile. Centro de estudios urbanos Atisba, noviembre 2010.
  - [8](#) . *Cuánto y cómo cambiamos los chilenos. Balance de una década censo 1992–2001*. Cuadernos Bicentenario. Instituto Nacional de Estadísticas, 2003.
  - [9](#) . Ninguno de los tres más destacados que luego hicieron carrera parlamentaria –Camila Vallejo, Giorgio Jackson y Gabriel Boric– había estudiado en una escuela pública.
  - [10](#) . *La Tercera* , 22 de septiembre de 2012.
  - [11](#) . Según cifras del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, entre 1999 y 2013 fue en la población más joven donde proporcionalmente aumentó de manera más importante la transmisión: en el grupo entre quince y diecinueve años el alza fue de un 125%, mientras en los jóvenes entre diecinueve y veinticuatro años fue de un 113%.
  - [12](#) . “Chile’s sexual awakening”, *The New York Times* . 9 de septiembre de 2008.
  - [13](#) . Según un estudio del Centro Internacional para Estudios Penitenciarios de 2013, Chile era el país sudamericano con la mayor tasa de personas en prisión. A nivel mundial ocupaba el lugar cuarenta y tres.
  - [14](#) . Según datos publicados por el Ministerio de Planificación en 2007, la mayor parte de los condenados cumpliendo pena son adultos jóvenes y el 64% no completó su educación básica.
  - [15](#) . El único condenado por el crimen del matrimonio Luchsinger McKay fue el machi Celestino Córdova.
  - [16](#) . Chile pertenece al grupo de países de la OCDE con bajos niveles de confianza según un informe de 2016: menos del 13% de los chilenos expresa confiar mucho en los demás (36% en el promedio de OCDE); también, los jóvenes chilenos tienden a confiar menos en el gobierno que el resto de la población.
  - [17](#) . Pido prestada la expresión del título del libro *El sentimiento aristocrático, élites chilenas frente al espejo* de María Rosaria Stabili.
  - [18](#) . *El desconcierto* , 19 de julio de 2019.
  - [19](#) . *El Mercurio* , 24 de enero de 2020.
  - [20](#) . Informe de cuentas nacionales por sector institucional del Banco Central, abril 2019.
  - [21](#) . Entrevista a Luis Felipe López-Calva. “Falta de seguridad económica lleva a Chile a no ser un país de clase media”, *La Tercera* , 22 de abril de 2019.

**Encuéntranos en...**

---



## Otros títulos de la colección

---





# SIÚTICO

Arribismo, abajismo y vida social en Chile

ÓSCAR CONTARDO

 Planeta

ÓSCAR CONTARDO

# REBAÑO



 Planeta